

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

75ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

15 DE MARZO DE 1994

Presidencia del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor CONRADO H. STORANI

y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
don JUAN C. OYARZUN

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.
OTERO, Edison
OYARZÚN, Juan C.

RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe
SNOPEK, Guillermo E.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Ovaldo N.
JUÁREZ, Carlos A.
MIRANDA, Julio
PEÑA de LÓPEZ, Ana
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
RUBEO, Luis

A CARGO DEL PODER EJECUTIVO:

MENEM, Eduardo

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 5922.)
2. Por invitación del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, el señor senador por Río Negro ingeniero Faustino M. Mazzucco procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 5922.)
3. Lectura de las notas y decretos relacionados con la convocatoria a esta sesión especial. (Pág. 5922.)
4. Moción del señor senador Molina para modificar el plan de labor acordado en la reunión de presidentes de bloque. Se aprueba. (Pág. 5923.)
5. Consideración sobre tablas por la Cámara constituida en comisión del proyecto de ley en revisión sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida (modificación de la ley 22.431) (C.D.-69/92). Se aprueba. (Pág. 5924.)
6. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Comercio en el proyecto de ley en revisión por el que se crean zonas francas en todo el territorio de la República Argentina (C.D.-102/93). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 5927.)
7. Manifestaciones del señor senador Massat con relación al tratamiento del proyecto de ley en revisión por el que se crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. (Pág. 5975.)
8. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 5976.)
 - II. Inserciones. (Pág. 5982.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 9 del martes 15 de marzo de 1994:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Propongo que por Presidencia se solicite a los señores senadores que se encuentran en sus despachos que concurran al recinto para poder comenzar la sesión. Tengo entendido que hay veintinueve señores senadores en la casa, de modo que estamos en condiciones de sesionar.

Sr. Presidente (Storani). — Hay treinta y tres señores senadores en la casa, señor senador.

Estamos haciendo los llamados correspondientes a los despachos de los senadores para que concurran al recinto. Proseguiremos con esos llamados.

Sr. Genoud. — Muy bien, señor presidente.

Sr. Presidente (Storani). — Ruego a los señores senadores que están en el recinto que, por favor, no se retiren. He visto que algunos señores senadores han salido de la sala y eso puede demorar el comienzo de la sesión.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Como entiendo que el micrófono está abierto, aprovecho para hacer un ruego especial a los señores senadores que están en sus despachos a los efectos de que concurran al recinto para que podamos comenzar la sesión.

Los presidentes de bloque hemos acordado sesionar hoy; además, hay varios asuntos cuya consideración fue aprobada casi por unanimidad, como es el tema de los discapacitados.

Por ello, solicito la presencia de los señores senadores en el recinto para iniciar la sesión, con el ruego especial de que lo hagan a la mayor brevedad.

Sr. Presidente (Storani). — La Presidencia exhorta a los señores senadores que están en sus despachos a que concurran al recinto para facilitar el comienzo de la sesión.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Storani). — Queda abierta la sesión especial pública.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Storani). — Invito al señor senador por Río Negro ingeniero Faustino M. Mazzucco a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Mazzucco procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3

SESION ESPECIAL

Sr. Presidente (Storani). — Por Secretaría se dará lectura de las notas presentadas por varios señores senadores y de los decretos de convocatoria a la sesión especial.

Sr. Secretario (Piuzy). — (Lee)

Sr. Presidente (Storani). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley¹. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: en este proyecto de ley que acabamos de sancionar existe un error. En el artículo 4º se habla de la derogación de la ley 19.274 cuando en realidad debería decir 19.279.

Por lo expuesto, solicito una reconsideración de dicho artículo o bien que se autorice a la Presidencia para realizar la corrección correspondiente.

Sr. Presidente (Storani). — Si hay asentimiento para autorizar a la Presidencia, se hará la corrección pertinente.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Storani). — Se procederá en consecuencia.

6

ZONAS FRANCAS

Sr. Presidente (Storani). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Comercio en el proyecto de ley en revisión por el que se crean zonas francas en todo el territorio de la República Argentina. (Orden del Día Nº 1.099.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Comercio, han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-102/93), sobre creación de zonas francas en todo el territorio de la República Argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación de la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) Zona franca: es el ámbito que se define en el artículo 590 del Código Aduanero;

b) Territorio aduanero general: es el ámbito que se define en el apartado 2 del artículo 2º del citado código;

c) Territorio aduanero especial: es el ámbito que se define en el apartado 3 del artículo 2º del mismo código;

d) Terceros países u otros países: es el ámbito geográfico sometido a la soberanía de otros países incluidos los enclaves constituidos a favor de otros Estados.

TITULO II

De las zonas francas

Art. 2º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyendo las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente, no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas regiones geográficas que por su situación económica crítica y/o vecindad con otros países justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, convendrá con los gobiernos provinciales el establecimiento de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio.

Las zonas francas a crearse deberán estar localizadas a una distancia no menor de trescientos (300) kilómetros entre sí, no pudiendo establecerse más de una por provincia.

A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera que sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial respectivo, exigirá al concesionario una inversión mínima, conforme a la Ley de Convertibilidad.

Art. 3º — La creación de las zonas francas previstas en el artículo anterior se podrá materializar en aquellas provincias que hayan adherido a las previsiones de la presente, a través de un convenio de adhesión a ser celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias. Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en todos sus términos por ley provincial.

El Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales convendrán la creación y puesta en funcionamiento de un organismo federal encargado de divulgar y promocionar las actividades de las zonas francas creadas en el territorio nacional.

Objetivos

Art. 4º — Las zonas francas tendrán como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que, el aumento de la eficiencia y la disminución de los costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas, se extiendan a la inversión y al empleo.

El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial nacional, debiendo con-

¹ Ver el Apéndice.

tribuir al crecimiento y a la competitividad de la economía e incorporarse plenamente en el proceso de integración regional.

Actividades

Art. 5º — Las zonas francas deberán constituirse en polos de desarrollo de las regiones donde se establezcan mediante la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles en la misma, dentro de las condiciones fijadas en la presente ley y en los decretos que la reglamenten.

Art. 6º — En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, estas últimas con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países. No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrán fabricar bienes de capital los que, a fin de su nacionalización, seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (NCE) y de las restantes normas tributarias que correspondan.

Art. 7º — En las zonas francas las mercaderías pueden ser objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación y de las manipulaciones ordinarias, destinadas a mejorar su presentación o calidad comercial o acondicionarlas para el transporte, tales como división o reunión de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje. La mercadería puede ser objeto de transferencia.

Igualmente podrán ser objeto de actividades de producción con destino exclusivo a terceros países, tales como transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento.

Art. 8º — No regirán para las operaciones de introducción o extracción hacia o desde la zona franca restricciones económicas ni depósitos previos a las operaciones de comercio internacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca en ciudades y pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo aconsejen.

En aquellas provincias fronterizas cuya densidad demográfica sea inferior a dos (2) habitantes por kilómetro cuadrado el Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar las operaciones previstas en este artículo en cualquier lugar de su territorio.

Art. 10. — Queda prohibido el consumo de mercaderías dentro de la zona franca, en aquellos casos distintos a las actividades propias del funcionamiento de la misma.

Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación para el consumo de vituallas destinadas al personal que preste servicios dentro de la zona franca.

Art. 11. — Las horas y lugares de ingreso y egreso de personas y mercaderías hacia o desde la zona franca serán los determinados por el comité de vigilancia de la misma de conformidad con las reglamentaciones que éste dicte.

Art. 12. — Estará prohibido habitar permanente o transitoriamente dentro de la zona franca.

Funciones y autoridades

Art. 13. — Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 14. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de:

- a) Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca, definir los criterios de selección y ordenar los proyectos;
- b) Elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad de aplicación el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca. Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de la concesión de la explotación de la zona franca, las causales de revocación, las sanciones por incumplimiento, como también las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona, así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios. Dentro del plazo de noventa (90) días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento y operación que le ha sido elevado, pudiéndose prorrogar el mismo por treinta (30) días más, reputándose aprobado el proyecto que no haya merecido observaciones dentro de ese plazo;
- c) Llamar a licitación pública, nacional e internacional para la concesión de la explotación de la zona franca;
- d) Adjudicar la concesión de la zona franca con aprobación de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá hasta noventa (90) días para expedirse a partir de la fecha de evaluación de los antecedentes y resultados del acto licitatorio para aprobar el mismo. Si en este término la autoridad de aplicación no se expidiera se considerará firme la adjudicación efectuada por el gobierno provincial;
- e) Las demás que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 15. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir un organismo provincial público o mixto, en el que deberán estar representados los municipios del área de influencia de la zona de que se trate y entidades empresarias y de la producción.

Dicho organismo tendrá las funciones de comité de vigilancia.

Art. 16. — El comité de vigilancia de la zona franca tendrá las siguientes funciones:

- a) Promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológica que conduzcan a un mayor afianzamiento de los mercados externos;

- b) Remitir toda información que requiera la autoridad de aplicación, y servir a la misma como órgano de consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades de la zona franca;
- c) Fiscalizar la provisión de información estadística adecuada, oportuna y suficiente sobre los principales indicadores económicos y comerciales de la zona franca requerida al concesionario y al usuario, la que será de libre consulta;
- d) Evaluar el impacto regional de la zona franca y articular su funcionamiento con los planes provinciales y municipales identificando efectos perniciosos y costos de la zona, los que deberán estar a cargo de las empresas usuarias que los generen;
- e) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de la zona franca y en su defecto informar a la autoridad de aplicación sobre las mismas;
- f) Auditar periódicamente las medidas de vigilancia y control necesario de accesos y límites de la zona franca;
- g) Percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo forma de un pago único o en un canon periódico;
- h) Garantizar la concurrencia de los usuarios en el acceso e instalación en la zona franca conforme al reglamento de funcionamiento y operación, y atender y dar respuesta a sus reclamos;
- i) Hacer cumplir las leyes y regulaciones aplicables, el reglamento de funcionamiento y operación, las normas internas de la zona franca y los acuerdos de concesión y operación;
- j) Velar por el cumplimiento de las normas sobre la conservación del medio ambiente, y en especial el tratamiento de los efluentes originados en la zona franca;
- k) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — El comité de vigilancia propiciará la libre concurrencia en la prestación de servicios dentro de la zona franca, previéndolo en el reglamento de funcionamiento y operación respectiva. Deberá aprobar tasas y cargos para todos los servicios y concesiones dentro de la zona franca, asegurando el tratamiento uniforme en condiciones equivalentes para los usuarios y mercaderías.

Art. 18. — La explotación de la zona franca será de carácter privado o mixto. Las obras y la infraestructura necesarias correrán por cuenta del concesionario.

Art. 19. — La explotación se ofrecerá por licitación pública, nacional e internacional, la que se ajustará a las condiciones que establezcan la comisión de evaluación y selección prevista en el artículo 14 de la presente.

Art. 20. — El o los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Realizar las obras de infraestructura y conexiones de servicios básicos en la zona franca que sean necesarios para su normal funcionamiento y que formen parte del proyecto aprobado por la comisión de evaluación y selección y la autoridad de aplicación;
- b) Alquilar a los usuarios lotes para la construcción de edificios destinados a las distintas actividades. No podrá cederse el uso de la totalidad del área a un solo usuario, ni tampoco constituir monopolio de hecho, independientemente del número de usuarios;
- c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con sus actividades;
- d) Urbanizar, proyectar y construir edificios para las distintas actividades permitidas en la zona franca;
- e) Dictar y modificar su propio reglamento interno con aprobación del comité de vigilancia; ajustado a la legislación y reglamentaciones vigentes;
- f) Asegurar la prestación de servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, fuerza motriz, calor, refrigeración o cualquier otra clase de servicios necesarios para las operaciones de la zona franca, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente;
- g) Promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades de la zona franca;
- h) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento y operación y el reglamento interno;
- i) Remitir la información necesaria a las memorias periódicas de operación de la zona franca, así como cualquier otro dato estadístico o de información que requiera el comité de vigilancia;
- j) El concesionario será solidariamente responsable con los usuarios que transgredan la legislación aduanera y las reglamentaciones de la zona franca;
- k) Pagar los costos del control aduanero de la zona en base a las pautas que se convengan entre el Comité de Vigilancia y la Administración Nacional de Aduanas;
- l) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 21. — Los usuarios deberán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieran derecho a desarrollar actividades dentro de la zona franca mediante el pago de un precio convenido.

Art. 22. — Los usuarios de la zona franca deberán llevar contabilidad separada de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio aduanero general o especial.

Tratamiento fiscal y aduanero

Art. 22. — Con las salvedades que establece esta ley y el artículo 590 del Código Aduanero, serán aplicables a las zonas francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal que rigen en el territorio aduanero general.

Art. 24. — Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 25. — Las mercaderías que salgan de la zona franca hacia terceros países, estarán exentas del pago de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 26. — Exímese del pago de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se prestan dentro de la zona franca.

A tal efecto se entenderá por servicios básicos aquellos que tengan por objeto la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y de desagüe.

Art. 27. — Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca provenientes del territorio aduanero general o especial serán consideradas como una exportación suspensiva.

Art. 28. — Las mercaderías que se extraigan de la zona franca con destino al territorio aduanero general o especial serán considerados como una importación.

Art. 29. — Los estímulos que correspondan a las exportaciones que se efectúen desde el territorio aduanero general o especial a la zona franca, serán liquidados una vez que la mercadería fuere extraída de dicha zona hacia otro país, y dentro del plazo que a este efecto establecen las normas generales que rigen la materia, ya sea en el estado que posea cuando ingresó a la misma, o en otro.

Art. 30. — La extracción de mercaderías de la zona franca hacia terceros países, no gozarán de otros estímulos que los correspondientes por la devolución de tributos efectivamente pagados cuando fueren pasibles de devolución a los exportadores del territorio aduanero general. Asimismo, gozarán de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.

Art. 31. — En el convenio de adhesión para el establecimiento de cada zona franca previsto en el artículo 3º, los gobiernos provinciales deberán comprometerse a no disponer la exención de los impuestos provinciales salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que gravan los servicios básicos, referida en el artículo 26 y de las exenciones que existieran para operaciones de exportación.

En el mismo convenio, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a acordar con los municipios igual compartimiento para los usuarios y actividades de la zona franca.

Art. 32. — Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios y estímulos fiscales de los regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse, en el territorio de la Nación.

Art. 33. — Podrán introducirse en la zona franca toda clase de mercaderías y servicios estén o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de armas, municiones, y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la sanidad vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Art. 34. — El Poder Ejecutivo nacional establecerá mediante reglamentación el régimen aplicable en materia de destinaciones suspensivas de importación y exportación desde o hacia la zona franca, contemplando en ella la prohibición de nacionalización de mercaderías que ingresen al territorio aduanero general o especial.

Art. 35. — La totalidad de las gestiones, trámites, documentación y demás operaciones administrativas aduaneras que se efectúen en la zona franca, se realizarán en la respectiva delegación que la Administración Nacional de Aduanas habilitará en cada una de ellas y que funcionará en el interior de su recinto.

Art. 36. — No regirán en la zona franca restricciones a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos.

Art. 37. — La provincia por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, a partir del estudio de los proyectos de factibilidad de cada zona franca, propondrá a la autoridad de aplicación la localización y delimitación de la misma, así como las áreas de expansión previstas.

Art. 38. — El área física que se declare zona franca será deslindada y cercada en forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general.

Art. 39. — Autorízase a la autoridad de aplicación a expandir el espacio físico de la zona franca de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia conforme a los proyectos aprobados cuando condiciones excepcionales así lo aconsejen.

Art. 40. — Los predios e inmuebles donde se ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada, y deberán estar desocupados y libres de litigios.

El Poder Ejecutivo nacional, en la reglamentación de la presente, establecerá las condiciones para la admisión del uso de precios de propiedad privada.

Otras disposiciones sobre zonas francas

Art. 41. — La legislación laboral a ser aplicada en las zonas francas será la vigente en el territorio aduanero general.

Art. 42. — Se admitirán acuerdos entre provincias y entre éstas de manera simultánea con el Poder Ejecutivo nacional, para la creación de zonas francas interprovinciales autorizándose en esos casos la constitución de comisiones análogas a la del artículo 14, pero de natu-

raleza interprovincial. Esta zona franca equivaldrá al cupo asignado para cada provincia por el artículo 2º de esta ley.

Art. 43. — Las previsiones de la presente ley y los derechos emergentes de los estados provinciales quedan supeditados a la adhesión expresa de cada uno, que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera suscrito el convenio previsto en el artículo 3º, se considerará que la misma no ha adherido a la presente.

Art. 44. — Si en el plazo de dieciocho (18) meses de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate.

Art. 45. — La presente ley será de aplicación a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092, excepto lo dispuesto en los artículos 3º, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 37 y 39 debiendo aplicarse lo establecido en los decretos reglamentarios 1.935/92, 2.034/92, 1.788/93 y 2.409/93.

Art. 46. — Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan.

TITULO III

Territorio aduanero especial

Art. 47. — Establécense un territorio aduanero especial en el territorio conocido como Puna Argentina, comprendiendo los departamentos de Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca), Los Andes (provincia de Salta), Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochino (provincia de Jujuy).

Asimismo, autorizase al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los gobiernos provinciales el establecimiento de territorios aduaneros especiales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes, puertos o vías navegables a fin de facilitar o beneficiar las operaciones de las zonas francas de la provincia o región.

Art. 48. — El territorio aduanero especial establecido o que se establezca por el artículo anterior, tendrá las características definidas en el artículo 2º, apartado 3 del Código Aduanero y la modalidad y alcance establecido en los artículos 600, 602, 603, 604, 605, 606 y 607 de dicho código.

Art. 49. — De conformidad a lo establecido en el artículo 600 del Código Aduanero, los tributos que graven a la importación para consumo y a la exportación para consumo, serán de un 15 % de los que rigen en el territorio aduanero general.

Art. 50. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de febrero de 1994.

Juan C. Romero. — Fernando de la Rúa.
— Guillermo E. Snopek. — Ricardo A. Branda. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Pedro E. Molina. — Leopoldo Bravo. — Fernando V. Cabana. — Luis Rubeo. — Alfredo Avelín. — Felipe Ludueña. — Antonio F. Cafiero. — Carlos A. Verna. — Julio A. San Millán. — Augusto Alasino.

Con disidencias parciales:

José Genoud. — Faustino M. Mazzucco.

ANTECEDENTE

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
(Diciembre 7 de 1993)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) Zona franca: es el ámbito que se define en el artículo 590 del Código Aduanero;
- b) Territorio aduanero general: es el ámbito que se define en el apartado 2 del artículo 2º del citado código;
- c) Territorio aduanero especial: es el ámbito que se define en el apartado 3 del artículo 2º del mismo código;
- d) Terceros países u otros países: es el ámbito geográfico sometido a la soberanía de otros países incluidos los enclaves constituidos a favor de otros Estados.

Disposiciones generales

Art. 2º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo con carácter de excepción crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicados en aquellas provincias o regiones geográficas, que por su situación socioeconómica crítica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, convendrá con los gobiernos provinciales establecimiento de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizas con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio.

Las zonas francas a crearse con carácter de excepción deberán estar localizadas a una distancia no menor de trescientos (300) kilómetros entre sí, no pudiendo establecerse más de una por provincia.

A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial, respectivo, exigirá al concesionario, una inversión mínima, conforme a la Ley de Convertibilidad.

Art. 3º — La creación de las zonas francas previstas en el artículo anterior se podrá materializar en aquellas provincias que hayan adherido a las previsiones de la presente, a través de un convenio de adhesión a ser celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias.

Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en todos sus términos por ley provincial.

Objetivos

Art. 4º — Las zonas francas tendrán como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que el aumento de la eficiencia y la disminución de costos asociados a las actividades que se desarrollen en ellas, se extiendan a la inversión y al empleo.

El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial y sus medidas, debiendo contribuir a la liberación y al crecimiento de la economía.

Actividades

Art. 5º — Las zonas francas deberán constituirse en polos de desarrollo de las regiones donde se establezcan mediante la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles en la misma, dentro de las condiciones fijadas en la presente ley y en los decretos que la reglamenten.

Art. 6º — En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, esta última con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países. No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrán fabricar bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general, a fin de admitir su importación a dicho territorio. Los bienes de capital a que se hace referencia en el párrafo anterior, a fin de su nacionalización seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (NCE) y de las restantes normas tributarias que correspondan.

A los efectos del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá confeccionar un listado de las mercancías pasibles de dicho tratamiento y establecer los mecanismos de autorización de importación y control que considere convenientes.

Art. 7º — En las zonas francas las mercaderías pueden ser objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación y de las manipulaciones ordinarias.

destinadas a mejorar su presentación o calidad comercial o acondicionarlas para el transporte, tales como división o reunión de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje. La mercadería puede ser también objeto de transferencia.

Igualmente podrán ser objeto de actividades de producción con destino exclusivo a terceros países, tales como transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento.

El tiempo máximo para la permanencia de mercaderías en depósito será determinado en la reglamentación de la presente ley.

Art. 8º — No regirán para las operaciones de introducción o extracción hacia o desde la zona franca restricciones económicas ni depósitos previos a las operaciones de comercio internacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca, sólo en los casos en que la misma sea de carácter exclusivamente comercial, se encuentre ubicada en una ciudad o pueblo fronterizo con países limítrofes, que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio y que las circunstancias así lo aconsejen.

Art. 10. — Queda prohibido el consumo de mercaderías dentro de la zona franca, en aquellos casos distintos a las actividades propias del funcionamiento de la misma.

Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación para el consumo de vituallas destinadas al personal que preste servicios dentro de la zona franca.

Art. 11. — Las horas y lugares de ingreso y egreso de personas y mercaderías hacia o desde la zona franca serán los determinados por el comité de vigilancia de la misma de conformidad con las reglamentaciones que éste dicte.

Art. 12 — Estará prohibido habitar permanentemente o transitoriamente dentro de la zona franca.

Funciones y autoridades

Art. 13. — Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 14. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de:

- a) Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca, definir los criterios de selección y ordenar los proyectos;
- b) Elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad de aplicación el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca. Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de la concesión de la explotación de la zona franca, las causas de revocación, las sanciones por incumplimiento, como también las características, tasas y cargos

de los servicios prestados en la zona, así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios. Dentro del plazo de noventa (90) días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento y operación que le ha sido elevado, pudiéndose prorrogar el mismo por treinta (30) días más, reputándose aprobado el proyecto que no haya merecido observaciones dentro de ese plazo;

- c) Llamar a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión de la explotación de la zona franca;
- d) Adjudicar la concesión de la zona franca con aprobación de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá hasta noventa (90) días para expedirse a partir de la fecha de evaluación de los antecedentes y resultados del acto licitatorio para aprobar el mismo. Si en este término la autoridad de aplicación no se expidiera se considerará firme la adjudicación efectuada por el gobierno provincial;
- e) Las demás que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 15. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir un organismo provincial público o mixto, en el que deberán estar representados los municipios del área de influencia de la zona de que se trate y entidades empresarias y de la producción.

Dicho organismo tendrá las funciones de comité de vigilancia.

Art. 16. — El comité de vigilancia de la zona franca tendrá las siguientes funciones:

- a) Promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológica que conduzcan a un mayor afianzamiento de los mercados externos;
- b) Remitir toda información que requiera la autoridad de aplicación, y servir a la misma como órgano de consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades de la zona franca;
- c) Fiscalizar la provisión de información estadística adecuada, oportuna y suficiente sobre los principales indicadores económicos y comerciales de la zona franca requerida al concesionario y al usuario, la que será de libre consulta;
- d) Evaluar el impacto regional de la zona franca y articular su funcionamiento con los planes provinciales y municipales, identificando efectos perniciosos y costos de la zona, los que deberán estar a cargo de las empresas usuarias que los generen;
- e) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de la zona franca y en su defecto informar a la autoridad de aplicación sobre las mismas;

- f) Auditar periódicamente las medidas de vigilancia y control necesarios de accesos y límites de la zona franca;
- g) Percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo forma de un pago único o en un canon periódico, el que deberá ser coparticipado entre todos los municipios de la provincia correspondiente;
- h) Garantizar la concurrencia de los usuarios en el acceso e instalación en la zona franca conforme al reglamento de funcionamiento y operación y atender y dar respuesta a sus reclamos;
- i) Hacer cumplir las leyes y regulaciones aplicables, el reglamento de funcionamiento y operación, las normas internas de la zona franca y los acuerdos de concesión y operación;
- j) Velar por el cumplimiento de las normas sobre la conservación del medio ambiente, y en especial el tratamiento de los efluentes originados en la zona franca;
- k) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — El comité de vigilancia propiciará la libre concurrencia en la prestación de servicios dentro de la zona franca, previéndolo en el reglamento de funcionamiento y operación respectivo. Deberá aprobar tasas y cargos para todos los servicios y concesiones dentro de la zona franca, asegurando el tratamiento uniforme en condiciones equivalentes para los usuarios y mercaderías.

Art. 18. — La explotación de la zona franca será de carácter privado o mixto. Las obras y la infraestructura necesarias correrán por cuenta del concesionario.

Art. 19. — La explotación se ofrecerá por licitación pública, nacional o internacional, la que se ajustará a las condiciones que establezca la comisión de evaluación y selección prevista en el artículo 14 de la presente.

Art. 20. — El o los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Realizar las obras de infraestructura y conexiones de servicios básicos en la zona franca que sean necesarios para su normal funcionamiento y que formen parte del proyecto aprobado por la comisión de evaluación y selección y la autoridad de aplicación, encuadrados en las normas vigentes del o de los municipios en cuyo territorio se instalen;
- b) Alquilar a los usuarios lotes para la construcción de edificios destinados a las distintas actividades. No podrá cederse el uso de la totalidad del área a un solo usuario, ni tampoco constituir monopolio de hechos, independientemente del número de usuarios;
- c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con sus actividades;

- d) Urbanizar, proyectar y construir edificios para las distintas actividades permitidas en la zona franca;
- e) Dictar y modificar su propio reglamento interno con aprobación del comité de vigilancia, ajustado a la legislación y reglamentaciones vigentes;
- f) Asegurar la prestación de servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, fuerza motriz, calor, refrigeración o cualquier otra clase de raciones, negociaciones y actividades de la zona franca, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente;
- g) Promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades de la zona franca;
- h) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento y operación y el reglamento interno;
- i) Remitir la información necesaria a las memorias periódicas de operación de la zona franca, así como cualquier otro dato estadístico o de información que requiera el comité de vigilancia;
- j) El concesionario será solidariamente responsable con los usuarios que transgredan la legislación aduanera y las reglamentaciones de la zona franca;
- k) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 21. — Los usuarios deberán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieran derecho a desarrollar actividades dentro de la zona franca mediante el pago de un precio convenido.

Art. 22. — Los usuarios de la zona franca deberán llevar contabilidad separada de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio aduanero general o especial.

Tratamiento fiscal aduanero

Art. 23. — Con las salvedades que establece esta ley y el artículo 590 del Código Aduanero, será aplicable a las zonas francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal que rigen en el territorio aduanero general.

Art. 24. — Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 25. — Las mercaderías que salgan de la zona franca hacia terceros países, estarán exentas del pago de los tributos que gravaren su exportación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 26. — Exímese del pago de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se prestan dentro de la zona franca.

A tal efecto se entenderá por servicios básicos aquellos que tengan por objeto la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y de desagües.

Art. 27. — Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca, provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación.

Art. 28. — Las mercaderías que se extraigan de la zona franca con destino al territorio aduanero general o especial serán consideradas como una importación.

Art. 29. — La extracción de mercaderías de la zona franca hacia terceros países, no gozarán de otros estímulos que los correspondientes por la devolución de tributos efectivamente pagados cuando fueren pasibles de devolución a los exportadores del territorio aduanero general. Asimismo, gozarán de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.

Art. 30. — En el convenio de adhesión para el establecimiento de cada zona franca previsto en el artículo 39, los gobiernos provinciales deberán comprometerse a disponer la exención de los impuestos provinciales, salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que gravan los servicios básicos, referida en el artículo 26 y de las exenciones que existieran para operaciones de exportación.

En el mismo convenio, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a acordar con los municipios igual comportamiento para los usuarios y actividades de la zona franca.

Art. 31. — Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios y estímulos de los regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse, en el territorio de la Nación.

Art. 32. — Podrán introducirse en la zona franca toda clase de mercaderías y servicios, estén o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de armas, municiones y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la sanidad vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Art. 33. — La totalidad de las gestiones, trámites, documentación y demás operaciones administrativas aduaneras que se efectúen en la zona franca, se realizarán en la respectiva delegación que la Administración Nacional de Aduanas habilitará en cada una de ellas y que funcionará en el interior de su recinto.

Art. 34. — La provincia, por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, a partir del estudio de los proyectos de factibilidad de zona franca, propondrá a la autoridad de aplicación la localización y delimitación de la misma, así como las áreas de expansión previstas.

Art. 35. — El área física que se declare zona franca será deslindada y cercada de forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general.

Art. 36. — Autorízase a la autoridad de aplicación a expandir el aspecto físico de la zona franca, de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia conforme a lo previsto en los proyectos aprobados.

Art. 37. — Los predios e inmuebles donde se ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada, desocupados y libres de litigios.

Otras disposiciones

Art. 38. — Los usuarios de las zonas francas deberán emplear en las actividades que desarrollen, como mínimo un setenta y cinco por ciento (75 %) de personal argentino nativo o por opción.

La legislación laboral a ser aplicada en las zonas francas será la vigente en el territorio aduanero general.

Art. 39. — Se admitirán acuerdos entre provincias y entre éstas de manera simultánea con el Poder Ejecutivo nacional, para la creación de zonas francas interprovinciales, autorizándose en esos casos la constitución de comisiones análogas a la del artículo 14, pero de naturaleza interprovincial. Esta zona franca equivaldrá al cupo asignado para cada provincia por el artículo 2º de esta ley.

Art. 40. — Las provisiones de la presente ley y los derechos emergentes de los estados provinciales quedan supeditados a la adhesión expresa de cada uno, que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera suscrito el convenio previsto en el artículo 3º, se considerará que la misma no ha adherido a la presente.

Art. 41. — Si en el plazo de dieciocho (18) meses de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate.

Art. 42. — La presente ley será de aplicación a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092.

Art. 43. — Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan.

Art. 44. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

Sr. Presidente (Storani). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopce. — Señor presidente: voy a hacer las veces de miembro informante de mi bancada; ello, sin perjuicio de la intervención puntual que por razones de competencia y en función de lo acordado en el bloque realizarán otros integrantes de la bancada justicialista.

En esta oportunidad queremos destacar no sólo la importancia del proyecto sino también dar razón y fundamento a las distintas modificaciones realizadas en las reuniones de comisiones en ocasión de su análisis durante estos últimos sesenta días.

Cabe resaltar que mucho se ha dicho del tiempo transcurrido en el que no se sesiona. Pero en realidad hemos trabajado intensamente y recogido las cuestiones planteadas por los representantes de las distintas provincias. Este proyecto recién tuvo estado parlamentario en este Senado el 15 de diciembre pasado y tres meses después lo estamos considerando a efectos de su sanción.

Hemos hecho esta tarea con absoluta responsabilidad y teniendo en cuenta la importancia que la iniciativa reviste por muy diversas razones que trataré de puntualizar sintéticamente.

Consideramos que este proyecto rectamente aplicado será un instrumento sumamente trascendente para la reactivación económica. Y si lo hacemos bien y contamos con el espíritu solidario de todos los argentinos significará la creación de polos de desarrollo.

También constituye un instrumento de geopolítica —digo esto como un hombre que representa a una de las provincias más marginadas del país— porque tiende a evitar el despoblamiento y las migraciones internas. Creo que los problemas del país no se solucionan subsidiando al conurbano bonaerense para paliar sus dificultades sino evitando los fenómenos migratorios que se producen, y que se han venido produciendo últimamente, porque las políticas de acumulación de capital en áreas centrales generan desequilibrio, pobreza, miseria y postergación en las periféricas.

Si somos un poco solidarios, no sólo quienes representamos a las distintas provincias sino también y fundamentalmente quienes serán los encargados de aplicar este instrumento, podremos generar la posibilidad real de un crecimiento más equitativo, más armónico y, en definitiva, más justo para los habitantes del país. Y digo esto porque no creo que en las actuales circunstancias podamos decir que estamos construyendo una nación o un país justo cuando en lugares como la Puna argentina durante los últimos diez años se ha producido un despoblamiento del 25 por ciento o cuando en lugares de poblaciones fronterizas, por cambios en la política de comercio exterior, fueron cerrados más del 50 por ciento de los negocios que operaban hace diez años.

Esta iniciativa genera nuevas posibilidades y perspectivas, sobre todo a las provincias y re-

giones periféricas en las que poco a poco nuestra gente va perdiendo la fe cuando no las esperanzas y las ganas de vivir, por lo que se producen estos fenómenos migratorios que debemos comprender que tenemos que cambiar: el país no se desarrollará plenamente si sólo en una zona central se establece la acumulación de la actividad económica, del poder político, etcétera. Es así que todas las provincias periféricas, especialmente las del norte y del sur del país, no se realizan y quedan marginadas y postergadas. Aplicado rectamente y con el sentido solidario que detallo este proyecto nos permitirá descentralizar la actividad económica.

No quiero hacer la distinción entre Patagonia austral y boreal —lo dejo a cargo de los propios patagónicos porque sería involucrarme en una interna que no me corresponde—, pero sí debo decir que tanto a los hombres de esa zona como a los del noroeste nos beneficiará la aplicación de estos mecanismos que posibiliten la concreción de una esperanza a través de un proceso de reactivación mediante el cual se generen polos de desarrollo con sentido regional y proyectando su producción no sólo para el tradicional mercado de Buenos Aires —para el que fueron diseñados en el siglo pasado nuestros ferrocarriles— sino también para lograr competir en otros mercados como los de la cuenca del Pacífico.

Quienes somos la cola en el proceso de integración que significa el Mercosur tendremos un futuro cada vez peor, cada vez más negro porque por diferentes problemas no estamos en condiciones de subsistir ni siquiera dentro de este nuevo esquema de integración. Como dije hace instantes, tanto en la Patagonia como el noroeste pasamos a ser la parte trasera, el patio de adentro de este mercado regional.

Con esta iniciativa buscamos dar solución a problemas puntuales planteados tanto por poblaciones fronterizas del NEA como por pueblos olvidados del NOA y también a cuestiones específicas del Sur, como el caso de Santa Cruz. De esta manera tratamos de llenar un vacío, lo que quedó trunco con las leyes de inversiones mineras y de reordenamiento minero. A través de ellas se facultaba la creación de zonas francas o territorios aduaneros especiales en materia de minería, lo que se excluyó del proyecto del Poder Ejecutivo. Esta situación podrá encontrar su solución en la sanción de este proyecto de ley dado el tratamiento que en su oportunidad mereció en la Cámara de Diputados.

Para que no haya confusión en la comunidad —y no para quienes hemos intervenido y analizado las cuestiones dentro de las distintas co-

misiones y bancadas— acerca de qué implica este proyecto de ley de zonas francas, quiero aclarar que en manera alguna se crea a lo largo y a lo ancho del país una suerte de *free shop* en donde podrán comprarse productos baratos que no pagan impuestos. Esta no es la idea.

En esta materia deben distinguirse cuatro conceptos básicos. Uno de ellos es el de zona franca, determinado en el artículo 590 del Código Aduanero. Allí se define en términos técnicos que es el ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero; su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las retributivas de servicios que pudieran establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico. Concepto distinto a este otro: intermedio de la zona aduanera, especialmente definido por el artículo 600, que es también un ámbito donde los tributos que gravan la importación para el consumo y la exportación para el consumo no excederán el 75 por ciento de los que rigen en el territorio aduanero general y en donde tampoco son aplicables las prohibiciones de carácter económico, salvo expresa disposición en contrario.

Sin embargo, nosotros aquí queremos señalar claramente cuáles son los objetivos de esta ley. Se trata de tres objetivos precisos definidos por los artículos 4º y 5º del proyecto. A estos artículos se agregaría un tercero, según interpretamos nosotros ha sido la intención de la Cámara de Diputados. Me refiero a los agregados al artículo 2º del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Uno de estos objetivos centrales es impulsar la actividad económica y comercial exportadora del país. Por eso decíamos anteriormente que aquí no se trata de la generación de *free shop* en determinados lugares de la República. No; de ninguna manera. Debe quedar en claro que ésta no es la idea. Lo que se pretende es impulsar la actividad industrial y comercial exportadora en esta zona franca, con recintos perfectamente delimitados y cerrados donde se realizan actividades industriales y comerciales de gran escala, especialmente de transformación y manufactura de productos, pero siempre con fines de exportación. Con esto quiero decir que para nada se trata de generar una competencia desleal dentro del propio país. La idea, reitero, es impulsar esta actividad exportadora que ha quedado rezagada en nuestra Nación.

Ahora bien; entre los fines perseguidos —y en esto tenemos que ser solidarios todos— se encuentra el de constituir polos de desarrollo de

carácter regional, tal como lo indica el artículo 5º; en esto ha sido claro lo que se busca hacer.

Pero mencionamos tres objetivos y hablamos de uno. Otro es compensar los desequilibrios y corregir la falta de equidad en las relaciones existentes entre las ciudades y pueblos fronterizos a través del mecanismo de zonas francas comerciales propuesto por Diputados. Es del caso destacar que este criterio originalmente no figuraba en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. De esta manera intentar solucionar como acabo de decir, los desequilibrios y desajustes que se producen especialmente en el norte y sur del país. Para el caso del norte, por ejemplo, podemos hablar, por un lado, de la situación que se da entre Formosa y el Paraguay y, por el otro, del sufrimiento de Misiones por su situación no sólo con relación al Paraguay sino también al Brasil.

En el noroeste argentino la situación que se produce con Iquique y todo el territorio aduanero especial...

Sr. Aguirre Lanari. — Nosotros también lindamos con tres países por lo que creemos tener derecho a ser considerados.

Lamento, señor senador, que el proyecto de modificación de mi autoría no haya sido receptado por la comisión respectiva.

Sr. Snopek. — Bueno; no conozco la observación del señor senador por Corrientes.

Sr. Presidente (Storani). — Ruego a los señores senadores se sirvan no dialogar y dirigirse a esta Presidencia.

Sr. Snopek. — Yo estaba hablando a título de ejemplo.

De cualquier manera, todos sabemos que cuando el país entre en guerra Corrientes nos va a ayudar...

Sr. Aguirre Lanari. — Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por razones de patriotismo.

Sr. Snopek. — Pero no estamos en guerra y sabemos que en la lucha por transformar el país Corrientes nos va a ayudar; y nosotros vamos a ayudar a Corrientes.

Sr. Presidente (Storani). — Señor senador por Jujuy: conceda una interrupción al señor senador por Corrientes y así podremos ordenar el debate.

Sr. Snopek. — Sí, le concedo las interrupciones que sean necesarias.

Sr. Presidente (Storani). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: he dicho todo lo que tenía que decir y he manifestado todo lo que tenía que expresar. He reflejado todo lo que quería reflejar.

No estoy hablando en chiste sino sobre cosas ciertas y justas. Lamento que en la referencia realizada por mi distinguido colega —ha mencionado la situación de dos provincias y me parece muy justo— haya omitido el hecho de que Corrientes tiene tres fronteras, o dicho de otra manera, linda con tres países.

Sr. Presidente (Storani). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: reitero que estamos hablando a título de ejemplo. Por otra parte, si como dije anteriormente vamos a ser solidarios, seguramente no olvidaremos la situación de Corrientes.

Casualmente; en ocasión de mantener las reuniones de comisión —más precisamente, en oportunidad de dialogar con funcionarios de Economía— planteamos los problemas que se dan en especial en el NEA; e indudablemente Corrientes es parte del nordeste argentino. Yo me referí a Misiones y a Formosa simplemente por ser las provincias que se encuentran más arriba y generalmente los que estamos más en el fondo somos los más olvidados. Yo no me enojo cuando a veces aquí, en la Capital Federal, me dicen salteño, porque se olvidan de que Jujuy existe. Esto no me ofende. Me considero también parte de mis hermanos de Salta más allá de nuestra autonomía, lograda en 1835.

Entonces, éstos son los objetivos más importantes que plantea el proyecto. Si ejecutamos y aplicamos bien la ley, rescatando el sentido solidario que posee, será un buen instrumento. De todos modos, quisiera detallar de alguna manera, para que no haya confusión y quede claro lo que dije antes: que estas zonas francas no serán *free shops*, y que lo que persigue este proyecto es el impulso comercial con fines de exportación: el amañenaje y la comercialización desde zonas francas; las actividades de servicios e industriales y otras incorporaciones de valores agregados. También está el caso especial de la producción de bienes de capital, a lo cual me referiré posteriormente en virtud de un debate que se planteó en el bloque. Incluso hubo propuestas de modificaciones del bloque justicialista.

Queda en claro entonces que estas zonas francas no serán para realizar en modo alguno operaciones de venta al por menor, teniendo

en cuenta la posibilidad que plantea el artículo 9º del dictamen en consideración para efectuar operaciones en algunos lugares puntuales, tal como ha sido previsto por la Cámara de Diputados.

En consecuencia, las zonas francas, tal como fueron concebidas, tendrán una serie de prohibiciones que surgen de los artículos 10 a 12, lo que requiere de ciertos mecanismos que olvidamos un poco en el análisis. No obstante, el tema no ha pasado inadvertido, ya que no hemos estado refiriendo fundamentalmente aspectos controvertidos planteados por distintas provincias argentinas.

Cada provincia tiene la posibilidad de contar con una sola zona franca de acuerdo con lo que prevé el proyecto a partir del artículo 4º, y correlativamente existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo cree cuatro zonas francas más en todo el territorio del país, en función de problemas de desarrollo regional o de necesidades que genere la depresión de actividades en ciertas regiones.

Estas zonas francas para cada provincia no se crean porque sí sino que requieren la adhesión expresa de la provincia y la suscripción del convenio a que se refiere el artículo 3º dentro de los ciento ochenta días, la constitución en forma transitoria de una comisión que evalúe y seleccione los proyectos de acuerdo con lo que prevé el artículo 14 y la constitución del organismo provincial público o mixto prevista por el artículo 15, que tendrá las funciones de comité de vigilancia.

La comisión de evaluación y selección será la que propondrá la localización y delimitación sujeta a la aprobación de la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

La ubicación está prevista en terrenos de propiedad pública o privada, siempre y cuando sean de libre disponibilidad y no estén sujetos a ulteriores cuestiones judiciales o que controviertan su titularidad. Deberá tenerse en cuenta el deslinde y cercado para asegurar el aislamiento y la posibilidad en determinados casos de extender el espacio físico originariamente previsto.

Partimos de la base de que debe existir este diseño y determinados compromisos de inversión en un cierto plazo. De lo contrario, se producirá la caducidad del derecho a tener una zona franca, sea por falta de adhesión a la ley dentro de los ciento ochenta días o por la falta de adecuación de las obras dentro de los dieciocho meses de firmado el convenio a que se refiere el artículo 3º.

Estos son los requisitos y condiciones para la constitución de zonas francas.

Lo que me interesa explicar muy rápidamente son esos aspectos puntuales que hacen a los regímenes jurídicos aplicables y finalmente al régimen fiscal y aduanero que están definidos en los artículos 23 y siguientes del proyecto de ley venido en revisión.

El principio sobre los regímenes jurídicos aplicables está en el artículo 23, donde se establece en definitiva que son de aplicación la legislación impositiva, la legislación financiera, la legislación penal —incluso los aspectos tributarios—. Un caso especial que debatimos en la comisión fue el referido a la legislación laboral, respecto del cual el proyecto originario del Poder Ejecutivo posibilitaba el establecimiento de regímenes de flexibilización laboral dentro de las zonas francas.

Diputados, por su parte, introdujo una primera parte al artículo respectivo que establecía los requisitos de nacionalidad en un 75 por ciento para el personal que se ocupe en la zona franca. Nosotros en la comisión, luego de debatir profundamente el tema, hemos coincidido en que se aplique la legislación laboral que rige en el territorio aduanero general, es decir, en todo el país, toda vez que se discute tanto el "empleo" nacional en un proyecto de ley que está en revisión en esta Cámara, como en los controvertidos y discutidos regímenes de flexibilización, que están en debate en este momento en la Cámara de Diputados. En consecuencia, lo que se disponga con carácter general para todo el país y lo que dispongan estos regímenes que se están debatiendo en este momento es lo que se va a aplicar en las zonas francas.

Lo que aquí interesa destacar es que con relación al régimen general que instituyen los artículos 590 y 599 del Código Aduanero se establecen una serie de reglamentaciones sobre el ingreso y egreso de mercaderías, los estímulos y reembolsos y exención de impuestos nacionales. Este proyecto, concretamente, es reglamentario de las zonas francas a que se refiere el artículo 590.

En realidad, el principio de libre ingreso de mercaderías y servicios, salvo expresas excepciones, se encuentra en el artículo 23. Es decir que el principio no figura en el 24 sino que se encuentra como artículo 23 del proyecto venido en revisión.

Acá lo que nos interesa precisar es el tratamiento que se da a las mercaderías. El principio está en el 24, que dispone que las que ingresen a la zona franca estarán exentas de los impuestos de importación para el consumo. Las que se

extraigan de la zona franca con destino a terceros países estarán exentas de todo gravamen, como establece el artículo 25.

Las que se extraigan de la zona francas con destino al territorio aduanero general serán consideradas como una importación, tal como dice el artículo 28. Acá debe excluirse la mención al territorio aduanero especial, pues como bien señalan los autores que comentan el Código Aduanero, el territorio aduanero especial es intermedio entre la zona franca y el territorio aduanero general. Digamos que es un tercer género o intermedio entre estas dos figuras y que el tratamiento que se debe dar allí a las mercaderías que se extraigan o que ingresen está definido, en este caso, por el artículo 605 del Código Aduanero. Hemos concluido en este análisis que se escapó la mención al territorio aduanero especial cuando esto es con relación al ingreso al territorio aduanero general.

Ahora bien, aquí viene un punto que ha sido objeto de debate y es el que se refiere a las mercaderías que se introduzcan en la zona franca provenientes del territorio aduanero general o del territorio aduanero especial, que son consideradas como exportaciones con carácter suspensivo. La Cámara de Diputados eliminaba el término "suspensiva" y nosotros lo hemos incorporado aceptando el criterio del proyecto del Poder Ejecutivo, y lo hemos hecho por varias razones. Una de esas razones la constituyen las dificultades de control —hay casos que sucedieron en el pasado—. A las exportaciones se les da el carácter de suspensivo a efectos de evitar que aquellos productos que ingresen a la zona franca o al territorio aduanero especial y que tengan estímulos de exportación perciban el reembolso y no se haga efectivamente la exportación hacia terceros países.

De allí la necesidad de considerar que estas exportaciones sean con carácter suspensivo y que recién se considere efectivamente una exportación cuando se acredite el hecho del egreso de las mercaderías hacia terceros países, sean objeto, o no, de mejoramiento, transformación o incorporación de algún agregado en las zonas francas.

Por eso, consecuentemente con este criterio de que sean consideradas exportaciones con carácter suspensivo establecido en el artículo 27 del proyecto contenido en el despacho de las comisiones, hemos reproducido no sólo el artículo 29 del proyecto del Poder Ejecutivo sino también el artículo 34, a efectos de reglamentar todas estas operaciones de exportación con carácter suspensivo para mejorar los mecanismos de

control con el fin de que no se produzcan efectos indeseados, tal como ocurrió en alguna época pasada.

Es importante que aquí señalemos que las zonas francas y eventualmente los territorios aduaneros especiales no poseen estímulos ni reembolsos especiales que no sean los aplicables a los productos con fines de exportación que tengan su origen en el territorio aduanero general. Es decir que no se crean estímulos ni reembolsos respecto de los que ya existen en el resto del país o en el territorio aduanero general. Tampoco los que estén en zonas francas pueden tener como un nuevo estímulo la aplicación de regímenes de promoción industrial.

También se establece en el artículo 26 la exención total de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se presten en las zonas francas. Sobre esto hubo una larga discusión, a partir del proyecto del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados y en las comisiones del Senado que abordaron el tema. La discusión giró en torno del artículo 30. En el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados se establecía que cuando las provincias firmaran los convenios de adhesión se debían comprometer a establecer exenciones. Sin embargo, el compromiso fue el de no disponer la exención de más impuestos.

En realidad y por efectos prácticos, una vez suscripto el denominado pacto fiscal, esta polémica que en su momento se ha suscitado con relación a la exención de impuestos por parte de las provincias se ha vuelto más teórica que real, es decir que casi no va a tener incidencia práctica. Pero nosotros creemos —y ésta es la conclusión a la que hemos llegado en las reuniones de las comisiones— que el compromiso debe ser el de no disponer la exención de impuestos, incluso para no generar una competencia desleal entre las propias provincias, de manera tal que una provincia más rica o más fuerte se vea impedida de dar mayores exenciones de impuestos que generen algunos estímulos para las zonas francas de su territorio en detrimento del equilibrio o la igualdad que debe existir con los restantes estados provinciales, especialmente con los que menos posibilidades tienen en materia tributaria.

También es importante remarcar, para que no se genere la idea falsa del *free shop* a lo largo y ancho de la República, la intervención de la Aduana en el propio lugar de la zona franca. Todas las operaciones que se realicen en estos recintos tendrán el control inmediato —por así

decirlo— de la Aduana en el propio lugar, tanto al ingreso como al egreso de mercaderías y bienes en general.

En su momento hubo una disposición del proyecto de ley que estamos tratando que generó polémica y determinó que Diputados suprimiera ese texto del artículo 36 del proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo. Me estoy refiriendo al tema relacionado con la restricción a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos. Se dieron argumentos en favor y en contra. En la actualidad, en la normativa vigente, no existe ningún tipo de restricción para esta clase de operaciones.

Como dije, en Diputados se eliminó el texto relacionado con este punto pero, de acuerdo con el debate que sostuvimos en la comisión, se coincidió en la conveniencia de reproducir la norma original contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo.

De cualquier modo, sostenemos que aquí es aplicable lo dispuesto en el artículo 23 en el sentido de que en las zonas francas debe respetarse la legislación tanto cambiaria como financiera vigente en todo el territorio aduanero general, es decir en todo el país. Esto queda claro entonces, por imperio del mencionado artículo 23. En consecuencia, no puede existir la posibilidad de la banca *offshore* ni del lavado de "narcodólares", motivos por los cuales se tuvo miedo en Diputados de mantener la redacción original.

Como he señalado, en la actualidad no existen tales restricciones, aunque dejamos hecha la salvedad de que esta norma en modo alguno afecta la legislación cambiaria y financiera que es aplicable en todo el país, tal como lo dispone el mencionado artículo 23, habida cuenta además de que no hay restricciones especiales en las zonas francas. En síntesis, éste es el espíritu del texto que hemos propuesto en el dictamen de comisión.

Quiero referirme a un tema especial, con remisión a lo que tuve oportunidad de expresar en una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Romero. Me refiero a las razones por las cuales hemos considerado imprescindible crear un territorio aduanero especial en la puna argentina.

Me voy a remitir a la exposición que hiciera en aquella oportunidad y que es de conocimiento de los señores senadores, especialmente de los integrantes de la mencionada comisión. A tal efecto, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de la parte pertinente de dicho escrito para no abundar en mayores consideraciones.

Algo he dicho al respecto al comienzo de mi intervención, pero quisiera concluir rápidamente este tema sin perjuicio de intervenciones posteriores que pueda tener en este debate para responder las aclaraciones que pudieren solicitar los señores senadores.

Quiero precisar que esto no es un beneficio especial ni se trata de algún tipo de especulación. Consideramos que esta propuesta es el complemento indispensable para una zona franca mediterránea. En efecto, las zonas francas en el mundo han funcionado y funcionan adecuadamente en las costas marítimas, es decir en algún puerto que permita operar. No conocemos zonas francas en lugares mediterráneos, o sea que no tengan salida por vía fluvial, marítima o aérea. El concepto de zona franca siempre ha estado asociado a un puerto.

Ahora bien, este territorio especial que propiciamos funcionaría como una suerte de puerto seco para facilitar las operaciones de importación y de exportación. Además, permitirá una compensación frente a las otras zonas francas que existen alrededor de la Puna argentina, que han generado el desaliento de las poblaciones locales y, en consecuencia, el fenómeno migratorio alarmante que se ha dado. Entre los últimos dos censos la población de esa zona decreció un 25 por ciento.

Frente a esa situación y a la necesidad de evitar las migraciones internas y el empobrecimiento general de la zona, proponemos este polo de desarrollo que puede contribuir a compensar el desequilibrio producido por tales desajustes y las ventajas comparativas que ofrecen los países vecinos.

Porque en la Puna argentina nos separan límites que son teóricos. No son artificios que marcan una diferenciación pronunciada entre una zona y otra. Por otra parte —y muchos señores senadores lo saben—, la Puna argentina nos ofrece características geográficas especiales, sobre todo en lo que hace a la facilidad de control, a tal punto que el mayor contralor que hoy realiza la Gendarmería Nacional es en Tres Cruces y a la salida de la quebrada de Lipan en Purmamarca. Es más, en San Antonio de los Cobres lo lleva a cabo en la quebrada del Toro.

Estos son los puntos por los que en la puna argentina —incluida Catamarca— se accede al resto del país. Son los puntos geográficos de inflexión por los cuales, reitero, se puede acceder al territorio nacional y además facilitan enormemente el control.

Lo mismo le sucede a la gente de Catamarca, que para ir a Antofagasta de la Sierra, un de-

partamento de dicha provincia, tiene que pasar por el estado provincial vecino. Así ocurre también en Salta con el departamento de Los Andes. En épocas de lluvia no se puede transitar por la quebrada del Toro sino que se lo debe hacer por la quebrada de Humahuaca.

Esto es lo que quería decir, y quedo a disposición de los señores senadores para cualquier pregunta que deseen realizar.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: el bloque radical va a votar en general por la afirmativa el proyecto sobre zonas francas; no obstante, hará numerosas observaciones parciales al articulado de esta iniciativa, como ya lo ha hecho saber a los señores integrantes de las comisiones que han estudiado el tema.

Haré una breve cronología de la historia parlamentaria de este proyecto sobre zonas francas. Desde 1990 varios señores senadores hemos venido presentando proyectos por los que se solicitaba la creación de zonas francas en distintos sitios de la República. Tal es el caso de los señores senadores Brasesco, Solana, Bravo, Posleman, quien habla —que en 1990 solicitó la creación de una zona franca en el distrito Uspallata del departamento de Las Heras, junto al Paso de los Libertadores, paso fronterizo principal con la República de Chile—, Costanzo, Molina, Rivas, Samudio Godoy, Aguirre Lanari en 1992, y Bittel en 1993.

Todos estos proyectos por los que se solicitaba la creación de zonas francas atendían a requerimientos, en algunos casos imperativos, de las distintas provincias en función de la competencia que generaba el hecho de que países limítrofes habían puesto en funcionamiento este tipo de institutos en pasos fronterizos con nuestro país.

En virtud de la proliferación de estas iniciativas en el Senado —otro tanto ocurría en la Cámara de Diputados— fue que en 1992 juntamente con la señora senadora Malharro de Torres presentamos un proyecto, que se trató en esta Cámara, por el cual solicitábamos al Poder Ejecutivo que interviniese a modo de compendiar todas estas iniciativas presentadas, elaborando un anteproyecto que armonizara un sistema de zonas francas para todo el país. Advertíamos que de la puja entre las distintas provincias no íbamos a poder obtener un sistema armónico que permitiese poner en marcha un régimen que fuese realmente eficaz para la economía del país. No voy a leer los fundamentos y la parte resolutive de aquel proyecto. Pero sí recuerdo que sosteníamos con énfasis la ne-

cesidad de apresurar el tratamiento del tema por cuanto tanto Chile como Uruguay, principalmente, habían acelerado la puesta en pleno funcionamiento de áreas francas, lo que determinaba un éxodo permanente de consumidores argentinos, quienes dejaban sus recursos en los comercios de los países fronterizos.

A ese proyecto de zonas francas que solicitábamos al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía respondió con una carta que firmó el secretario de Ingresos Públicos, el doctor Tacchi, en la que se sostenía que el gobierno nacional no compartía el criterio de crear áreas francas en el país.

Por ello hicimos gestiones con el entonces ministro del Interior y luego se derivó el tema al subsecretario de Comercio Exterior, licenciado Kesman, quien comenzó a elaborar un proyecto que es el que ingresó el año pasado a la Cámara de Diputados.

Cuando dicha Cámara lo somete a su tratamiento le introduce numerosas modificaciones. Llega luego a este Senado que, como bien se ha dicho, le dio un tratamiento razonablemente ágil, introduciéndole nuevas modificaciones; pero no todas ellas satisfacen a este bloque, señor presidente.

La opinión pública debe saber que la Argentina está rodeada, prácticamente en todo su perímetro, por zonas francas creadas por los países limítrofes. Chile lo hizo primero con Iquique en el extremo norte y luego con Punta Arenas en el extremo sur. Pero como eso parecía insuficiente creó un sistema integral de zona franca llamado "zona extendida de los Andes", que constituye un singular sistema para establecer una zona franca en distintos sitios a lo largo de toda la frontera con la Argentina, que tiene más de 3.000 kilómetros.

Paraguay tiene en su totalidad, un régimen de zona franca análogo al que pretendemos implantar pero no ya en reducidos perímetros sino en toda su geografía, como lo describió recién el miembro informante.

Brasil tiene a Manaos, que si bien es una ciudad mediterránea está junto al río Amazonas y posee un influjo realmente importante hacia todo el país.

En el caso del Uruguay han proliferado las zonas francas, que sobreviven fundamentalmente sobre la base de consumidores argentinos. Ello ocurre en Colonia, Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos.

Todo esto nos demuestra que en este tema la Argentina ha reaccionado tardíamente. Y si no llegamos a contar con una ley de zonas francas muy pronto —pongo esto en tela de juicio

porque temo que el proyecto, que volverá a la Cámara de Diputados y que luego pasará al Poder Ejecutivo, sufra modificaciones o vetos parciales que nos impidan disponer de este instrumento a la brevedad posible—, seguirá produciéndose un drenaje de recursos altamente significativos para la Argentina.

A través de este proyecto de ley, que observaremos en particular, bien se ha señalado que se establecen dos tipos de zona franca. Una es la comercial: ingresa la mercadería del exterior y no se paga ningún tributo en ese perímetro debidamente aislado. Allí se pueden realizar operaciones de carácter comercial, o sea etiquetar, reetiquetar, empaquetar, reempaquetar, dividir, clasificar, separar la mercadería en bultos etcétera. Y no se puede vender al por menor, solo (excepcionalmente) sino que debe ser vendida al territorio nacional al por mayor.

Entonces, ¿cuál es la ventaja de una zona franca para la Argentina? Al salir ese producto del territorio de la zona o área franca debe cumplirse con todos los requisitos aduaneros y, por lo tanto, la mercadería que de allí sale debe pagar los correspondientes aranceles. El beneficio en lo que a área franca comercial se refiere está en que el margen que gana el comerciante, en este caso de los países limítrofes, más todos los servicios que deja el consumidor que viaja al exterior, ya no son una transferencia de recursos a esos países y son recursos que quedan en el nuestro. Se calcula que está en el orden del 15 al 18 por ciento del volumen de gastos que los argentinos efectúan en los países limítrofes, y más aun en aquellos que tienen zonas francas.

Con respecto a la zona franca industrial, vamos a tener un número limitado de ellas, según reza el texto de este proyecto del dictamen en mayoría del Senado; veremos qué es lo que queda de este proyecto a la hora de su promulgación como ley, que es lo que realmente importa.

En la zona franca industrial ingresan los insumos importados sin pago de arancel alguno. Allí puede reelaborarse la mercadería, manufacturarse y perfeccionarse los productos que se introducen. Todo lo que allí se fabrique debe tener un destino obligado: la exportación.

En este caso la actividad económica va a impactar en la región; constituirá un polo de desarrollo que demandará mano de obra y que permitirá ingresos fiscales a la Nación.

De acuerdo con el dictamen en mayoría que se está analizando, podrán fabricarse allí bienes de capital siempre y cuando —de acuerdo con

el proyecto de la Cámara de Diputados— dichos bienes no se fabriquen en el territorio nacional.

Pueden fabricarse bienes de capital siempre para la exportación, pero para que ingresen al territorio nacional, y así lo decía el dictamen de la Cámara de Diputados a cuyo texto adhiero, debían ser bienes de capital no fabricado ni en la provincia de Tierra del Fuego ni en el resto del territorio nacional.

También se explicita en el proyecto en consideración que las zonas francas tienen que ser privadas o mixtas, y en el caso de que exista una participación estatal la misma debe ser con carácter minoritario. Y es muy importante que quienes tengan la expectativa de que vayan a existir numerosas zonas francas en el país, tomen en cuenta este aspecto. La instalación de una zona franca comercial o industrial requerirá sumas cercanas a los 10 o 15 millones de dólares; y se trata de inversión privada.

Además, existe una cláusula en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados, y que se ratificará en esta sanción, que establece, que el concesionario privado es solidariamente responsable de todas las irregularidades —llámese contrabando, u otras infracciones en las que incurran todos los que actúen o trabajen dentro del establecimiento de la zona franca y que puedan perjudicar al fisco.

Estamos ante un tipo de responsabilidad de mucha envergadura. Y si bien tenemos la esperanza de que existan varias áreas francas, éstos requisitos y exigencias de orden económico, financiero e incluso penal acotarán mucho el establecimiento de éstas en las distintas regiones del país.

Señalo que en la Cámara de Diputados existió una saludable iniciativa, que luego no prosperó, en el sentido de establecer un monto mínimo de inversión para que pudiera funcionar una zona franca, tanto industrial como comercial.

Ha quedado un artículo que simplemente se limita a decir que el Poder Ejecutivo provincial y el comité de vigilancia deberán exigir una inversión significativa para que pueda prosperar su funcionamiento.

Señor presidente: formularé brevemente las observaciones que le hacemos a este proyecto. Lamento el hecho de que no hayamos podido arribar a un dictamen común porque todos estamos unidos en el mismo anhelo: la creación de zonas francas en las distintas provincias y la necesidad de que en el marco de esta apertura económica participen los estados provinciales y la Capital Federal, que ha sido excluida, como

lo explicará el señor senador Vaca. No estoy plagiando la idea, el colega recién me lo señaló e inclusive lo hablamos con el señor senador de la Rúa: falta la mención expresa de la Capital Federal el proyecto se refiere a las provincias y habla reiteradamente sólo de gobiernos provinciales.

Reitero que la radicación de zonas francas en las distintas provincias es un anhelo compartido por los senadores de los diferentes bloques y un reclamo unánime de los estados provinciales del país.

Paso a señalar algunas observaciones que considero graves, pero que no obstan para que votemos afirmativamente este proyecto. Temo que estos reparos al ser compartidos por muchos diputados vayan a derivar en nuevas modificaciones en la Cámara baja.

En primer lugar, señor presidente, se determina que la autoridad de aplicación de las zonas francas será el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Me pregunto por qué en lugar de ser autoridad de aplicación la persona del señor ministro de Economía, esa responsabilidad no se deriva o se coparticipa con el organismo federal que este mismo proyecto crea en otro artículo.

Es decir que mucho más horizontalidad y mayor garantía federal habría existido de haber sido la autoridad de aplicación el Ministerio de Economía junto con el organismo federal en el que están representadas todas las provincias. ¿O no es ése el espíritu que tuvimos todos aquellos que queríamos una nueva Constitución que asegurara un real federalismo que salga de la retórica y se transforme en hechos?

Adviértanse ahora todas las facultades que están concentradas en la persona del señor ministro de Economía. En primer lugar, es quien en definitiva resuelve el lugar del establecimiento de las zonas francas. Me pregunto por qué tiene que decidir el ministro de Economía Cavallo respecto del lugar en que conviene radicar una zona franca, por ejemplo, en mi provincia. Esto está quebrando un principio de autonomía elemental que señalamos a modo de impugnación, como lo hicieron en su momento los diputados que analizaron este proyecto.

Más grave aún es la situación prevista por el inciso d) del artículo 14 que establece que la determinación del concesionario privado a cargo de quien estará la concesión —estamos hablando de una inversión que tendrá una base de 10 o 15 millones de dólares y una importante rentabilidad—, será también decisión del ministro. Lo propondrá el Poder Ejecutivo de la provincia pero en definitiva la autoridad

de aplicación —ergo el señor ministro de Economía— será quien finalmente autorice el funcionamiento de la zona franca a través del concesionario respectivo.

Además discrepo cordialmente con el señor miembro informante de la mayoría cuando justifica la mutilación a la facultad tributaria provincial que se establece expresamente en el artículo 31, que dice que las provincias no podrán disponer exención impositiva alguna para alentar, favorecer o estimular la radicación de zonas francas u operaciones comerciales o industriales. Por supuesto que esto está alineado en la misma concepción del Pacto Fiscal que votaron los senadores de la mayoría. O sea que el diseño de la política tributaria y fiscal sigue estando en el poder central y no donde corresponde conforme lo que establece nuestra propia Constitución; o sea, las provincias.

¿Por qué cercenarle esa atribución a las provincias? Por ejemplo, en mi provincia se encuentra el paso de los Libertadores que es la tercera aduana del país, por donde atraviesan no sólo los productos de Mendoza —que son la mayoría— sino todos aquellos que vienen del Brasil y salen hacia el Pacífico por el puerto de Valparaíso. En el paso de los Libertadores hay un tráfico creciente, con un alto grado de saturación tanto en la carretera como en el túnel que nos une con Chile. Funcionarios de mi provincia ya anticiparon la creación de una zona franca en Uspallata, a cien kilómetros del paso de los Libertadores. ¿Por qué por medio del artículo 31 se va a impedir a Mendoza a través de las vías tributarias que son de nuestra competencia exclusiva, establecer nuevos estímulos para favorecer o alentar un nuevo polo de desarrollo industrial en esa zona franca? Otro tanto va a ocurrir con Malargüe, un seguro emplazamiento de otra zona franca. No admitimos bajo ningún aspecto el contenido de este artículo.

Por otra parte se incluyó una cláusula en el dictamen del Senado, una delegación legislativa que nosotros consideramos inaceptable.

El Código Aduanero dice que las zonas francas deben ser creadas por ley. Pero hoy, a escasas horas de iniciarse esta sesión, me notifico de que se ha incorporado una cláusula por la cual se faculta al Poder Ejecutivo a crear zonas francas en distintas regiones del país. Y no solamente zonas francas. Peor aún: territorios aduaneros especiales que están en otra categoría superior del sistema aduanero.

Recordemos que un territorio aduanero especial es lo que en su momento se constituyó en Tierra del Fuego. En estas zonas los aranceles

se disminuyen en un 85 por ciento. Quiere decir que prácticamente hay una apertura económica sin límite.

En virtud de esta delegación legislativa a que hago referencia, el presidente de la Nación queda facultado a crear en cualquier zona del país que lo justifique —se emplea, en efecto, una fórmula amplia— un territorio aduanero especial. Esto importa, reitero, una impropia delegación legislativa, que no estamos dispuestos a convalidar.

Inclusive, se ha incorporado en el dictamen un título III que crea un régimen de territorio aduanero especial para los departamentos de la Puna en las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta. Estos territorios tienen beneficios impositivos significativos, muy superiores a los de las zonas francas. Y en el día de hoy se ha incorporado a dos localidades de Santa Cruz y Chubut.

Yo quiero ser muy claro en esto. Comprendemos las razones que da el señor senador por Jujuy y compartimos las razones que darán los señores senadores por Chubut y por Santa Cruz. Hace un mes, con motivo de nuestro viaje a Laguna del Desierto, permanecí en Río Gallegos. Estuve con el gobernador. Recorrimos todas las zonas afectadas por la zona franca de Punta Arenas. El gobernador Kirchner me decía que los empleados de la administración pública cobran sus sueldos los primeros días de cada mes y viajan a Punta Arenas para hacer compras para su consumo mensual en Río Gallegos. Quiere decir que dejan esos recursos en la zona franca, que está a unos 250 kilómetros de Río Gallegos, capital de Santa Cruz.

Vamos a admitir, entonces, todas las razones que aquí se den. No utilizamos un criterio mezquino. Pero, me pregunto: ¿no se ha pensado en Formosa, para crear un territorio aduanero especial?, que tiene una extensa frontera con Paraguay, que tiene un régimen arancelario análogo al de las zonas francas de Iquique y Punta Arenas? ¿O en el Chaco, que también tiene una frontera con el Paraguay, de 200 kilómetros? ¿O en Misiones, que es la provincia que tiene más fronteras con otros países, ya que el 90 por ciento de sus límites está constituido por la frontera con Paraguay y Brasil, y solamente está unida al territorio argentino por 70 kilómetros? ¿O, como bien señalaba el senador Aguirre Lanari, en Corrientes, que limita con tres países: Paraguay, Brasil y Uruguay? Si aplicáramos un criterio de equilibrio, de justicia, tendríamos que extender el tratamiento de territorio aduanero especial a todas esas provincias. Pero con la extensión del tratamiento del territorio aduanero especial a todas estas provincias estaríamos desnaturalizando

completamente la inspiración que tuvo originariamente este proyecto de ley y lo convertiríamos en un proyecto inviable.

Por eso, llamamos a la reflexión a los senadores del oficialismo. Estamos creando castillos en el aire. Cuando el texto pase a la Cámara de Diputados, sin duda alguna va ser objeto de modificaciones. Y con esto quizá estemos matando esta iniciativa cuando lo que nos interesa es que este proyecto tenga viabilidad parlamentaria, llegue al Poder Ejecutivo y podamos exigir su promulgación tal cual está redactado. Entiendo que muchas modificaciones que se van a introducir en este debate atentan contra ese objetivo que es, reitero, contar con un proyecto racional posible y que sea aceptado por la mayoría de la Cámara baja —que deberá tratarlo nuevamente— y, en definitiva, pase al Poder Ejecutivo.

Con lo expuesto, señor presidente, dejo expresada nuestra opinión favorable en general con respecto al proyecto de ley en consideración y el voto afirmativo en consecuencia.

Nuestras observaciones son severas, señor presidente, y en oportunidad de considerarse la iniciativa en particular van a ser motivo de propuestas concretas a efectos de reformar su articulado aunque también debo señalar que no soy optimista respecto de la suerte que puedan correr estas propuestas. Digo esto porque en el transcurso de largas conversaciones mantenidas durante las últimas semanas hemos agotado el tema sin haber logrado cambiar una sola coma del proyecto tal cual lo propone el dictamen del oficialismo.

Por ahora, nada más.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

Sr. Snopek. — No sé si me es posible formular alguna observación...

Sr. Romero Feris. — Cómo no.

Sr. Presidente (Storani). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: en función de lo expresado por el orador que me precedió en el uso de la palabra quiero realizar algunas aclaraciones.

En primer lugar, la Nación no determina dónde se radica la zona franca en cada provincia sino que es la provincia la que elige su ubicación, toma la decisión, hace su propuesta —reitero: no lo determina el Ministerio de Economía sino la provincia—, y consecuentemente suscribe el convenio.

Sr. Genoud. — La provincia propone y la Nación dispone. Es así.

Sr. Snopek. — De ninguna manera. El mecanismo es distinto; hay que leer los artículos correspondientes, sobre todo el inciso d) del artículo 14 por el cual la Nación asegura la transparencia de los actos.

Por otra parte aquí se ha criticado el criterio que hemos adoptado respecto del artículo 31...

Sr. Genoud. — ¿Que leamos el inciso d) del artículo 14? Es como yo digo: la provincia propone y la autoridad de aplicación dispone; y disponer es resolver. Si no le gusta...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Snopek. — Pido que se me respete en el uso de la palabra.

Yo no he interrumpido a nadie y pido ser respetado en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — El señor senador por Corrientes, bloque autonomista, estaba anotado anticipadamente.

Sr. Snopek. — Entonces, anóteme para hacer uso de la palabra después.

Sr. Presidente (Storani). — Usted hizo uso de la palabra inicialmente; luego, en nombre del bloque radical, habló el señor senador por Mendoza; y ahora le corresponde hacer uso de la palabra al señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

Si el señor senador por Jujuy tiene alguna discrepancia que expresar, que lo haga en oportunidad de la discusión en particular.

Sr. Snopek. — Entonces luego haré uso de la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Storani). — Le corresponde hacer uso de la palabra al señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: en nombre del bloque autonomista quiero adelantar mi voto afirmativo a este proyecto de ley. Pero también deseo dejar sentada mi discrepancia en algunos aspectos particulares de la iniciativa. Una vez finalizada mi exposición sobre el tema de zonas francas haré llegar a Secretaría las observaciones que quiero formular con respecto a diversos artículos de este proyecto de ley que recientemente ha llegado en revisión de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa encierra una multitud de puntos conflictivos. Por ello, la prudencia y mesura de esta Cámara deben procurar un justo equilibrio y una equitativa distribución de los beneficios que supone el establecimiento de zonas

francas, sea tanto en su acepción plena como en la más restringida, categorizada como zonas francas comerciales.

Señor presidente: estamos frente a una propuesta que procura dar vida al mayor instrumento geopolítico de desarrollo que tienen principalmente las economías regionales para convertirse en polos de desarrollo y crecimiento, considerando de modo particular que la política de apertura que lleva a cabo el gobierno nacional, unida a la sobrevaluación cambiaria sobreviniente de la Ley de Convertibilidad, las han colocado en una situación de pérdida de competitividad de sus producciones ante los mercados externos. Quiere decir que las economías regionales están en una situación realmente desesperante. Es necesario que se señale esta situación y se ponga énfasis en ella.

Aquí no se está legislando un modelo de zona franca al estilo de una contratación de nivel internacional en busca de mano de obra barata, sin cargas laborales y al modo de algunas factorías del medioeste asiático o de los países centroamericanos. Este tipo de experiencias se halla en retroceso en el orden internacional; poco beneficio permanente ha dejado en los lugares donde fue implementado. Por el contrario, señor presidente, el establecimiento de zonas francas en nuestro país no tiende a buscar la explotación de un costo salarial minimizado sino a crear las condiciones para el desarrollo de actividades comerciales e industriales despojadas de todos los sobrecostos que nuestra organización económica ha ido creando y que hoy se constituyen en una rígida estructura que impide producir a precios internacionales.

Nos encontramos entonces frente al primer problema: la cantidad y ubicación de las zonas francas, tal como se ha planteado.

Si tenemos en cuenta que son consideradas como condiciones necesarias y poco menos que imprescindibles para el establecimiento de una zona franca el hecho físico de que se halle en un área fronteriza con eficientes comunicaciones tanto en materia terrestre como fluvial o marítima con los países vecinos, que tenga una adecuada estructura para el tráfico aéreo y que cuente con instalaciones apropiadas para el movimiento de grandes volúmenes de mercancías, suponiendo ello los necesarios servicios de energía eléctrica, comunicación, agua potable y otros requerimientos urbanos, reducen las posibilidades de modo muy notorio.

Recuerdo que la Organización de Estados Americanos, OEA, ha aconsejado que debe estimularse el desarrollo de puertos libres o zonas francas como centros de distribución en luga-

res que deben ser privilegiados por su ubicación geográfica así como por sus medios de comunicación. Por ello considero que deben evaluarse muy cuidadosamente las ventajas de los futuros enclaves de las zonas francas de modo de minimizar los costos y restricciones y de maximizar los beneficios, de manera tal que resulten provechosas para el conjunto total de la economía y no se conviertan en un subsidio encubierto que el resto de las provincias otorga a dicho lugar. Es necesario dejar establecido, señor presidente, que es fundamental el crecimiento armónico y equilibrado del país y no el crecimiento desigual y los bolsones de pobreza que hasta ahora se están presentando en distintos sectores de la comunidad nacional.

Otro factor a tener en cuenta es la influencia que sobre determinadas economías provinciales tiene su carácter de frontera con otros países que acordaron el establecimiento de áreas francas, lo que, por las facilidades de medios de comunicación, las convierten en mercados abastecidos por dichos países en detrimento de la producción y el comercio local.

Mi provincia, Corrientes, tiene más de 800 kilómetros de frontera con tres países del Mercosur: Uruguay, Paraguay y Brasil. Paraguay tiene a Ciudad del Este y a Puerto Ayolas como zonas francas; Brasil ha establecido una zona en Manaus más cuatro áreas de libre comercio, en tanto que la República Oriental del Uruguay cuenta con zonas francas en Nueva Palmira y Colonia.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Juan C. Oyarzún.

Sr. Romero Feris. — Por ello, no nos debe extrañar que nuestras ciudades de Santo Tomé y Paso de los Libres, fronterizas con la República Federativa del Brasil, como Monte Caseros, que concuerda con el límite entre aquella y el Uruguay, e Ituzaingó, lindera con el Paraguay, sufran efectos devastadores en esta situación.

Ninguna otra provincia está en situación comparable a la de Corrientes. Este hecho, que debiera haber sido fuente de riqueza, como es la posibilidad de un fluido intercambio comercial, se ha convertido, por obra y gracia de la sobrevaluación de nuestro peso, en cuna de males, agotando nuestros comercios y cerrando nuestras industrias. Basta ver el sentido del tráfico de las mercancías por los puentes internacionales para establecer el nivel de la paridad cambiaria y probablemente podría llegarse a establecer una relación cuasi proporcional entre ambas circunstancias.

Esta situación debe tener remedio urgente, por lo cual considero que debemos dar pronta sanción a este proyecto, al que propondré algunas modificaciones.

En primer término, considero que debe incorporarse a las definiciones del artículo 1º la relativa a la “zona franca comercial” que el Código Aduanero expresa en su artículo 597. Esta precisión es importante por cuanto el artículo 2º, segundo párrafo, habla de “zonas francas comerciales”, que quedarían sin definir. Asimismo, el tercer párrafo de dicho artículo vuelve a referirse a zonas francas. Por tanto, entiendo que el artículo ganaría en claridad si se invirtiese el orden de los párrafos segundo y tercero.

En el artículo 3º las comisiones han añadido al texto aprobado por la Cámara precedente la creación y puesta en funcionamiento de un organismo federal encargado de divulgar y promocionar las actividades de las zonas francas creadas en el territorio nacional.

Comparto plenamente el agregado, que a mi juicio debiera tener aun mayor amplitud. Debiera ser este organismo federal el que autorizare la creación de las zonas francas, evitando así a las provincias la dependencia en que el artículo 2º las coloca respecto del Poder Ejecutivo nacional para la autorización respectiva. Creo que debemos rescatar los principios básicos del federalismo y de las autonomías provinciales asumiendo nuestras facultades y derechos sin delegaciones o concesiones al poder administrador cuando son innecesarias.

En el artículo 9º se ha agregado un segundo párrafo ampliando la posibilidad de autorización de operaciones al por menor a los casos de las provincias fronterizas con determinada densidad demográfica. Solamente las provincias de Chubut y Santa Cruz revisten dichas condiciones y debiéramos evitar estos eufemismos y acordar a la Comisión Federal esa facultad para convenir con las provincias mencionadas la ciudad o pueblo que soliciten para este destino.

En cuanto al artículo 14, relativo a la constitución de comisiones provinciales de evaluación y selección de los proyectos de explotación de zonas francas, entiendo que es esta ley la que debe fijar puntualmente las condiciones, por lo que cabe dejar sin efecto el último inciso, el e), que establece que ellas deben cumplir con “Las demás que establezca la reglamentación de la presente ley”, con lo cual damos carácter de colegislador a la burocracia administrativa que se encargará de dar su propio espíritu a esta norma.

Formulo idéntica observación al artículo 20 y su inciso b) acordando análogas facultades.

Eventualmente para ambos casos la redacción de las normas complementarias tendría que estar a cargo de la Comisión Federal, cuya creación se propicia en el artículo 3º, en su segundo párrafo.

Las comisiones han reintroducido en el texto como artículo 36 la carencia de restricciones a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos que se efectúen en las zonas francas.

Este artículo había sido suprimido por la Cámara de Diputados por la aprensión de que pudiese facilitar operaciones de lavado de dinero procedentes del narcotráfico. Entiendo que deben facilitarse las operaciones cambiarias, pero que aquéllas deben cumplir con las reglamentaciones que el Banco Central de la República Argentina haya dictado o dicte al efecto. En este aspecto, debe tenerse particularmente en cuenta que la multiplicación de zonas francas generales, que ya este proyecto de ley fija en no menos de veintisiete, a las que corresponderá adicionar las zonas francas comerciales, no debe posibilitar la proliferación de entes financieros que utilicen estas franquicias como pantallas de actividades ilícitas.

Por tal motivo, entiendo que aquí conviene añadir al artículo la expresión "salvo las que con carácter general dicte o haya dictado el Banco Central de la República Argentina".

Señor presidente: admito la necesidad de la creación de un territorio aduanero especial como el que prevén los artículos 47 a 49 para la denominada "puna argentina".

Como en los casos anteriores, creo que es la Comisión Federal —que tendrá la participación del Poder Ejecutivo provincial que corresponda— el ente que tiene que acordar la autorización a que alude el segundo párrafo del artículo 47.

Pero así como el caso de la puna argentina está requiriendo un tratamiento particular, yo solicito similar tipo de preferencia para mi provincia, en lo que hace a las zonas francas comerciales.

Como dije al principio, no son iguales —ni siquiera parecidos— los efectos perniciosos que sufre una provincia limítrofe con intenso tráfico diario de mercancías a través de la frontera, y los que se producen en las provincias mediterráneas.

Por tal razón, entiendo que este proyecto debe acordar una prioridad temporal para el establecimiento de las zonas francas —particularmente en el caso de las zonas francas co-

merciales— en aquellas provincias que tengan ciudades ubicadas geográficamente en el límite internacional, por cuanto —reitero— son las que están sobrellevando las mayores penurias derivadas del actual modelo económico, en materia de apertura y sobrevaluación cambiaria.

Haré llegar a la Secretaría —como dije— las modificaciones solicitadas para su análisis durante el tratamiento en particular de este proyecto de ley.

Señor presidente: como lo expresé al principio, adelanto mi voto positivo en general, y en particular planteo los cambios a los que acabo de referirme. Quiero añadir una reflexión más. Todos estos sistemas de excepción nacen porque la realidad de la vida socioeconómica de los pueblos así lo exigen. Como toda excepción a un régimen general, debe instrumentarse para que cumpla cabalmente su objetivo y no se convierta en pantalla o disfraz de otras actividades que se amparan en la norma.

Nuestro país registra varios antecedentes negativos sobre el particular, tanto en lo que se conoció como la promoción industrial como en materia de los denominados fondos nacionales para distintos fines, sobre cuya aplicación y destino no existieron informes claros —o bastante menos— sobre la utilización de dichas sumas.

Cuando debatimos en este Senado el proyecto de ley sobre promoción industrial, también venido en revisión de la Cámara baja, a la que retornó con modificaciones, manifesté que el estímulo fiscal sobre el cual se sustentaba la filosofía de aquel proyecto debía tener más que nada el carácter de compensación de las desventajas regionales derivadas de la configuración geográfica o de la propia historia nacional, de modo de permitir un crecimiento armónico de las regiones de la Argentina, pero que el auténtico desarrollo pasaba por la definición de una política industrial para lo cual era necesario tanto el desarrollo del mercado interno cuanto la apertura hacia los mercados internacionales, apoyando enérgicamente las exportaciones.

En aquel debate de setiembre de 1988 había yo propuesto la fijación de un tipo de cambio único dictado por ley de la Nación, debiendo ser este Congreso —decía entonces— quien determinase los parámetros, de modo tal de dar a nuestra producción el medio necesario para poder competir internacionalmente. La Ley de Convertibilidad satisfizo el primer requisito, no así el tipo de cambio fijado, que hoy resulta

promotor de la invasión de productos que nuestras economías regionales reciben, a la vez que obstáculo para dar salida a nuestros bienes.

Como entonces, enfatizo que en tanto funcionen transitoriamente estos regímenes de excepción, el país debe apuntar a su auténtico desarrollo permanente por medio de la definición de una política global de desarrollo y por la concreción de las obras de infraestructura básica para el desarrollo industrial, consistentes en producción y distribución de energía eléctrica a precios competitivos, buenos sistemas de transporte, tanto en materia terrestre como fluvial y marítima, sin descuidar el transporte aéreo, modernizándose las comunicaciones y estableciendo una política oficial de construcción de viviendas para permitir el asentamiento poblacional, además de otros requerimientos, algunos de los cuales hoy son realidad, como la derogación de regulaciones superfluas y burocráticas innecesarias así como normas que constituyeran privilegios u otorgasen monopolios.

Aquel proyecto de promoción industrial nunca llegó a tener sanción definitiva, pero siguen siendo válidas las consideraciones efectuadas, a las que acabo de referirme. En el tiempo transcurrido desde entonces, el país ha avanzado de manera importante en algunos de estos temas, pero no ha conseguido superar la opción "estabilidad o crecimiento".

Las zonas francas pueden ser hoy, como ya dije, el instrumento necesario, más todavía, imprescindible, para encaminar el proceso de desarrollo. Por eso apoyo este proyecto, pero mantengo mi reclamo sobre la asignatura pendiente: la definición de la política global de desarrollo y la concreción de una infraestructura acorde con dicha política.

Voy a hacer llegar a Secretaría las modificaciones que acabo de mencionar.

Sr. Presidente (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — El proyecto de ley en revisión que se somete a consideración de esta Honorable Cámara tiene por objeto reglamentar las actividades de las zonas francas que se proyecta instalar en todo el territorio nacional.

El concepto de "área franca" como instrumento especial de la política aduanera, utilizado dentro del contexto de la política económica nacional, ha sufrido diversas acepciones, vinculadas con los fines que sucesivamente y a través del tiempo han sido tenidos en cuenta para su consideración.

Su problemática desborda las meras consideraciones de índole técnica y requiere definiciones previas de carácter político, vinculadas particularmente al área de las relaciones exteriores, a la economía y al ordenamiento territorial del país donde se debate el tema.

Por eso, la iniciativa que hoy estamos considerando concibe la creación de áreas francas como un medio de impulsar el desarrollo de determinadas regiones que se encuentran deprimidas respecto del resto del país o bien con una ubicación geográfica particular, fronteriza o muy alejada de los centros de mayor desarrollo económico.

Es evidente que la utilización de este instituto de las áreas francas puede producir interesantes beneficios como factor de promoción de las inversiones, ya sea por la atracción de capitales nacionales o extranjeros hacia su territorio, o por la promoción del intercambio regional. Pero, en todos los casos, la decisión de instalarlas debe estar incluida dentro del marco general de la estrategia de desarrollo del país, previa evaluación de las ventajas y costos que resulten de su instrumentación.

Por otra parte, sería de desear —aunque no va a ser así seguramente—, que no se olvide que las áreas francas sólo pueden concebirse como "dosis homeopáticas", y como tales deben ser pocas y pequeñas para que surtan su real efecto y sirvan al objetivo para el cual fueron creadas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Conrado Storani.

Sr. Aguirre Lanari. — Si analizamos los antecedentes de este tema —a ellos se refirió el señor senador Genoud—, veremos que es un viejo anhelo de distintos señores senadores pertenecientes a los más diversos credos políticos, preocupados desde antaño en encontrar, en casos concretos y particulares, una respuesta a reclamos de las poblaciones y provincias que representamos.

Hemos tenido muchos ejemplos en este sentido y a ellos, como dije, se refirió el señor senador Genoud. En homenaje a la verdad, quiero señalar que los legisladores de Corrientes en la Cámara de Diputados, pertenecientes a todas las bancadas políticas, presentaron hace dos años un proyecto en común, respondiendo a un clamor de nuestra provincia, que ha sido citada hoy varias veces. Nunca dejará de ser justa esa cita porque, precisamente, como se ha puesto de ma-

nifiesto —y también lo hago yo, tenemos una situación muy particular como producto de nuestra ubicación geográfica que, si bien es cierto tiene grandes ventajas y profundas expectativas en cuanto al futuro, no deja de significar también una situación acuciante por la competencia y atracción que otros polos de desarrollo allende nuestras fronteras ejercen sobre las economías provinciales. Por eso presenté también un proyecto, al que se refirió el señor senador Genoud, por el que se solicitaba la creación de zonas francas en localidades de mi provincia.

Ahora bien, pasando al análisis del proyecto en revisión, nosotros tenemos que en el artículo 2º se faculta al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes —ya se ha hecho referencia a las de La Plata, Santa Fe y Concepción del Uruguay— a los efectos de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente no más de cuatro áreas francas en todo el territorio nacional.

Con respecto a estas áreas francas adicionales es muy importante tener especialmente en cuenta —como ya han dicho varios señores senadores y yo también he repetido— a las provincias que tienen una extensa zona de frontera, pues son las que están más acuciadas por la presencia de estos institutos detrás de las fronteras con nuestros países hermanos. Ello puede ocasionar, y de hecho lo hace, un gran perjuicio.

Recién el señor senador Romero Feris hizo un comentario muy ajustado. Recibimos los requerimientos de nuestras provincias y visitamos nuestras ciudades fronterizas en donde se pueden ver las consecuencias de esta situación, respecto de la que tiene que ver entre otras cosas el valor de nuestro peso, que hace que haya una profunda atracción en las zonas de frontera y que misioneros, formoseños y chaqueños se crucen al Paraguay o al Brasil a comprar a precios mucho más baratos aquello que realmente nuestros comerciantes no pueden entregar de la misma manera, lo que produce una incidencia negativa para nuestra economía.

Esto nosotros lo vemos especialmente en Corrientes. Allí tenemos una tremenda competencia, leal sin duda, pero competencia al fin, con Paraguay en ciudades como Ciudad del Este o Ayolas, que está frente a Ituzaingó, o la que hace unos momentos se recordaba, la zona de Manaos en Brasil, o Colonia y Nueva Palmira en Uruguay, que linda con nuestro territorio.

Es decir que Corrientes tiene una situación muy especial. Es por ello que hemos recibido

los legisladores de esta provincia una carta del señor gobernador, quien está preocupado y nos hace saber lo siguiente: (Lee)

Corrientes, 23 de febrero de 1994.

Señor senador nacional doctor Juan Ramón Aguirre Lanari.

S/D.

* Me es grato dirigirme a usted en relación al proyecto de ley aprobado el 7 de diciembre de 1993 por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que pasó a revisión de ese honorable cuerpo, sobre "Creación de zonas francas en todo el territorio de la República Argentina".

Al respecto, me permito realizar una sugerencia a fin de que se tenga presente en caso que se decida introducir modificaciones al proyecto mencionado, o bien que conste como recomendaciones al Poder Ejecutivo a los efectos de ser considerada en el decreto reglamentario.

El capítulo "Disposiciones generales" prevé en su artículo 2º: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyendo las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo con carácter de excepción crear adicionalmente, no más de cuatro (4), a ser ubicadas en aquellas provincias o regiones geográficas, que por su situación socioeconómica crítica justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

"Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional convendrá con los gobiernos provinciales establecimientos de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizas con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio."

En la Subsecretaría de Planeamiento de la Gobernación obran los antecedentes relacionados con los requerimientos realizados por las municipalidades de Paso de los Libres, Ituzaingó, Santo Tomé y Monte Caseros, a efectos de ser considerados especialmente como zona franca. Estas localidades esgrimen diversos argumentos, todos ellos atendibles, pero destacaremos tan sólo algunos, a saber: todas son fronterizas con los restantes países integrantes del Mercosur, éste es un aspecto doble de destacar, ya que es la única provincia argentina que posee frontera con todos los países integrantes del Mercado Común. Esta posición que en algunos aspectos la privilegia, en otros la hace pasible de circunstancias dañosas para la producción local.

Sobre este aspecto, cabe agregar el hecho de que Paso de los Libres posee un aeropuerto internacional, caminos que posibilitan el fácil acceso, es la primera aduana terrestre del país y cuenta con el puente internacional a lo que se adiciona una importante infraestructura montada en torno de los servicios de importación y exportación.

Ituzaingó, a treinta kilómetros, cuenta con el aeropuerto de Ayolas, y es el epicentro de un futuro polo de desarrollo, como lo es Yacyretá.

Santo Tomé tiene proyectado el puente internacional Santo Tomé-San Borja y posee un resguardo aduanero jurisdiccional, que posibilita el tráfico regional fronterizo, ubicado muy cerca de núcleos urbanos de enorme densidad demográfica, como Santa María y Porto Alegre, en Brasil. Monte Caseros, por su parte, cuenta con suficiente infraestructura de comunicación y servicios.

Ante esta circunstancia se sugiere la incorporación de alguna cláusula que delimite aún más la facultad del Poder Ejecutivo nacional de elección de las dos zonas francas de excepción, como podría ser al final del primer párrafo, priorizando a las provincias que cuenten con mayor cantidad de territorio fronterizo y limiten con más de dos países integrantes del Mercosur.

Por otra parte, agrega el gobernador Romero Feris, que de Paso de los Libres a Ituzaingó existe una distancia de 393 kilómetros, lo que encuadra en uno de los factores señalados en el articulado.

Felizmente, todos sabemos que esto ha sido cambiado o suprimido por la nueva redacción que va a considerar el Senado.

Y bien, señor presidente, presenté una nota formal al presidente de la comisión cabeza el 25 de febrero, en la que sugería que el artículo 2º quedara redactado de la siguiente manera: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose a las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente cuatro —quizás más, ponía yo— en todo el territorio nacional, para ser ubicadas prioritariamente en aquellas regiones geográficas que por su extenso territorio fronterizo y vecindad con más de dos países integrantes del Mercosur, justifique la necesidad de este instrumento de excepción."

Lamentablemente, señor presidente, esto no mereció ni siquiera una respuesta cortés diciendo que se desechaba mi petición. Pero son cosas del cálculo numérico.

Quiero agregar, señor presidente, que del artículo que estamos comentando surge que, además de constituirse veintiocho áreas francas en todo el territorio nacional, cada provincia que limite con un país que tenga áreas francas en su territorio podrá convenir con el Poder Ejecutivo nacional la creación de áreas francas comerciales.

Y quiero agregar que parecería importante la modificación que se propone introducir en el párrafo tercero del artículo 2º, con el objeto de aclarar una contradicción que se planteaba al leer en forma conjunta los párrafos segundo y tercero del citado artículo, ya que de los mismos

se deducía que cada provincia podía convenir con el Poder Ejecutivo nacional la creación de "zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción" —párrafo segundo—, afirmándose por lo contrario en el párrafo tercero que no se podría establecer más de una por provincia.

O sea que se planteaba una duda ya que no quedaba claro si la limitación correspondía a las zonas francas industriales, comerciales, o ambas a la vez. Por ello es importante la modificación introducida por este Senado, la que tiene por objeto aclarar el contenido de este artículo. Además, cabe señalar que el anterior requisito de los trescientos kilómetros mínimos entre dos zonas francas impedía o dificultaba la instalación de más de una zona franca en una provincia y en otras provincias de similar situación.

Puede observarse, de acuerdo con el proyecto en consideración, que las zonas francas se repartirán por todo el país, motivo por el cual tanto las autoridades nacionales como los organismos provinciales deberán extremar sus recaudos para evitar que la diseminación de las mismas no desvirtúe los efectos buscados trayendo como consecuencia decisiones arbitrarias u oportunistas.

El artículo 3º dispone la creación de un organismo federal destinado a divulgar y promocionar las actividades de las zonas francas creadas en el territorio nacional. Estoy de acuerdo con lo que se señaló recientemente respecto de las facultades que se propician en favor de este organismo federal que, sin duda alguna, constituirá una representación auténtica de los entes provinciales del interior del país.

Y no solamente considero oportuno y acertado lo que se dijo recientemente sino que también creo que entre las facultades a otorgársele se debe prever la de permitir la colaboración del mismo en la estructuración de la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo, pues nadie más y mejor habilitados que los hombres del interior del país, que están en contacto con las acuciantes realidades, para participar en una reglamentación adecuada.

Debo expresar también mi preocupación con lo que surge del texto del artículo 36, al que se refirió recientemente el señor senador Romero Feris, cuando no se establecen restricciones a las operaciones de divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos, ya que sin duda alguna, si no se tienen muy presentes las reglamentaciones de los organismos rectores como el Banco Central u otros, podemos caer en un círculo vicioso que roce con el tema tan debatido y manido en todos

los países —en el nuestro también— relacionado con el blanqueamiento de dinero por la acción del narcotráfico internacional.

Quiero hacer mención al título III del proyecto referido al Territorio Aduanero Especial, que ha sido establecido por este Senado. Según la nueva redacción del artículo 47 se establece como tal no sólo la puna argentina sino también lo que llamaríamos la Patagonia austral, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los gobiernos provinciales el establecimiento de territorios aduaneros especiales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes, puertos o vías navegables, para facilitar o beneficiar las operaciones de las zonas francas de la provincia o región.

Considero algo confusa la redacción de la última parte del artículo. Es comprensible la autorización para que se cree una zona aduanera especial en ciudades fronterizas con países limítrofes. Pero luego se agrega a los "puertos o vías navegables". Me pregunto qué significa esto. ¿Significa que en las ciudades que tengan puertos o estén ubicadas sobre vías navegables pueden crearse áreas aduaneras especiales? ¿O es una condición que se agrega a la de ser ciudades o pueblos fronterizos. No la critico; es una duda que tengo en cuanto a la interpretación. Seguro que la comisión en su momento dará la explicación pertinente.

Creo que sin duda alguna esto se ha hecho con el legítimo empeño de los representantes de las zonas que van a ser beneficiadas a través de un alivio o un estímulo a sus economías. Como bien se ha dicho hace instantes, creo asimismo que no solamente esas zonas sino también otras entre las que se encuentran mi provincia y todo el nordeste argentino son merecedoras de que se contemple su situación si así lo aconsejaban el desarrollo de los acontecimientos, porque tenemos y vamos a seguir sufriendo una competencia muy fuerte como consecuencia de las asimetrías que sin duda alguna existen y seguirán acentuándose si no se introducen remedios de índole general.

Una consideración final corresponde en este tema. Si bien es cierto que la idea de las áreas francas e incluso de las zonas especiales responde a un concepto primario tendiente a establecer polos de desarrollo en determinadas regiones de nuestro país, la necesidad de tonificarlas se acrecienta cuando tenemos presente que dentro de la estrategia nacional se inscriben los pasos acelerados que estamos realizando pa-

ra concretar el ambicionado Mercado Común y la Zona de Libre Comercio incluidos en el proyecto del Mercosur.

Conocidas son las dificultades prácticas que han surgido y seguirán surgiendo en este camino que estamos intentando con nuestros vecinos. Estas dificultades son particularmente vívidas en las provincias fronterizas y se acentúan con interrogantes que no podemos descuidar ante distintas asimetrías de unos países con otros, lo que trae resultados no queridos en la complementación económica y en el camino común que se quiere recorrer.

No es que algunas provincias están en el patio de atrás, porque los que estamos en lo que podría considerarse el patio de adelante, que es el contacto directo con el Mercosur, no seremos seguramente los privilegiados dado que estamos en una zona de choque en donde, como lo he dicho recién, sentimos el contacto vivo y la competencia muy fuerte, no siempre fácil ni segura en cuanto a la posibilidad de contrarrestarla con éxito.

Pienso que, cuando junto a la frontera exterior se han creado o están en vías de crearse incentivos de desarrollo en los países vecinos integrantes del Mercosur, también nosotros debemos ser previsores para asegurar ese equilibrio acosado por las asimetrías.

La provincia de Corrientes es un ejemplo muy singular, ya que linda con tres países hermanos en la frontera viva, quizá la más extensa del país. Reclamamos desde ya una consideración de las autoridades nacionales encargadas de dictaminar en los beneficios y zonas a crearse para poder afrontar el difícil desafío de la integración.

Con estos auspicios, ayudando a la creación de estos polos de desarrollo que impulsen cambios económicos y sociales positivos para nuestros pueblos, podremos afrontar la competitividad con los países hermanos en beneficio de nuestras economías regionales.

No basta con la enunciación de buenos propósitos, los que sin duda son comunes entre todos nosotros. Tenemos que actuar pensando en el interés general, que no admite el sacrificio de regiones alineadas en el trabajo y deseosas de contribuir al bienestar general de todos los argentinos sin excepción.

Creo que es legítimo y necesario admitir la preocupación que tenemos, deseosos de que esta instancia que hoy abrimos no signifique una frustración dados los interrogantes que aquí se han planteado y se plantearán, como por ejemplo, el

de la delegación de las atribuciones establecidas en el artículo 47 en el Poder Ejecutivo, como lo hizo notar el señor senador por Mendoza.

Con estos sentimientos que nos exigen realismo, sin perjuicio de las propuestas de modificaciones parciales que auspiciaré o apoyaré, doy mi voto afirmativo al proyecto en general.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital, del bloque justiclista.

Sr. Vaca. — Señor presidente: seré breve. Tal como lo anunciara el señor senador por Mendoza, el propósito de mi intervención es corregir un involuntario error, o tal vez algo menos que eso: un simple olvido.

Desde el artículo 2º se hace mención de los territorios de las provincias y de los gobiernos provinciales, y nada se dice del territorio de la ciudad de Buenos Aires ni del gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué creo que esto ha sido meramente un olvido? Porque al escuchar la fundamentación del miembro informante de la mayoría queda claro que el objetivo principal de este proyecto es dotarnos de un instrumento de política económica orientado a agilizar el comercio exterior, facilitando nuestras exportaciones. Del texto del proyecto no se infiere que haya un propósito promocional regional o provincial dado que se otorga a cada uno de los distritos la capacidad de tener una zona franca. De manera que creo que la falta de referencia a la ciudad de Buenos Aires ha sido un mero olvido.

Dado que la mención de los territorios y gobiernos provinciales se repite en varios artículos, yo propondría, para no entorpecer la corrección del texto, la inclusión de un artículo al final del título II, entre los artículos 46 y 47, a los efectos de salvar este olvido. Habría, por consiguiente, un nuevo artículo 47, y deberemos corregir la numeración a partir de allí. Su texto sería el siguiente: "Entiéndese que las referencias hechas en la presente ley con respecto a las provincias y a los gobiernos provinciales incluyen al territorio de la Capital Federal y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires."

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. León. — Señor presidente: estamos tratando un proyecto que viene en revisión y que persigue, creo yo, un mayor crecimiento, un mayor desarrollo de muchas de las zonas de nuestra nación.

Ya se ha hecho mención aquí de cómo son definidas las zonas francas por el artículo 590

del Código Aduanero. Se me ocurre que también podríamos definir las como áreas cercadas, vigiladas, de un puerto, aeropuerto u otro punto mediterráneo adonde puede traerse mercadería de origen extranjero para ser transportada por tierra, agua o aire, sin el pago de los derechos aduaneros. Generalmente las empresas comerciales pueden depositar, exhibir, probar, mezclar, seleccionar, reenvasar y elaborar diversas mercaderías dentro de esas zonas.

Las zonas francas se utilizan a los efectos de fomentar la instalación de industrias que fabrican mercaderías para la exportación sobre la base de materias primas o componentes importados. Creo que habría que pensar que la exportación industrial tendría que ponerse en marcha en todo lo posible en base a materias primas de las propias zonas que queremos desarrollar.

La promoción de la actividad económica en general y de la industria en particular, el aumento del empleo y de la inversión, la generación de condiciones favorables para la reactivación, son algunos de los objetivos básicos que se pretenden alcanzar con la radicación de una zona franca. Y aquí no voy a entrar en el detalle de lo que establecen el proyecto de ley y el dictamen que elaboró la Comisión de Comercio, que me honro en presidir, donde se prescribe una serie de condicionamientos en búsqueda de las definiciones que mencioné al comienzo.

En general, el establecimiento de una zona franca tiene por objetivo favorecer el desarrollo del comercio interior y del comercio internacional. También en nuestro caso, ubicado en el país en el Cono Sur y, a través de él, mirando hacia arriba, supone poner en marcha una política que sirva a la integración latinoamericana. Para ello, elegimos jurisdicciones que reúnan ciertas condiciones naturales.

Aquí, cada uno de los señores senadores se refirió a un pedazo de tierra de sus provincias como propuesta para poner en marcha la zona franca. Sobre el particular, debo decir que en unos cincuenta países del mundo existen aproximadamente ciento cincuenta o ciento sesenta zonas francas. Entonces, yo pensaba: si en el mundo, en cincuenta países, hay unas ciento cincuenta zonas francas, me pregunto si nosotros los argentinos, si legítimamente los representantes de las provincias que he mencionado, no estamos reclamando demasiado. Reitero, en el mundo hay unas ciento cincuenta zonas francas y con este proyecto de ley estaremos poniendo en marcha unas veintiocho sólo en nuestro país.

Yo comparto el discurso del señor presidente del bloque radical, en alguna medida precavido frente a cierta actitud centralista de este proyecto, porque en el fondo debemos servir al crecimiento de la zona y —también en el fondo— las zonas deben elaborar su estrategia de crecimiento en función de lo que diga, piense o crea el ministro de Economía de la Nación.

Entonces, es posible que a través de las modificaciones que otra vez ahora se insertan en esta iniciativa para que vuelva a la Cámara de Diputados, frente a alguna regulación de esa Cámara, se instale una tesis de desregulación —me parece lógico, pero nosotros podemos tener algunos interrogantes al respecto— al servicio de lo que llamamos la economía de la convertibilidad.

Obra en mi poder un folleto de la Fundación Mediterránea donde luego de criticar la política de promoción industrial del anterior gobierno de nuestro país —lamentablemente no siempre fue feliz— se indica que sería saludable un esquema en el que el gobierno se limite a autorizar la creación de la zona franca y a reducir o eliminar ciertos impuestos —básicamente sobre el comercio exterior— y el sector privado se haga cargo de la provisión de la infraestructura necesaria y de su explotación para que acote el esfuerzo fiscal y garantice la racionalidad económica de los emprendimientos. Entonces, sienta la tesis de que debe ser una explotación de características totalmente privadas.

Esta es una idea que también marca algún tipo de orientación. Entonces, como a través de toda la legislación que se ha citado —y que no voy a repetir— en alguna medida nosotros creemos que debe hacerse esto con un contenido en lo posible de características federales, consideramos que aparece tal vez con recortes centrales que puede interpretar la política del gobierno nacional pero que no interpreta, a veces, muchas de las urgencias de lo que pasa en la periferia de la República.

Fíjense, por ejemplo, que hoy en mi provincia no quedan industrias. No hay ninguna; todo se cerró. Y el país en algún porcentaje tuvo crecimiento industrial en función de cuatro o cinco grandes industrias, casi todas centralizadas en los polos de desarrollo conocidos del país.

En América latina existen experiencias de establecimiento y desarrollo de zonas francas. Aquí ya se habló del caso del Uruguay, pero hay otras experiencias. En Chile creo que hay una o dos, pero no veintiocho como queremos establecer nosotros. Hay una en el sur y otra

en el norte, más concretamente en Iquique. En esta última, que se creó en 1975, hay radicadas cerca de mil empresas que generan tres mil operaciones diarias y facturan alrededor de 2.000 millones de dólares por año. Desde esa zona se abastece de distintos productos a Bolivia, al Perú y a la propia Argentina. Todos sabemos cómo ingresa en nuestro país material de Iquique.

Distintos oradores han hablado del caso del Uruguay. Pero quiero hacer notar que una sola zona franca, elaborada con inteligencia y patriotismo, puede ser suficiente. Y digo con inteligencia y patriotismo porque esta ley tendrá la característica de todas las leyes. Es decir, puede ser más o menos perfecta o saludable, pero si quienes la aplican no son patriotas ni virtuosos, la ley declina.

Por ejemplo, la ley de promoción industrial en otros países funcionó. En nuestro país en algunos aspectos también, pero el hecho de no haberla aplicado un patriota, un hombre que pone su afán de lucro pero no tanto como para deformar el sentido moral de la promoción, produjo la caída de la idea.

Entonces, este problema de las zonas francas debe tener ese ingrediente del patriotismo.

Incluso comparto lo que dice el folleto de la Fundación Mediterránea al que aludí recién: "Es de hacer notar que para que una zona franca funcione eficientemente y dentro de los más estrictos parámetros legales y de cumplimiento impositivo, es necesaria la presencia de una burocracia igualmente eficiente, ágil e incorruptible".

Justamente, uno de los requisitos básicos que necesita una zona franca en cualquier parte de nuestro país es que quienes actúen con las facilidades que da la ley en el marco de esa zona tengan la actitud de servir con lealtad a la aspiración que justifica su propio crecimiento. Digo esto porque sabemos que estas zonas también posibilitan diabluras en otras zonas. Por ejemplo, sabemos que en las aduanas de nuestro país se cometen ciertas diabluras.

Aquí a mi lado está sentado el senador Losada, con quien sabemos cómo se deforma la virtud en el manejo comercial de las zonas fronterizas que tenemos los misioneros y los chaqueños.

Por otra parte, también voy a reclamar aquí lo que creemos que es saludable para nuestra provincia, reiterando que pasaré por alto la consideración de muchos artículos.

En el proyecto se establece que en cada provincia se creará un comité de vigilancia, al que

creo que hay que dar una gran importancia porque muchos de los aspectos que contempla ese comité son trascendentes. Entre ellos figuran el de promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológica; remitir información a la autoridad de aplicación; fiscalizar la provisión de información estadística adecuada; evaluar el impacto regional de las zonas francas y articular su funcionamiento; fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de las zonas francas y en su defecto informar a la autoridad de aplicación sobre las mismas; auditar periódicamente las medidas de vigilancia y control; percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo la forma de un pago único; garantizar la concurrencia de los usuarios y velar por el cumplimiento de normas sobre medio ambiente, además de todo lo que hace al desarrollo de esas zonas.

Yo tengo ya bastante prevención sobre algunas de las cosas que debiéndolas hacer bien las hacemos regular en este tiempo. Por ejemplo, días atrás me sentí preocupado por un decreto del gobierno de la Nación por el cual se daba vía libre a los bancos extranjeros para funcionar en nuestro país, sin siquiera discutir una correspondencia de nuestro país en otras zonas en las que nosotros podríamos participar. Me parece que estamos dando muchas concesiones en ciertas cosas que el país debería custodiar.

He elaborado un proyecto por el que pido información al ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos sobre esa situación. El señor Escassany, que es el presidente de la Asociación de Bancos, acaba de hacer una declaración diciendo que, por lo menos, somos ingenuos. En tonces yo, como legislador, tengo que preocuparme sobre cuál es la ingenuidad del ministro, que les da a todos los de afuera y no pelea para que los nuestros tengan una mayor presencia. Fíjense que hace dos años que bancos argentinos están requiriendo sede en Nueva York y ni los atienden, y aquí se firma un decreto que permite que cualquier banco del mundo se instale.

A raíz del mecanismo que se utiliza puede instalarse en una zona franca un banco extranjero, porque además por este proyecto es absolutamente lo mismo que sea un argentino o un extranjero. Me parece que está bien, pero todos estaremos de acuerdo en que tendremos mucha más confianza en que esa zona, que es para nuestra promoción y desarrollo, sea ocupada por los argentinos que por los extranjeros. Porque al fin y al cabo, dada la situación actual, pue-

den ganar dinero pero se van, y nosotros queremos que se pongan en marcha inversiones que permitan el desarrollo del país, si bien estamos tratando de lograr hacerlo cada vez mejor.

Me he referido a algunos aspectos de este proyecto de ley que tratamos de poner en marcha con la pretensión de desarrollar algunas zonas francas, si bien he pasado por alto otros, sin por ello dejar de manifestar mi preocupación. Creo que es sustancial que yo me refiera, como lo han hecho otros señores senadores, al reclamo de una zona para la provincia que represento, porque así lo interpretamos. Y esto no es exclusivamente lo que yo pienso sino que tengo una síntesis de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el diputado radical Ramón Dussol y tengo aquí declaraciones del actual gobierno de la provincia del Chaco y del anterior, que responde al partido político que prestigia la mayoría de esta Cámara.

Pongo la humildad en nuestro propio pensamiento al decir que todo el Chaco está de acuerdo en que necesitamos una zona franca, y le damos una gran importancia a su localización.

Aquí expresamos que la localización que proponemos reúne las condiciones naturales y de infraestructura que requiere un emprendimiento de este tipo, que seguramente se convertirá en un importante factor de desarrollo regional, con un enorme valor geopolítico. La zona que nosotros creemos más conveniente para el establecimiento de una zona franca es la que corresponde al puerto de Barranqueras y Vilelas.

Sobre este tema, formulo un interrogante: ¿cuál es la estrategia de la Nación en esta materia? Creo que no se le puede negar una zona franca al puerto de Barranqueras si hemos levantado el ferrocarril por monedas, debido a una razón de economía. Del mismo modo, la vez pasada se cerró un hospital en la Capital Federal por razones de economía.

La idea que tengo sobre todo esto es que cada senador intenta conseguir beneficios para la provincia que representa pero no existe un proyecto de desarrollo global de la Nación. Considero que debemos tratar de lograr esto último.

Nosotros queremos que la zona franca se ubique en Barranqueras y puerto Vilelas. Esta zona se encuentra en el corazón de la cuenca del Plata; es el punto de encuentro de las coordenadas que implican el corredor ferrocarrilero bioceánico y la hidrovía río Paraná-río Paraguay.

La existencia de un importante puerto fluvial alternativo, con infraestructura de comunicaciones y de energía, servicios financiero y de seguros, hospitalarios y sanitarios, aduana y demás

servicios esenciales, constituye una plataforma de excepcionales características. Y es asimismo técnicamente un punto nodal, de transferencias de cargas, pasajeros y comunicaciones. Nosotros creemos que aquí tendrán que cambiarse las barcazas en el largo recorrido por el río Paraná.

La voluntad política expresada por la comunidad de nuestra provincia, a través de todos sus estamentos, económicos, sociales y culturales, determina la presentación que estamos haciendo, en la seguridad de que este proyecto trasciende incluso los límites federales y puede considerarse como una respuesta a la necesidad de un polo de gran desarrollo argentino de interés nacional.

La conveniente localización de una zona franca —estoy tratando de ser lo más sintético posible— determinará, casi con seguridad, el éxito del objetivo al que aspiramos.

La localización que proponemos constituye una zona virtualmente limítrofe, insertada en un conglomerado de más de setecientas mil personas, que posee uno de los índices más elevados de desocupación y subocupación. Además de eso, se trata de una zona del Chaco que este año demostró que seguimos batiendo el récord de analfabetismo. Se trata de una provincia en la que tenemos que contemplar muy especialmente las inversiones que debemos hacer en un campo como el de la educación, donde evidentemente nada se puede lograr si no lo fomentamos muy especialmente.

Tenemos abundante mano de obra disponible y a eso se agrega la facilidad de acceso a las distintas regiones del país y del subcontinente.

De más está señalar la importancia del puerto de Barranqueras que con la justificación de este proyecto facilita la reactivación del más importante complejo portuario del norte grande.

La estratégica localización propuesta se encuentra en los ejes que significan el corredor ferrocarrilero Iquique-Antofagasta-Jujuy-Salta, que aseguran la salida de la producción a Oriente y Extremo Oriente, por un lado y, por el otro lado, los corredores Resistencia-Asunción-Curitiba, con salidas alternativas a Paranaguá y Santos; el corredor Resistencia-Corrientes-Paso de los Libres-Concordia-Fray Bentos-Montevidéo, y el corredor Resistencia-Santa Fe-Rosario-Bahía Blanca-Ingeniero White.

En lo que respecta al eje vertical, la hidrovía río Paraguay-río Paraná, desde puerto Corumbá hasta el río de la Plata, se convierte en una avenida fluvial sin parangón en el mundo.

La mencionada hidrovía se extiende por miles de kilómetros, incluyendo a cinco países ame-

ricanos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y un pequeño tramo de Bolivia. La potencialidad de la hidrovía ha sido considerada desde hace mucho tiempo y se espera que pueda convertirse en un sistema de integración de producciones primarias que, en muchos casos, sustentan las economías de esas naciones.

Nace la hidrovía en el corazón del Mato Grosso, en Brasil, y avanza por gran parte de ese país, por un tramo de Bolivia, por Paraguay y por la Argentina. Uruguay se agrega en el tramo inferior a través del puerto de Nueva Palmira. Del total de su recorrido, la mayoría se distribuye entre el Brasil, Paraguay y la Argentina.

La viabilidad y éxito de una zona franca responden básicamente a la existencia de la infraestructura necesaria en la zona seleccionada que garantice el desarrollo industrial y comercial.

Esta área, señor presidente, no sólo cuenta con la infraestructura requerida sino que además permitirá aprovechar un enclave geográfico, teniendo en consideración la reiterada afluencia al área de los más variados medios de transporte y comunicaciones: ferrocarriles, carreteras, hidrovía, corredor bioceánico, aeropuerto internacional.

Las condiciones y características del Puerto de Barranqueras ofrecen grandes ventajas: contamos con Prefectura, Aduana, sanidad de frontera, agencia marítima, cooperativa arenera, guinches eléctricos, cincuenta y seis galpones de mil quinientos metros cuadrados cada uno, entre otras facilidades.

La disponibilidad de energía eléctrica no ofrece ninguna dificultad, a través de la conexión del Riel NEA, sin tener en cuenta la puesta en marcha, en los próximos años, del complejo hidroeléctrico Yacyretá. De modo que los requerimientos de energía eléctrica pueden ser cubiertos con abundancia. También disponemos de ventajas en materia de comunicaciones y de servicios.

Por todo ello estoy de acuerdo en general con este proyecto de ley. La Argentina necesita elaborar con talento estratégico el desarrollo de muchas regiones que aparecen postergadas. El Chaco es una de ellas; ahora está mejor en función de circunstancias que no controlamos, como es el precio del algodón. En nuestra provincia había sectores de la producción que estaban realmente en el suelo y ahora pueden ir recolectando un poco su optimismo para seguir sembrando y produciendo. Ojalá esto se mantenga. Por otro lado, a pesar de las cosas que se dijeron, llegaron muy pocos créditos y con mucha tardanza.

Creo que en este problema de las zonas francas es importante no sólo otorgar las libertades que se mencionan en el folleto de la Fundación Mediterránea sino también que el Estado tenga una presencia promotora y cuidadosa.

No podemos dejar que algunas de las bondades y de las facilidades que significa abrir un espacio en nuestro territorio al área de los negocios no sean custodiadas seria y moralmente por nuestra gente.

Quiero terminar, señor presidente, reiterando mi adhesión en términos generales a este proyecto de ley; digo que podríamos haberle dado todo el poder al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, al que hay que adherirse en todo lo que se haga en el interior del país. De todos modos, este proyecto tal vez vuelva nuevamente a esta Cámara y pueda ser modificado.

Entonces, reitero lo que dije al pasar: me parece correcto que cada señor senador reclame por su zona; me parece importante que este tema que hace al desarrollo y crecimiento de la Nación esté manejado por gente virtuosa y convencidamente argentina; me parece que si el proyecto va a Diputados y luego regresa sería saludable que todos los señores senadores nos juntáramos nuevamente para tratar de elaborar un despacho que sea la síntesis de una estrategia. Pero creo que las zonas francas no deben ser un mosaico que sirva aparceldamente a regiones determinadas, sino que tiene que estar regido por una conciencia nacional que realmente pueda servir a una nación que está intentando poner en marcha este episodio, que ojalá se consiga poner en marcha y que sea saludable para las nuevas generaciones.

Desde ya solicito que quede como una aspiración el hecho de que todos los señores concesionarios que pretendan tener el manejo de estas zonas sean mirados con lente muy argentina, muy moral, porque hay en el país una intoxicación de deformaciones que posiblemente se inserten también en este tema. Si las grandes industrias pueden producir algunos hechos "truchos" en el manejo de la propia importación y exportación, qué podría pasar si algunos funcionarios o intereses privados entran a manejar áreas importantes con un cierto grado de libertad, como el que tendrán los concesionarios que posean el control de estas zonas.

Lo que digo no es una simple pretensión, sino que es la idea de país que andamos buscando. La Nación tiene que reencontrarse en ese camino de los que trabajan para el país y no de los que lo hacen para sus propias cuentas bancarias.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: el presidente de nuestro bloque ya ha fijado la posición del sector con algunas consideraciones críticas, a las que se les ha asignado especial gravedad.

Como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, he suscrito de conformidad el dictamen de la mayoría y quiero ratificarme en esto y decir que, respetando las consideraciones muy atinadas del señor senador por Mendoza, considero que el proyecto de ley venido en revisión, salvo algunas observaciones particulares que pueden mejorarse en el tratamiento en particular, es adecuado a las necesidades que se tratan de satisfacer.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Juan C. Oyarzún.

Sr. de la Rúa. — Desde hace mucho venimos recogiendo el reclamo de las provincias en el sentido de crear zonas francas como un modo de estimular la actividad industrial y comercial y de crear polos de desarrollo y fuentes de trabajo.

Examiné cuidadosamente el proyecto contenido en el dictamen. Encontré que respondía a los objetivos fundamentales que se defienden en una ley de este tipo: la regulación de las zonas francas y el modo de su establecimiento.

El Congreso puede establecer la zona franca; y aquí, lo que se hace es establecer el procedimiento en que serán determinadas a través de una actividad concurrente entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales, en donde el problema es la localización específica. Y esto no lo va a resolver el gobierno nacional, sino que la solución surgirá de una acción conjunta entre la Nación y las provincias. Al menos esto es lo que he visto, salvo que se diga que de las normas surge otra cosa.

Corresponde a las provincias determinar el lugar, las obras e inversión mínima que se harán para habilitar las zonas francas. Luego, el Poder Ejecutivo, verificada la concurrencia de los requisitos, da la aprobación final que establece esta coincidencia, este acuerdo imprescindible para que ello se haga.

Es lógico que sea la autoridad nacional la que, en definitiva, dé la aprobación final, porque se trata de materia aduanera, que es de competencia nacional. De manera que no podría ello dejarse exclusivamente librado a las provincias, sino que la Nación debe verificar

que las zonas francas que se proyectan respondan a los requisitos del artículo 590 del Código Aduanero, y a los que se prevén en este proyecto. Quiero decirlo para que quede constancia de las razones por las que suscribí de conformidad esta iniciativa.

Por otra parte, aquí se establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía. En realidad, a uno puede gustarle que sea otra la autoridad de aplicación. Podría haber sido la Dirección Nacional de Aduanas, pero en su lugar es el ministerio del cual, en definitiva, depende aquel organismo. Es decir, se busca la instancia más alta. Hoy es un ministro y mañana puede ser otro. La ley debe resolver qué autoridad de aplicación corresponde, para que se hagan valer los derechos de los particulares que actúen como instancia decisoria.

Me preocupé por observar si esto generaba una potestad exclusiva u omnimoda por parte del Ministerio de Economía, y encontré que no es así. Opera como autoridad de aplicación, pero las facultades principales corresponden al Poder Ejecutivo, que puede obrar por decreto, tanto en cuanto a la creación de zonas francas, según el artículo 2º del proyecto, como en el dictado de la reglamentación a través de los decretos reglamentarios que correspondan.

Por ello no encontré nada que me impidiera aceptar ese criterio en el dictamen de comisión que he suscrito.

Reitero que cuando se habla de localización, se trata de una tarea conjunta entre las provincias y la Nación, que en definitiva deberá verificar que los requisitos concurren.

No estoy de acuerdo con que haya un avasallamiento de las autonomías provinciales. En primer lugar, no es el gobierno nacional el que fija el lugar; repito, el lugar viene decidido por las provincias, y la Nación, simplemente, debe verificar que todo responda a las exigencias generales de la ley. La Nación no podría fijar el lugar a las provincias, sino que son ellas las que, a través del accionar del Poder Ejecutivo provincial, y aprobado el convenio de adhesión por ley provincial, deben resolver.

Tampoco me parece mal que se prohíba a las provincias disponer exenciones de impuestos locales, y voy a decir por qué. No porque considere que la Nación pueda avasallar los derechos de las provincias; no hay un problema de avasallamiento, sino una razón para prohibir este tipo de exenciones. Se trata de querer mantener la igualdad de posibilidades, de oportunidades, para todas las provincias. De lo contrario, se generaría una guerra de competencia en-

tre las provincias para ver cuál va a dar mayores beneficios para atraer hacia ella a los posibles inversores. Manteniendo el criterio de que las provincias no resignen recursos propios y no puedan avanzar a sistemas de promoción, se asegura igualdad de posibilidades para todos, porque el criterio que encontré en el dictamen es que esto debe funcionar bajo el concepto o la idea de desarrollo que promueva la zona franca, pero no con criterios de promoción o de estímulo a los que muchas veces se ha acudido y que no han dado resultados.

¡Ojalá que esto genere actividades capaces de crear desarrollo de acuerdo con la idea global con la que todos estamos aprobando el concepto de zona franca!

Es cierta la observación formulada por el señor senador Genoud con respecto al título III que se agrega, declarándose como territorio aduanero especial la zona conocida como Puna Argentina. No está mal considerada, pero también pueden existir en las fronteras otras zonas muy desvalidas que puedan precisar un tratamiento similar. ¿Cómo puedo oponerme a que se dé este tratamiento especial a los departamentos de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca; Los Andes, en Salta; Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochínoca, en Jujuy. Son lugares que conozco y que están con sus poblaciones tan alejadas, en una verdadera situación de sacrificio, como seguramente sucede en otras zonas de la Patagonia, o en Corrientes, o el Chaco? En este aspecto seguramente la ley quizá tenga que ser ampliada. Considero que no debe excluirse esta posibilidad, atendiendo las necesidades de zonas que realmente están lejos, en la frontera, y muy desvalidas.

En cambio sí quiero adelantar ahora una observación respecto del artículo 36, que considero tendría que ser más preciso. Se trata del famoso tema de las operaciones en divisas, títulos valores, dinero y metales preciosos para las que no regirán restricciones. Considero que debería decir que rige al respecto la legislación financiera y cambiaría con vigencia en el territorio aduanero general, para evitar toda clase de peligro por el manejo de todos esos valores que puedan trasladarse al resto de la Nación. Está bien que no tengan restricciones adicionales, pero no tienen por qué ser excluidas de las normas generales en el territorio aduanero general.

Desde luego he coincidido con el señor senador por la Capital del bloque justicialista, Eduardo Vaca, en que debe mencionarse a la Capital Federal, que ha sido olvidada.

Se habla de provincia no con el fin de excluir a la Capital, sino de indicar a todas las jurisdicciones, y la Capital no tiene que estar ausente en esa indicación.

Tengo una duda, y quizás éste sea un problema que surja después, con respecto al alcance que tendrá la zona franca. ¿Cuál es su limitación física? ¿Cuál será su extensión? ¿Será, por ejemplo, como uno de los parques industriales que conocemos? ¿Qué extensión tendrá realmente?

Tiene que ser un territorio delimitado, cerrado, pero nada se dice sobre la superficie y entidad física que debe tener. Y aquí se faculta al Ministerio de Economía para expandir el espacio físico, tal como lo establece el artículo 39.

Esto plantea una duda que creo podrá resolverse de acuerdo con la finalidad a la que debe responder la zona franca, cuyo objetivo es impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, con el único fin de exportar la mercadería resultante.

Quiero advertirle al miembro informante, el señor senador por Jujuy, que la excepción a la que aludiré seguidamente corre el riesgo de convertirse en la regla.

El artículo 6º expresa: "...No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrán fabricar bienes de capital los que, a fin de su nacionalización, seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación...". No vaya a ocurrir que en las zonas francas se produzcan bienes cuya finalidad no sea el aumento de las exportaciones sino el ingreso al territorio nacional sobre la base del principio de nacionalización, y que esto se convierta en una actividad prevaleciente.

Desde luego que este dictamen puede ser mejorado en muchos aspectos, pero en mi opinión está lo fundamental. Aunque no se individualiza el sitio físico y geográfico, el proyecto establece la forma en que debe crearse la zona franca. No se trata de una delegación exclusiva al Poder Ejecutivo nacional sino del concurso de las provincias y la Nación para establecer el lugar preciso en el que ella funcionará. Debe responder a ciertas características que pasan por el control expreso de las provincias, que son las que aprueban la licitación y que en definitiva resuelven: no es a través del gobierno nacional sino que según el inciso d del artículo 14 la concesión es adjudicada por la provincia con aprobación de la autoridad de aplicación, es decir el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Esto es así porque hace falta esa concurrencia de voluntades entre la Nación y las provincias dado que no hay una delegación exclusiva de éstas a la Nación sino que se busca un mecanismo de cooperación entre ambas para que las zonas francas se establezcan y comiencen a funcionar.

De manera que éstas son las razones por las cuales me decidí a firmar el dictamen y a darle mi aprobación. Creo que, salvo algunas objeciones como las que he señalado respecto del artículo 36 y otras de forma, está respondiendo a una necesidad que he percibido se expresa en un reiterado reclamo de las provincias: la actividad económica del país está tan absorbida hacia el centro que es necesario expandirla hacia el interior.

Pienso que los gobiernos de provincia pondrán zonas francas en aquellos lugares en los que la necesidad sea mayor; si fueran a establecerse en los grandes centros urbanos se estaría frustrando el espíritu del proyecto y no se respondería a la necesidad que lo inspiró.

Por estas razones y con el mayor respeto hacia las opiniones expuestas por el señor senador Genoud en nombre de nuestro bloque, dejo consignadas mi opinión y las razones de mi firma en el dictamen de comisión.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente...

Sr. Snopek. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Losada. — Sí, señor senador.

Sr. Snopek. — Señor presidente, señores senadores es a efectos de dejar constancia de que felizmente, después de mucho tiempo, coincido plenamente con lo expresado por el señor senador por la Capital de la bancada radical, quien ha expuesto mejor de lo que hubiera podido hacer yo la contestación al señor presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical.

El artículo 31 de la sanción de la Cámara de Diputados a través de ese "no podrán" está buscando mantener la igualdad de modo que no haya competencia desleal entre las provincias, lo que podría llegar a ser contradictorio con convenios internacionales suscritos por nuestro país. De ninguna manera las provincias podrían otorgar exenciones impositivas o subsidios encubiertos a las exportaciones. Esto no está previsto sino que por el contrario está penalizado por acuerdos como el GATT. Esto en cuanto a lo expresado por el señor senador por la Capital.

Lo más importante con relación a ese "no podrán" es mantener la igualdad, no generar desi-

gualdades y no exacerbar los localismos. —que no es federalismo— de modo que las provincias más grandes sigan concentrando poder y generando desigualdades no deseadas al margen de la ley y contrarias a los acuerdos a que me he referido.

Agradezco al señor senador por la Capital la solidaridad y comprensión ante situaciones extremas como las de la Puna Argentina. Tengo en mi poder algunos datos para ilustrar a la Cámara. Aclaro que Salta vive una situación semejante, pero yo me voy a referir concretamente a Jujuy. En los últimos diez años, esta provincia ha sufrido una caída del producto bruto de un 30 por ciento, a diferencia de lo que ha sucedido en la generalidad del país. La población con problemas de ocupación —sea por encontrarse desocupada, sea por estar subocupada— es de un 30 por ciento. En los últimos tres años han desaparecido unos 18 mil puestos de trabajo.

Le agradezco el haberme concedido la interrupción, señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: creo que todos coincidimos en la necesidad de crear zonas francas y en la urgencia de su creación. Pero yo tengo la sensación de que en esta búsqueda para perfeccionar el proyecto estamos cada vez más lejos de la perfección. Hay un dicho según el cual lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que la sociedad argentina y especialmente quienes viven en estas zonas de frontera están esperando la sanción de este proyecto de ley.

Considero, honestamente, que este proyecto que viene de Diputados requiere algunas modificaciones. No voy a entrar en las precisiones que han hecho otros señores senadores, con quienes coincido en muchos aspectos. Pero debo decir que este proyecto no resuelve el problema de las economías regionales. No creo que con esto vayamos a dar una solución a las angustias del interior del país. Cometeríamos un grave error si generáramos expectativas de ese tipo. No vamos a resolver los problemas más profundos, que responden, y en esto seguramente van a coincidir los señores senadores, a una estrategia de desarrollo del país. Las necesidades de crecimiento del interior y las angustias de las economías regionales no van a ser resueltas, lamentablemente, a partir de esta ley, aunque ésta podrá atemperar la grave situación de las fronteras motivada por la injusta competencia.

Creo que este proyecto es vital, pero también creo que debemos discutir qué está pasando con nuestras economías regionales, qué pasa con las distorsiones y asimetrías provocadas por las diferencias en los costos de la energía, por los

sistemas impositivos, por el cobro de peajes. Estos factores deformadores agudizan el despoilamiento de algunas zonas que, como bien se ha dicho, genera traslado hacia el cordón industrial de Buenos Aires, cuando en realidad habría que atajar esa inmigración en su lugar de origen para que después no nos veamos en la necesidad de apelar a políticas asistencialistas, que en definitiva no resuelven la situación de los más postergados.

Advierto que estamos entrando en el camino de la neutralización de la propia ley. Este “ping-pong” de la llegada de este proyecto de su vuelta a Diputados —que responde, desde luego, a las reglas de juego naturales del Parlamento argentino— no me da ninguna seguridad, ninguna garantía de que contemos con esta norma con la velocidad que las propias argumentaciones de los senadores está indicando. Más aún —y disculpen si subjetivizo—, cuando veo que desde el área económica se emiten opiniones aparentemente a título de aportes; pero se trata siempre de aportes para modificar, para volver a discutir. Ante esto, tengo el derecho a sospechar que esos aportes buscan que en definitiva no tengamos ley alguna. Ojalá me equivoque y esto que digo no sea más que una simple sospecha.

Lo cierto es que considero que a los destinatarios de nuestra preocupación no les vamos a dar una buena noticia más allá del esfuerzo y de la vocación loable que implica discutir y ver perfeccionada esta norma. De seguir así, creo que mañana van a ser informados de que nuevamente este proyecto de ley de zonas francas ha pasado a la Cámara de Diputados; y seguramente ésta no es la respuesta que estos sectores estaban esperando.

Por los motivos expuestos, voy a oponerme al dictamen de comisión porque sostengo que debe votarse el proyecto de ley tal cual viene de la Cámara de Diputados. Pueden existir algunas diferencias, pero fundamentalmente esto nos habilitaría para contar el día de mañana con un proyecto de ley sancionado. Luego, las correcciones, las rectificaciones y las modificaciones que puedan hacerse en función de esta ley serían producto de otro debate y de una incorporación a esta norma que podemos sancionar en el día de la fecha. Porque yo no sentiría ninguna tranquilidad si a mi provincia, que espera con tanta angustia la aprobación de esta norma, debemos darle la mala noticia de que en la búsqueda de perfeccionarla nos quedamos de nuevo sin ley.

En el aspecto puntual, no puedo dejar de mencionar lo establecido por el artículo 47. No voy a entrar a discutir que están mal incorporados los casos que figuran. Simplemente creo que no aparecen allí algunos que también lo merecen.

Como representante de mi provincia comprendo que cada senador tiene legítimo derecho a reclamar para la suya idénticas condiciones.

Se habló mucho —y bien— de la situación de Misiones. Nuestra provincia tiene sólo cien kilómetros de frontera nacional —nunca nos fue bien en esto— y mil kilómetros de frontera con algunos países hermanos. Este estrangulamiento de la geografía de la provincia muestra cuánta necesidad tenemos de ser parte de esta aspiración y cuál es la trascendencia e importancia que tiene para nosotros un régimen aduanero que sí resuelva la situación de las comunidades, cosa que no ocurre con las zonas francas ya que, como se dijo aquí, quedan marcadas en un perímetro determinado.

No quisimos pedir que Misiones sea específicamente propuesta para este caso porque aspirábamos llegar a esta instancia con la aprobación de una norma que ya fue remitida por la Cámara de Diputados. Pero no puedo dejar de mencionar esta aspiración porque, de hacerlo, quedaría como que resignamos una demanda que consideramos absolutamente justa.

Por estos motivos, señor presidente, señores senadores, votaré en contra de este dictamen e insistiré en propiciar el texto en revisión venido de la Cámara de Diputados para que mañana podamos contar con esta ley.

Sr. Presidente (Oyarzún). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, bloque justicialista.

Sr. Molina. — Señor presidente: seré breve.

Debo expresar dos preocupaciones. Una de ellas se refiere a que se nos ha ido un poco la hora y veo como inquietud especial la circunstancia de si vamos a concluir el tratamiento de este proyecto de ley hoy o no. Quizá podamos habernos extendido pero no llevan transcurridas más de tres horas de sesión. De modo que, frente al hecho de que el país espera la sanción de esta norma, formulo un ruego especial para concluir su tratamiento. Entonces, el hecho de que caiga la sesión o no será responsabilidad de cada uno de nosotros. Por otra parte, casi felicitaría a los señores senadores ante el debate de un tema central para las economías regionales.

Reitero: aparentemente existe la preocupación de si se cae o no la sesión cuando llevamos transcurridas sólo tres horas de debate. Debemos tener cuidado y dar una respuesta adecuada a los conflictos que tenemos y que señalaba el señor senador Losada. Podemos estar de acuerdo o no con él pero es necesario que es-

cuchemos todas las opiniones para formar una posición y darle a la comunidad alguna respuesta.

La segunda preocupación es cómo nace esta ley. Decía bien el señor senador por Mendoza que legisladores de regiones con problemas trabajaron intensamente en el tema; y mencionó a varios, pero creo que hizo una exclusión: la de mi par por Santa Cruz, senador Ludueña, quien realmente hizo un libro de lo que debería ser una zona franca.

Luego aparece el proyecto del Poder Ejecutivo. Como miembro del oficialismo debería decir que lo comparto. Yo pregunto qué características debe tener una zona franca de provincia. Imagino que la isla de Tierra del Fuego tiene su régimen y que sus legisladores dicen que hay que cuidarlo con la producción de bienes de capital para vender en territorio aduanero general, porque si no la industria que se logró radicar allí se irá a los centros más poblados, sin mencionar adónde. Por ello creo que la modificación del artículo 6º tenemos que analizarla nuevamente. Cuando se habla de zona franca uno se pregunta de qué tipo y para quiénes.

Se habla de una zona franca por provincia y de la facultad del Poder Ejecutivo para crear adicionalmente no más de cuatro en todo el territorio nacional. Entonces, con derecho, los representantes de la Capital Federal dicen que también quieren una zona franca. Así, de pronto uno dice que si hay una sola zona franca por provincia tendríamos que ver qué características deben tener. ¿Es una zona franca como la que define el Código Aduanero, es decir, donde ingresan bienes de capital para transformarlos y luego destinarlos a la exportación? De ser así, esto para mi provincia no sirve, porque como nosotros no tenemos industrias no vamos a traer insumos importados para transformarlos y dedicarlos a la exportación. Por ello quizá no coincido con el señor senador Losada respecto de este tópico.

Si coincido en que deberíamos haber dictado un instrumento para mañana...

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Molina. — Sí.

Sr. Genoud. — En realidad, el señor senador Losada coincide plenamente con usted porque dice que hay que votar la sanción de la Cámara de Diputados, que decía casualmente que se podían fabricar bienes de capital para exportar y que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general. Entonces, vamos a votar el artículo 6º, así co-

mo otros, en la misma línea que ha seguido la Cámara de Diputados. De tal modo que queda satisfecha su inquietud. Reitero que el señor senador Losada coincide con su posición.

Sr. Molina. — Sí, señor senador.

Lo que yo digo es que en el tema del artículo 6º coincido con la sanción de la Cámara de Diputados. De todas maneras, los señores senadores por Tierra del Fuego han hecho una salvedad, que compartimos...

Sr. Genoud. — Estamos de acuerdo en...

Sr. Presidente (Oyarzún). — Señor senador: diríjase a la Presidencia.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Aquí se habla de establecer una zona franca por provincia. Sin hacer un descrédito, apoyaría una para la provincia de Buenos Aires, una para Córdoba y una para Santa Fe, por ejemplo, porque son provincias hermanas a las que uno quiere y respeta, adonde se puede ir de vacaciones, y que tienen una saludable economía.

Pero pienso en Santa Cruz y debo decir que no llegamos a tener un habitante por kilómetro cuadrado. Debemos pensar en la Puna y en todas las regiones limítrofes —no son muchas— en las que tenemos problemas frente a las zonas francas de los países hermanos, que están generando evasión, pérdida de ventas y una competencia cuasi desleal. Imagino lo que es Iquique y Punta Arenas frente a Río Gallegos; imagino lo que es la zona franca de Paraguay frente a toda nuestra región mesopotámica, en especial, Corrientes, Misiones y parte de Formosa. Y esto era lo que, a mi juicio, debe ser la zona franca. Y esto era, a mi juicio, lo que hubiese dado a las desventajas de localización, este nuevo término que uno aprende en economía, que dice que tenemos tanta distancia a puerto... En el caso de mi Santa Cruz tenemos dos mil kilómetros al mercado. Y claro, si tenemos la misma zona franca, ¿cuál es la ventaja?

Tenemos el síndrome de las desigualdades adquiridas. El síndrome nos viene de la colonia; determinadas regiones se favorecen y se podría decir que a lo mejor estoy llorando por una provincia pobre. Y no es así. Mi provincia es extremadamente rica. Lo que ocurre es que todos los pueblos tienen derecho a vivir de lo que producen. Algunos producen cosecha gruesa, cosecha fina, buenos vinos y su pueblo goza de la ventaja que le da la venta. En cambio, nosotros producimos hidrocarburos, petróleo,

gas, y por alguna legislación que sin duda debe ser buena nuestro pueblo no goza de las satisfacciones de esta producción. Apenas se cobra el 12 por ciento de todo lo que se produce y entrega de sus entrañas, encima con un recurso que no es renovable. Entonces, votamos un proyecto de ley sobre zonas francas quizás con un pretendido optimismo, y no hacemos un rosario de quejas. Simplemente, entendemos que a veces se debe observar solidaridad.

Comienza mal cuando se dice que debe haber una zona franca por provincia. Entonces, cuando la corrección sería una zona franca comercial, nosotros queremos que tenga determinadas características que por lo menos nos garanticen que vamos a gozar de esa zona franca comercial y que allí vamos a tener algún tipo de venta al minorista para que nuestra gente se pueda beneficiar. Entonces, estas desventajas comparativas no las solucionamos y por eso intentamos algunas modificaciones. Este es el objetivo de algunas modificaciones que intentamos en los artículos 2º y 9º. Quizá cumpla con la promesa que tenemos allí celebrada en el Pacto Fiscal. Como provincia nos costó mucho ingresar en él, porque las desventajas siempre siguen siendo las de cristalizar las desigualdades adquiridas que tienen nuestras regiones periféricas, tal como le sucede a La Rioja, a Santiago del Estero. Tenemos algunas zonas con serios problemas. Alguien decía que se quería el comité o el consejo federal para determinar dónde está la zona franca. Yo digo que prefiero que esté en manos del ministro de Economía, porque él va a reconocer estas desventajas de los territorios que mencionamos. Y si lo hace —y se lo reconoce que este poder es facultativo—, podremos lograr alguna mengua, con la posibilidad de satisfacer las necesidades primarias de nuestra gente. No estamos colmando los excedentes; apenas si nos alcanza para satisfacer las necesidades más elementales de nuestra gente.

Recientemente gran parte de los amigos senadores visitaba El Chaltén. Advertían su belleza pero también advertían en qué estado de indefensión estamos. Cuando fundamos El Chaltén la burocracia administrativa de Parques Nacionales nos hizo una denuncia penal por fundar un pueblo que hoy es un hito, un mojón de soberanía. Es decir que hasta esto tuvimos que combatir, y finalmente vencer, para poder fundar un pueblo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Conrado Storani.

Sr. Molina. — Quería señalar esto como preocupación central. Me parece que lo que vamos a sancionar es una ley marco. Los diputados van a encontrarle la respuesta, diciendo, tal vez, que no hemos hecho nada extraordinario. Habrá zonas francas: una por provincia —sancionaron ellos—; pusieron, felizmente, zonas comerciales. Nosotros hemos puesto algunas características de regiones con serios inconvenientes.

El Senado se pudo reunir en una sesión especial, habiendo trabajado hasta el 29 de diciembre pasado; comenzamos este año, prácticamente el 1º de febrero y estamos trabajando en plena campaña en la que algunos de los hombres y mujeres que integramos este cuerpo somos candidatos a convencionales constituyentes. Con todo, hemos podido realizar esta sesión especial y, felizmente, creo que vamos a producir una sanción corregida. Del mismo modo, considero que también podrá darle una sanción inmediata la Cámara de Diputados. Nosotros hemos utilizado apenas noventa días y ellos creo que han trabajado durante dos años sobre este tópico.

Estimo que las correcciones son convenientes y necesarias, y me parece que las comisiones intervinientes han trabajado más que adecuadamente.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Cabana. — Señor presidente: como representante de una provincia norteña, más precisamente Jujuy, también he querido hacer uso de la palabra porque me siento satisfecho de que el Honorable Senado de la Nación esté tratando en este momento un proyecto de ley tan importante para estas regiones marginadas como son las provincias del Norte. Al respecto, me voy a permitir formular unas muy breves reflexiones.

Pienso que las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de Comercio han hecho una encomiable labor con el mejoramiento del proyecto de creación de zonas francas en todo el territorio del país, venido en revisión a esta Cámara.

En efecto, se han corregido algunos vicios respecto del articulado general y se agregó un título, el del "Territorio Aduanero Especial". Si este proyecto se transforma en ley constituirá otro elemento más impulsor del crecimiento del país.

Las zonas francas son instituciones de la Edad Media exhumadas en este siglo. Muchos países las tienen en sus territorios. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más de diez; España, tres; Perú acaba de crear la de Tacna; Bolivia

la de Puerto Aguirre; Chile tiene dos; Uruguay, tres. En fin, como ha mencionado el señor senador de la Unión Cívica Radical que ha hecho uso de la palabra anteriormente, hay más de doscientas o trescientas zonas francas en todo el mundo.

Entre las correcciones realizadas al texto original es de importancia la eliminación efectuada respecto del inciso g), del artículo 16, que disponía que el canon a pagar por el concesionario de cada zona franca se coparticipara entre todos los municipios de las respectivas provincias.

Pienso que es muy importante esta eliminación porque las zonas francas son instrumentos de crecimiento económico y no un artilugio para allegar fondos a las municipalidades. Esta eliminación hará más eficiente la operatoria de la zona franca y evitará que fondos dirigidos a ella se deriven hacia gastos burocráticos e improductivos.

Volviendo al espíritu de este proyecto, creo que si se convierte en ley puede introducir en el siglo XX a regiones ancestralmente disminuidas, como es el caso de la Puna jujeña y otras zonas del país.

Este proyecto del Poder Ejecutivo, mejorado por este cuerpo, es un paso más para integrar al mercado a zonas marginadas de él. O sea que se trata de un nuevo hito para promover el crecimiento económico del interior del país. Hablo de "hito", porque si echáramos una mirada retrospectiva, desde hoy, hasta la asunción de nuestro gobierno en 1989, veríamos todo un camino jalonado que ha ido marcando la transformación de nuestra Argentina.

Cuatro años y medio es poco tiempo para la vida humana, ¿qué es, entonces, para un país? Es un instante señor presidente, y en ese instante el país ha experimentado una transformación revolucionaria.

De país sumido en las tinieblas del Tercer Mundo, hemos pasado a ser el líder de América latina y el interlocutor igualitario de los países más poderosos. No estamos aún, señor presidente, en el llamado Primer Mundo. Sería ingenuo de mi parte afirmarlo, pero, hay indicadores contundentes que nos dicen que vamos en el camino que conduce a ese selecto grupo. Uno de los indicadores es el ingreso *per cápita*, que ya está cercano a los 9.000 dólares. Lejos, sin duda, aún de los 22.000 dólares que tienen los países líderes. Pero seguimos creciendo a un ritmo desusado en el mundo, de modo que antes de lo que suponemos estaremos en los umbrales de los países rectores.

¿Y por qué este introito que quizás alguien puede decir que no viene al caso? Es para mos-

trar que todo el cambio habido ha sido para ponernos en sintonía con la economía globalizada. Un objetivo a nivel "macro", como diría un economista y que tiene que ser, indefectiblemente, el punto de partida de todo plan.

Ahora, señor presidente, ha empezado el objetivo de corregir las distorsiones regionales. Un paso importantísimo fue el reciente decreto de reducción de aportes patronales, en forma proporcional al índice de pobreza de cada provincia y a su distancia a la Capital Federal. Es la más sensata norma de promoción industrial que se ha dado jamás en el país. Pronto se empezarán a ver resultados.

Ahora se trata de este proyecto de zonas francas que tiende a facilitar inversiones, fundamentalmente en industrias que exporten.

Los eternos pedigüños dirán que esto es insuficiente y que llevará mucho tiempo. Pero, ¿qué empresa sólida no requiere, para obtener frutos, esfuerzo y tiempo? Claro, los pedigüños a que aludí sienten particular aprecio por los subsidios, los créditos blandos y otras prebendas del pasado; es decir, tener mejoras sin esfuerzos, como gracias divinas.

Pero todo ese facilismo es impensable en el nuevo país donde está impuesta la racionalidad económica, donde el déficit fiscal es una lacra de otra época y donde todo gasto debe estar en la Ley de Presupuesto.

También alguien me dirá respecto de lo que mencioné del facilismo que este proyecto tiene sus facilismos traducidos en exenciones impositivas.

Efectivamente, va a tener su costo fiscal, como lo tiene toda acción cuando se aparta de la ortodoxia económica, traducida en la economía popular de mercado.

Pero sabemos que esta economía popular de mercado, como nosotros la llamamos, es el mecanismo más idóneo que se conoce de creación de riqueza. No obstante, no es un método armónico; por lo tanto, aquí es donde debe estar el Estado para dar los elementos que hagan que el crecimiento económico tienda a ser armónico y no sólo para determinadas zonas del país.

Sólo un país de cuentos de hadas, ideal, homogéneo económica, social y humanamente, no necesitaría ningún estímulo.

Entonces, señor presidente, soy un entusiasta de este proyecto que, como antes mencioné, tiene dos vertientes. Una y principal, facilitar la instalación de industrias para la exportación. Sabemos que rápidamente debemos revertir el déficit de nuestra balanza comercial, que en 1993 fue aproximadamente de 3.600 millones de dólares. No es tan preocupante como en muchos sectores se afirma, pero considero que el pro-

yecto que nos ocupa coadyuvará a revertir esta situación. La otra vertiente subsidiaria es la social, que permitirá la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En síntesis, señor presidente, será herramienta de crecimiento en la medida en que en cada provincia se hagan bien las cosas. Como dije, demandará inteligencia, creatividad y mucho esfuerzo. Será un desafío.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Creo que ha llegado la hora de poner término a este debate en general.

En tal sentido, voy a recordar las expresiones del señor presidente del bloque de la mayoría. Es evidente, como se ha señalado por todos los señores senadores preopinantes, la necesidad de sancionar este proyecto de ley. Se trata de la ley posible. Ciertamente no es la mejor; ni siquiera es una buena ley, pero es la que tenemos la obligación de sancionar, recogiendo el imperativo y los reclamos de hace años de los estados provinciales que representamos.

En nombre del bloque del Movimiento Popular Neuquino, señalo que venimos reclamando la ley de zonas francas desde hace bastante tiempo y hemos presentado proyectos al respecto, incluyendo la localización de estas áreas en la zona precordillerana.

Debo decir que esta cuestión se relaciona con la necesidad de estructurar un programa de geopolítica nacional, de asentamiento de poblaciones, de promoción de polos de desarrollo. Sin querer extenderme en estos aspectos, debo señalar que la frontera de nuestra provincia, relativamente despoblada, se encuentra frente a la parte más poblada de Chile y diariamente vemos decenas y, a veces, centenas de camiones que transitan por el Paso de Puyehue, transportando los productos de esa gran zona franca que se ha instalado en la región de Lique.

Queremos contribuir entonces a la creación de polos de desarrollo, tratando de corregir esa deformación que en gran medida ha sido impuesta por ese feudo administrativo que es la Administración Nacional de Parques Nacionales, cuya forma de actuar en el Sur de nuestro país pone de relieve circunstancias como la que acaba de señalar el señor senador por Santa Cruz.

Estamos reclamando la inmediata renuncia, el retiro del señor administrador de Parques Nacionales, establecido desde hace años en una ficción de protección, que no es nada más que una gran falsedad.

Entonces, creemos que vamos a dar un paso adelante en esa intención de desarrollo provincial cuando se sancione este proyecto de ley venido en revisión.

No deseo extenderme más en este tema por muchísimas razones, entre otras el respeto debido al desarrollo de este debate. Simplemente, solicito que se inserten en el Diario de Sesiones los apuntes que tenía preparados y que pasemos a la votación en general.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente, señores senadores: creo que todos estamos advirtiéndolo que, de un modo bastante raro —y no me parece mal—, los únicos bloques que tienen opinión uniforme sobre las diferentes cuestiones relativas a este proyecto son los unipersonales. (*Risas.*)

Esa circunstancia más las responsabilidades políticas que me caben como a todos los señores senadores respecto a sus correspondientes provincias, me llevan a decir, con el objeto de dejar expresado el sentido de mi voto, que comparto el despacho elaborado por la mayoría y, particularmente, los artículos 47 a 49, referidos al territorio aduanero especial. Digo esto más allá de mi escepticismo, de mi poca confianza en que esta iniciativa que se va a sancionar esta noche llegue a tener buen éxito. Me refiero a que no creo que llegue a obtener la aquiescencia de la Cámara de Diputados en la segunda revisión y la promulgación del Ejecutivo.

De todas maneras, me parece que no será vano el empeño demostrado, en la medida en que servirá para manifestar un fuerte consenso político alrededor de esta situación.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: solicito la inserción en el Diario de Sesiones de un trabajo que se ha realizado. Fundamento este pedido en que el señor senador por mi provincia que falleciera recientemente fue uno de los impulsores de este tema. Como en este trabajo hago mención a esta circunstancia es que me gustaría que fuera insertado en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Mazzucco. — Señor presidente: deseo fundamentar brevemente mi voto en general.

Es evidente, como bien lo señaló el señor senador por Catamarca, que nuestro bloque no

tiene una opinión conjunta. Cada uno ha tomado una posición al respecto.

Personalmente, tengo un mandato que cumplir y debo respetar la voluntad de la Legislatura de mi provincia que, en la previsión de que este proyecto tendría una inmediata sanción, designó como zona franca a instalarse a la localidad de Sierra Grande.

Aquí han habido muchas lamentaciones, señor presidente; el 25 por ciento de su población está desocupada, despoblación. En su momento Sierra Grande supo contar con 15 mil habitantes. Era una próspera región productora de hierro, por decisión de la Nación que en su momento creó un polo con fines estratégicos.

Actualmente, con el desmantelamiento de la mina de Hipasam, quedan 4 mil personas que están viviendo con las indemnizaciones que se pagaron por el cierre de la empresa.

Este hecho no es consecuencia de una política de mi provincia. Se debe a la decisión del gobierno nacional de antes y de ahora, sin importar el signo.

Y nosotros estamos reclamando para esta zona un acto de reparación. Por eso dejamos planteado aquí que la Nación debe una reparación a esta región, a esta gente, a este desierto patagónico, instalando allí una zona franca por decisión nacional, como acto de reparación histórica, económica y social para esta región de Sierra Grande.

De todas maneras, el mandato es contar con la ley de zonas francas. Y creo que no es ser pesimista si se piensa que esta sanción que pretende el bloque de la mayoría —y no discuto el contenido— demorará la sanción definitiva de la ley de zonas francas.

Por ello, asumiendo que el proyecto venido en revisión no es lo que nosotros hubiéramos querido, preferimos votar en contra del dictamen que aquí se ha propuesto; en definitiva, lo hacemos como reafirmación de que estamos de acuerdo con que exista una ley al respecto. Entonces, decimos que votando en contra del dictamen estamos aprobando la sanción del proyecto venido en revisión para que esta noche la Nación tenga una ley que determine la ubicación de zonas francas.

Ya habrá tiempo para corregir, para contemplar puntualmente situaciones de fronteras. Pero el interior está reclamando, y mi provincia anticipadamente lo hace, para tener una zona franca. Por estas razones, voy a votar a favor del proyecto venido en revisión *in totum*.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Costanzo. — Señor presidente: deseo hacer algunas aclaraciones respecto de las expresiones de mi colega rionegrino, el señor senador Mazzucco.

Cuando el Poder Ejecutivo anunciaba este proyecto de ley sobre creación de zonas francas, la Legislatura de Río Negro, adelantándose a la correspondiente sanción, frente a la situación especial que vivía Sierra Grande propició allí la determinación de la localización que correspondía a Río Negro. Esto se hizo en momentos en que yo había presentado un proyecto de ley, al que hizo mención el señor senador Genoud, para localizar esta zona franca en San Antonio Oeste.

Quiero expresar también que en el momento del cierre de Hipasam, por razones conocidas y respondiendo a los intereses del país, interpretando cabalmente el sentido de una determinación política, para nada se apuntaba a generar un conflicto de carácter social, sino que se trataba de una larga cadena de errores manifiestos, estructurales y serios, que generaron el cierre de este importante emprendimiento, con factores distorsionantes y suficientemente graves como para justificar la decisión del Poder Ejecutivo.

Pero, además, el Poder Ejecutivo tomó una determinación que implica sin ninguna duda una reparación a ese pueblo toda vez que transfirió gratuitamente a la provincia de Río Negro ese emprendimiento.

Como se sabe, Hipasam estaba a punto de ser desguazada a raíz de una licitación que determinaba la venta por distintos sectores. Para evitar ese desguace, el Poder Ejecutivo nacional transfirió gratuitamente el emprendimiento Hipasam a la provincia de Río Negro, y hoy está en manos de una sociedad provincial con concretas posibilidades de reiniciar la actividad minera, extractiva e industrial.

Teniendo en cuenta la línea de pensamiento del señor presidente de nuestro Bloque, estoy de acuerdo con que parecería que la determinación de zonas francas no aparece atada a un proyecto de desarrollo nacional. Las zonas francas deberían ser factores de equilibrio a partir de localizaciones que apunten a reactivar económicamente a zonas puntuales del país. Pero cuando se plantea la unificación de zonas francas, seguramente vamos a tener un cuadro de situación de futuros emprendimientos, localizaciones, actividad de carrera empresarial comercial, prácticamente en una tendencia a la centralización, como es la tendencia histórica que hemos sufrido los hombres del interior. Los argumentos dados por el presidente de nuestro bloque apuntaban a justificar el texto del artículo 47, que

modifica sustancialmente el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados al establecer territorios aduaneros especiales en lo que se denomina la Patagonia austral. Realmente la Patagonia que yo conozco se encuentra al sur del río Colorado; no conozco la Patagonia austral, aunque obviamente hay una situación geográfica extrema y una situación geográfica Patagonia norte. Quisiera que en este recinto habláramos de Patagonia.

De esta forma, el artículo 47 traduce una injusticia toda vez que la provincia del Chubut se asemeja con el departamento de San Antonio Oeste, donde está inserta Sierra Grande. Considero que deberíamos agregar a lo que establece el artículo 47 como territorio aduanero especial de las provincias de Santa Cruz y Chubut al departamento de San Antonio Oeste, Río Negro. Todo ello sin perjuicio —y ojalá lo determine la ley—, y en esto comparto el criterio manifestado por el señor senador Mazzucco, de que Sierra Grande sea declarada, independientemente de esta determinación en relación al departamento de San Antonio Oeste, como zona franca específicamente, cuestión que queda derivada a la decisión del gobierno de la provincia de Río Negro.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Muy brevemente, adelantaré el sentido de mi voto ratificando todas y cada una de las expresiones por mí vertidas al comienzo de este debate. Lo hago también para procurar una mayor armonización de las posiciones existentes en la bancada que represento.

El senador Losada se ha expresado con claridad, pese a que tiene reservas respecto del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, ha argumentado que es preferible aprobar dicho proyecto a efectos de que el mismo obtenga su sanción en esta sesión. En el mismo sentido se ha pronunciado el señor senador Mazzucco.

Señor presidente: he de votar del mismo modo, pero voy a formular dos salvedades. La primera de ellas se refiere al artículo 2º y está relacionada con la incorporación del segundo párrafo que fue aprobado en el dictamen de mayoría: creación de las zonas francas comerciales. Esto quiere decir que si aprobáramos la sanción de la Cámara de Diputados nos veríamos privados de las zonas francas comerciales que, sin duda alguna, serán de utilidad para el país. Por este motivo, voy a votar en forma favorable el dictamen de este Senado.

Con relación al artículo 6º, y tal como lo expresó el señor senador Molina, votaremos por la aprobación de la norma tal como la sancionara la Cámara de Diputados. Pero a sugerencia de los dos senadores representantes de Tierra del Fuego, debe agregarse, luego de los términos "territorio aduanero general" el vocablo "especial", a efectos de incorporar al territorio especial aduanero de Tierra del Fuego en la protección de este artículo cuando se refiere a bienes de capital producidos en una zona franca y que se incorporen al territorio nacional del país.

Con estas dos excepciones relacionadas con los artículos 2º y 6º, y por las razones invocadas por mis pares representantes de Misiones y Río Negro con respecto al resto del articulado, voy a votar afirmativamente la sanción de la Cámara de Diputados, con la que tenemos varios reparos tal como lo expresaran en su oportunidad los diputados de la Unión Cívica Radical.

Sr. Ludueña. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Ludueña. — Señor presidente, señores senadores: deseo hacer dos breves aclaraciones.

La primera se refiere concretamente al artículo 47, que fue modificado por el bloque Justicialista a través de una incorporación de la que soy autor. Luego de "...Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca), Los Andes (provincia de Salta), Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yaví y Cochinoca (provincia de Jujuy)" propuse un agregado que contó con la aprobación del conjunto del bloque Justicialista por medio del cual solicitaba establecer un territorio aduanero especial en la Patagonia austral comprendiendo los departamentos de Río Senguerr y Futaleufú (provincia de Chubut) y Deseado y Lago Buenos Aires (provincia de Santa Cruz).

Decía el distinguido compañero y amigo Remo Costanzo que la expresión "patagonia austral" no le satisfacía. Quien fuera el jefe del Movimiento Nacional Justicialista, el general Juan Domingo Perón, a quien particularmente los justicialistas estamos olvidándonos bastante de mencionar, decía: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Y la provincia de La Pampa está incluida por ley en la región patagónica.

Asumo la responsabilidad en forma particular respecto de que no tengo objeción alguna a que el departamento de San Antonio Oeste también sea incluido en el artículo 47, porque es de hombres de bien no sólo reconocer los pro-

blemas que tiene la Patagonia austral sino también expresar que la cuestión de las zonas francas tiene una intencionalidad política.

Digo esto último con un poco de egoísmo. Las provincias de Santa Cruz y Chubut solicitamos al presidente de la República, doctor Carlos Saúl Menem que viajara a la localidad de Río Gallegos. Así lo hizo y el 27 de mayo de 1992 se comprometió públicamente a establecer zonas francas en cada provincia de la Nación. Ahí surgió verdaderamente el tema: cuando el presidente empeña su palabra ante el pueblo santacruceño y luego revalida ante el pueblo de Puerto Madryn la constitución de una zona franca por provincia. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Esta fue una manifestación política del presidente de la República. Y no sólo eso, sino que avanzando en la política de transformaciones a la que a diario asistimos también se obtuvo un logro importante para las provincias de Santa Cruz y del Chubut.

Quizá los señores senadores por Río Negro se hayan molestado porque no fueron tenidos en cuenta, pero ese privilegio que nos dio a través de la rebaja en los combustibles y de otras medidas que anunció e inmediatamente puso en marcha significó nada más que cumplir con la palabra empeñada. Porque tuvo en cuenta que las condiciones políticas, económicas y sociales de Santa Cruz son plenamente asimétricas respecto de las de Río Negro.

Como muy bien lo saben los señores senadores, Santa Cruz tiene 250 mil kilómetros cuadrados y una población de 150 mil habitantes. Las condiciones de vida en mi provincia —lo digo con todo respeto— no son las mismas que en Río Negro, en donde hay tecnología de punta y se exporta tecnología nuclear.

La realidad de Santa Cruz es otra, es la que a diario se manifiesta en los actos de mi gobierno, actos que están destinados a no vivir de ilusiones, sino de realidades. Y la realidad indica que en este Senado de la Nación tenemos que defender no solamente los intereses de la provincia de Santa Cruz, sino también los de todas las demás provincias que constituyen la Nación.

Por eso, no tengo absolutamente ningún problema en que se incorpore a San Antonio Oeste en este artículo 47. Pero, como nunca he hecho un culto de la hipocresía en mi vida, quiero decir que esto ha sido un poco bastardeado porque, hablando llanamente, el establecimiento de

zonas francas debería disponerse solamente para dos regiones: la Patagonia y el Noroeste Argentino.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Costanzo. — Quisiera agradecerle sus argumentaciones al señor senador. Obviamente, no comparto algunas de ellas. Pero en última instancia lo que vale es su intención, su solidaridad con la idea de incorporar a San Antonio Oeste al texto del proyecto, declarándolo territorio aduanero especial.

Más allá de que la provincia de Río Negro tiene enclaves de desarrollo, como los tiene la provincia del Chubut —pensemos en Puerto Madryn, en la zona donde se produce el aluminio de Aluar, etcétera—, todas las provincias patagónicas tienen enclaves de desarrollos importantes. Pero estamos hablando de zonas geográficas similares por su atraso, por su escasa población y porque no pueden iniciar un proceso de desarrollo. Es una cuestión de solidaridad e igualdad, y por eso le agradezco al compañero senador su consentimiento para que se incorpore a San Antonio Oeste, que sin ninguna duda tiene similitudes geográficas, sociales y poblacionales con Chubut.

Sr. Presidente (Storani). — Se van a votar los pedidos de inserción oportunamente formulados.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Storani). — Se procederá en consecuencia ¹.

Se va a votar en general el dictamen de comisión en mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Storani). — En consideración en particular.

Se enuncia y aprueba el artículo 1º.

—Se enuncia el artículo 2º.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: la bancada justicialista ha acordado con partidos pro-

vinciales una modificación al dictamen de mayoría en el artículo 2º. En el segundo párrafo de este artículo se faculta al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los gobiernos provinciales la implementación de zonas francas comerciales en ciudades o pueblos limítrofes o fronterizos con países que tengan zonas francas en cualquier lugar de su territorio. Queremos que después de "sean fronterizos con países limítrofes" se agregue "puertos o vías navegables", dado que el dictamen de mayoría recoge este principio en el artículo 47. De este modo, se preservará la uniformidad del texto.

Por otra parte, el tercer párrafo del artículo 2º del dictamen de mayoría, de igual forma que el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, establece que las zonas francas creadas por este artículo no pueden estar a una distancia de menos de 300 kilómetros entre sí. Se trata de una limitación a la facultad que el mismo artículo otorga al Poder Ejecutivo para crear zonas francas. Ahora bien, las autorizaciones de zonas francas y su creación no van a ocurrir en forma simultánea. En consecuencia, pondríamos en una situación desventajosa a algunas provincias y romperíamos el principio de igualdad, ya que estaríamos condicionando a que en algún caso se deba establecer la zona franca en un lugar que sea geográficamente desfavorable, contrariando los objetivos de esta ley.

Además, en su párrafo tercero el proyecto de ley establece que no se puede crear más de una zona franca por provincia, aspecto que revela una incoherencia ya que el mismo artículo faculta adicionalmente la creación de hasta cuatro zonas francas regionales, y también prevé la posibilidad de creación de zonas francas comerciales. Por lo tanto, a continuación debe agregarse la expresión "salvo las excepciones de los párrafos primero y segundo del presente artículo".

Ya hicimos llegar a Secretaría Parlamentaria el texto definitivo y, en consecuencia, solicito su lectura a efectos de que todos los señores senadores tengan más clara la propuesta.

Sr. Presidente (Storani). — Así se hará.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Massat. — Señor presidente: quería hacer la siguiente aclaración.

En el artículo 2º, luego de la expresión "con países limítrofes" debería figurar un punto y coma. A continuación iría "puertos o vías navegables".

¹ Ver el Apéndice.

Sr. San Millán. — Ya está.

Sr. Presidente (Storani). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — La nueva redacción para el artículo 2º es la siguiente: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas regiones geográficas que por su situación económica crítica y/o vecindad con otros países, justifiquen la necesidad de este instrumento sin excepción.

"Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse, en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo Nacional convendrá con los gobiernos provinciales el establecimiento de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes; puertos o vías navegables que posean zonas francas en cualquier lugar del territorio.

"Las zonas francas a crearse dentro de una misma región deberán acreditar un perfil y funcionalidad que configure el rol específico que justifique su creación en el marco de los objetivos del artículo 4º, no pudiendo establecerse más de una por provincia, salvo las excepciones establecidas en los párrafos 1º y 2º del presente artículo.

"A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera que sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial respectivo, exigirá al concesionario una inversión mínima, conforme a la Ley de Convertibilidad."

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: como una muestra de todo el sistema de parches que viene sufriendo este proyecto de ley desde que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, nos encontramos aquí con esta prueba que constituye el último párrafo del artículo que ha sido leído.

Aquí dice que se exigirá al concesionario una inversión mínima conforme a la Ley de Convertibilidad. Se trata de un concepto que queda totalmente descolgado. Esto es consecuencia de que un dictamen de comisión de la Cámara de Diputados decía expresamente que las provincias debían exigir un mínimo de inversión de seis millones de dólares. Posteriormente, a efectos de mantener el monto actualizado, se agregó la expresión "conforme a la Ley de Convertibilidad", pero ocurre que luego eliminaron

la referencia a los seis millones de dólares quedando la mención de la Ley de Convertibilidad, concepto que —como ustedes advertirán— quedó sin sentido en el actual texto. Entonces, sugiero al bloque Justicialista su eliminación. Este es uno de los tantos errores técnicos de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Storani). — ¿La comisión acepta esta propuesta?

Sr. San Millán. — Sí, la aceptamos.

Estamos de acuerdo con la propuesta del presidente del bloque radical en el sentido de eliminar en el cuarto párrafo la expresión "conforme a la Ley de Convertibilidad". De esta manera el párrafo finalizaría con la expresión "...exigirá al concesionario una inversión mínima."

Sr. Genoud. — Creo que debería decir "una inversión significativa."

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Otra duda que tengo y que planteé en mi exposición es qué quiere decir "puertos o vías navegables que posean zonas francas en cualquier lugar del territorio". ¿Es una condición que se agrega a la otra o es independiente de que sean fronterizos con países limítrofes?

Me gustaría que algún miembro de la comisión aclarase este punto.

Sr. Massat. — Por eso yo decía que se coloque punto y coma; es otra condición, totalmente independiente. Una es ser provincia fronteriza de un país limítrofe; después vías navegables es otra condición para otra provincia que no sea fronteriza y que sí posea...

Sr. Aguirre Lanari. — ¿Esa es la opinión de la comisión?

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador miembro informante.

Sr. San Millán. — Sí, ése es el espíritu de incorporar "puertos o vías navegables".

Sr. Presidente (Storani). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: soy consecuente con lo que dije antes. Por ello solicito a la comisión que en el primer párrafo, luego de donde dice: "...en todo el territorio nacional..." se diga "...para ser ubicadas prioritariamente en aquellas regiones geográficas que por su extenso territorio fronterizo y vecindad con más de dos países integrantes del Mercosur justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción."

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador miembro informante.

Sr. San Millán. — Señor presidente: la redacción del artículo 2º a que se ha dado lectura, quitando la referencia a la Ley de Convertibilidad, es lo que ha acordado la bancada justicialista con partidos provinciales, con lo que estaría también de acuerdo el bloque de la Unión Cívica Radical, según manifestaciones de su presidente.

En consecuencia, pedimos que se vote el artículo en la forma mencionada.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Massat. — Insisto, para que no queden dudas ante la pregunta del señor senador por Corrientes, en que se trata de condiciones para diferentes provincias. Entonces, después de "países limítrofes" iría un punto y coma.

Sr. Presidente (Storani). — Con esa aclaración, si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 2º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 3º a 5º.

—Se enuncia el artículo 6º.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: con respecto al artículo 6º hago moción para que se vuelva a la redacción originaria que vino de la Cámara de Diputados, con el agregado de "territorio especial" a que hacía referencia el señor senador por Mendoza.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.

Sr. Oyarzún. — Señor presidente: he acercado a Secretaría una redacción sobre la base de lo que hemos conversado con el presidente del bloque radical, que tuvo la gentileza de anticiparla, y con el presidente del bloque Justicialista. Solicito que se dé lectura, justamente con el agregado que proponemos los senadores por Tierra del Fuego.

Sr. Presidente (Storani). — Por Secretaría se dará lectura de la redacción propuesta.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee) "Artículo 6º: En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, esta última con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países.

"No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrán fabricar bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general ni en las áreas aduaneras especiales existentes, a fin de admitir su importación a dicho territorio. Los bienes de capital a que se hace referencia en el párrafo anterior, a fin de su nacionalización seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (NCE) y de las restantes normas tributarias que correspondan.

A los efectos del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá confeccionar un listado de las mercaderías pasibles de dicho tratamiento y establecer los mecanismos de autorización de importación y control que considere convenientes."

Secretaría aclara que en el segundo párrafo el agregado sería "ni en las áreas aduaneras especiales existentes".

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Estamos de acuerdo con el agregado.

Sr. Presidente (Storani). — Se va a votar el artículo 6º con la modificación propuesta por el señor senador por Tierra del Fuego.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 7º y 8º.

—Se enuncia el artículo 9º.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: propongo que en el párrafo segundo de este artículo se elimine la palabra "fronterizas" donde dice: "En aquellas provincias fronterizas cuya densidad demográfica sea inferior a dos (2) habitantes..."

Sr. Presidente (Storani). — Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por el señor senador por Salta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 10 al 27.

—Se enuncia el artículo 28.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: en este artículo se habla de "territorio aduanero general

o especial". Se debe suprimir "o especial", ya que de mantenerse ello alteraría lo normado en el artículo 605 del Código Aduanero.

Sr. Presidente (Storani). — Se va a votar el artículo 28 con la eliminación de las palabras "o especial".

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 29 al 32.

—Se enuncia el artículo 33.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: aquí hay un error de tipeo. En el medio del artículo dice "y otras especies" cuando en realidad debe decir "y otras especies".

Sr. Presidente (Storani). — Se corregirá el error tipográfico en el orden del día.

Se va a votar el artículo 33.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 34 y 35.

—Se enuncia el artículo 36.

Sr. Cafiero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Pido autorización para abstenerme de votar en este artículo.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Mi propuesta, como lo anticipé en mi exposición, es que se redacte de otra manera, aclarando que no regirán restricciones especiales pero sí la legislación financiera y cambiaría con vigencia en el territorio aduanero general. El texto, en síntesis, diría: "No se establecerán en la zona franca restricciones especiales a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos, rigiendo al respecto, la legislación financiera y cambiaría con vigencia en el territorio aduanero general."

Sr. Snopek. — Pida la palabra.

Sr. Genoud. — Señor presidente...

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: esto lo expliqué al rendir el informe: el principio estaba ya establecido en el artículo 23, cuando dice que

"Con las salvedades que establece esta ley y el artículo 590 del Código Aduanero, serán aplicables a las zonas francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal que rigen en el territorio aduanero general." O sea, lo que establece es que será aplicable toda esta normativa y que, con relación a las zonas francas, no se establecerán restricciones especiales en la materia.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Yo comparto las expresiones del señor senador de la Rúa respecto del artículo 36. Hay dos opciones: o se elimina el artículo 36 porque está contenido en el artículo 23 o, de lo contrario, se redacta como lo sostiene el senador radical por la Capital, lo cual, de algún modo sería redundante con el artículo 23 pero no lesionaría el concepto que acaba de explicar el senador Fernando de la Rúa.

De lo contrario, se produciría una serie de suspicacias y la opinión pública podría pensar que éste puede ser, perfectamente, un método, procedimiento o sistema para el blanqueo de recursos mal habidos, lavado de narcodólares, etcétera. De tal modo que tiene que ser muy clara la redacción de este artículo o, de lo contrario, habría que suprimirlo.

En último término, reitero mi posición: que el artículo 36 quede redactado como lo sostiene el senador de la Rúa. De esta forma, habrá dos artículos similares, nada más.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: estamos de acuerdo con la modificación que propone el señor senador de la Rúa.

Sr. Presidente (Storani). — La Presidencia ruega al señor senador por la Capital que haga llegar el texto de su propuesta a la Secretaría para que pueda ser leído.

Sr. Cafiero. — Si se acepta la modificación propuesta por el señor senador por la Capital, votaré afirmativamente el artículo 36.

Sr. Presidente (Storani). — No se abstiene, entonces.

Por Secretaría se va a leer el texto de la modificación propuesta por el señor senador por la Capital al artículo 36, una vez que dispongamos del texto.

—Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee) "Artículo 36: No se establecerán en la zona franca restricciones especiales a las operaciones en divisas, tí-

tulos, valores, dinero y metales preciosos, rigiendo al respecto la legislación financiera y cambiaria con vigencia en el territorio aduanero general.”

Sr. Presidente (Storani). — Se va a votar el artículo 36 con la modificación propuesta por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 37 a 44.

—Se enuncia el artículo 45.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani) — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: he solicitado la palabra para referirme al artículo 45, sobre el que vamos a proponer una modificación, ya que el dictamen de las comisiones —así como también el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados— no contempla los derechos de terceros y de las provincias por actos jurídicos o administrativos que puedan haberse realizado en donde se han creado zonas francas. Me refiero, por ejemplo, a la zona franca de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, a la de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos y a la que se estableció en el puerto de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe.

La modificación se refiere a que se dejan a salvo todos los actos preexistentes, los acuerdos de las provincias con la Nación en este sentido.

Por ello vamos a proponer para este artículo la siguiente redacción: “La presente ley será aplicable a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092. El Poder Ejecutivo Nacional dará cumplimiento en todos sus alcances a los actos administrativos dictados en relación a tales normas y respetará los acuerdos preexistentes sobre la materia —áreas o zonas francas— con las distintas jurisdicciones locales”.

Dado el efecto retroactivo de la ley, queremos dejar a salvo derechos de terceros y de las provincias.

Sr. Presidente (Storani). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 45 con la redacción que acaba de proponer el señor senador por Salta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 46.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Queremos proponer que se establezca un plazo para reglamentar esta ley a partir de su promulgación. El plazo que sugerimos es de noventa días.

En consecuencia, el artículo 46 quedaría redactado así: “Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan dentro de los noventa (90) días de promulgada esta ley”.

Sr. Presidente (Storani). — En consideración el artículo 46 con la nueva redacción propuesta por el señor senador por Salta.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Me parece que el artículo 46 se refiere a otra cosa. No se trata del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo para poner en funcionamiento este tema, sino de las normas complementarias que deben dictar otros organismos que tienen competencia en materia de zonas francas. Me parece que se están mezclando las cosas.

Habría que decir: “El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su promulgación...”.

Sr. San Millán. — En realidad, el plazo al que me refería es para los organismos intervinientes con competencia en las operaciones de las zonas francas.

Sr. Storani. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — El procedimiento de reglamentación es el siguiente: hay varios organismos relacionados con el tema. Uno es la autoridad de aplicación, que es unipersonal, lo cual mereció nuestra crítica; luego está el comité o comisión de evaluación y selección, que es de carácter transitorio y pertenece a la órbita provincial. Es quien dice que tales empresas van a tener establecimientos en la zona franca. Después está el comité de vigilancia.

El reglamento lo elabora el organismo provincial, es decir, el comité de evaluación y selección. Tal reglamento es puesto a consideración de la autoridad de aplicación quien, en definitiva, lo aprueba.

De tal modo que comparto la objeción que formula el señor senador de la Rúa.

Sr. de la Rúa. — Además, hay otros organismos relacionados. Por ejemplo, la Dirección General Impositiva debe intervenir para eximir del IVA a las comunicaciones telefónicas.

Aquí se están refiriendo a todos los organismos intervinientes. Por eso se podría decir: “Los

organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán en igual plazo las disposiciones reglamentarias que correspondan...". Es decir, se establecería un plazo tanto para el Poder Ejecutivo como para los organismos involucrados.

Sr. San Millán. — Lo que queremos establecer es un plazo de noventa días a todos los organismos con competencia en esta materia para que dicten las normas complementarias pertinentes, incluyendo al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Sr. Presidente (Storani). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46 con la redacción propuesta por el señor senador por Salta.

Sr. Genoud. — ¿Cómo va a quedar redactado en definitiva?

Sr. San Millán. — Exactamente igual a la redacción originaria, con el agregado del plazo de noventa días.

Sr. Presidente (Storani). — El agregado lo ha propuesto el miembro informante y las aclaraciones posteriores surgieron respecto de si el párrafo iba antes o después. Pero, en definitiva, lo que está en consideración es la redacción original con el agregado que ha hecho el señor senador por Salta de los noventa días.

Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 47.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: en este artículo es donde hemos tenido las mayores observaciones.

Solicito muy especialmente al bloque oficialista que revea la decisión que tomó en su momento y que fue parte de la exposición del señor miembro informante respecto del segundo párrafo, por el cual se hace una delegación legislativa al Poder Ejecutivo para que por decreto disponga donde crea conveniente territorios aduaneros generales o especiales.

Esto es muy grave, señor presidente, porque no se trata de zonas francas sino de un instituto de mayor alcance económico y financiero, como es un territorio aduanero especial. Allí los aranceles de importación son reducidos en un 85 por

ciento y, con los que hoy están vigentes, esto significa reducirlos prácticamente a cero.

De lo que se trata también es de salvaguardar las propias atribuciones del cuerpo. Si el propio Código Aduanero dice que tanto las zonas francas como los territorios aduaneros especiales son facultad legislativa porque deben ser creadas por ley, ¿por qué con tanta ligereza el Senado ha dispuesto la incorporación de este párrafo, autocercenándose, quedando sin atribuciones?

Reitero, pido esto de un modo muy especial, porque ya tenemos una zona franca industrial por provincia, cuatro más discrecionales del Poder Ejecutivo y las zonas francas comerciales, incluso con la facultad de que sean con comercios minoristas en cualquier lugar del país. Por ello esta delegación del Poder Ejecutivo sobre territorios aduaneros especiales va más allá de lo razonable.

Otro aspecto es el referido al establecimiento de un territorio aduanero especial en la Puna, Chubut y Santa Cruz. Felicito el apasionamiento que han puesto los señores senadores para defender los derechos de los Estados a los que representan, pero creo que ha quedado bien claro por parte de los señores senadores radicales —en esto hemos estado todos de acuerdo— que supone un criterio selectivo inicuo para otras provincias o regiones que, con igual o más derecho, podrían aspirar a lo mismo.

Recuerdo una frase de Félix Luna en su libro *Buenos Aires y el país*. Dice que muchas veces el centralismo es culpa de las provincias, que no se ponen de acuerdo. Esto es una muestra más del acierto de este apotegma del gran historiador federalista.

Entonces, reitero muy especialmente mi pedido de que se elimine el párrafo segundo del artículo 47.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Molina. — Señor presidente: sin perjuicio de la apreciación que ha hecho el señor senador por Mendoza respecto del encarnizamiento, creo que es buena la sugerencia de eliminar esta excepcionalidad que se le ha dado al Poder Ejecutivo, esta gran facultad de crear territorios similares a los propuestos para la Puna. Creo que debemos aceptar la supresión de esta cuestión.

Con respecto al resto, naturalmente lo vamos a mantener sin mayores explicaciones, enten-

diendo que estamos haciendo justicia. En principio, creí que iba a quedar comprendido sólo el territorio de la Puna, pero luego se agregó Catamarca, después Salta y me parece bien que se lo haya hecho con Santa Cruz. Es decir que considero que esto debe quedar.

Sr. Presidente (Storani).— Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca.— Lo que deseo mencionar no está vinculado con el asunto que debatimos en este momento sino con propuestas surgidas del debate en general respecto de la inclusión como artículo 47 del que repara la omisión de la ciudad de Buenos Aires. Pero, conversando con los miembros de la comisión, convinimos en que era mejor que se tratara del artículo 50.

Sr. Presidente (Storani).— Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada.— Ya expresé mi posición respecto de este dictamen. Ahora bien, coincidiendo con lo manifestado por el señor senador Genoud acerca de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, existen riesgos de que los casos no incorporados en este listado queden sin posibilidades futuras.

Entonces, yo reflexionaría sobre algún mecanismo por el cual las regiones que no están puntualmente denominadas aquí no queden totalmente desprotegidas en cuanto a un régimen similar. Parecería que con el loable objetivo de no dar tanta capacidad de decisión al Poder Ejecutivo nacional también condenamos a las regiones no mencionadas en este artículo.

Por lo tanto, apelaría a que el miembro informante encontrara un mecanismo para no cerrar la posibilidad de que las provincias hagan reclamos de legitimidad, como es el caso de Misiones, sobre el que no quiero insistir.

Sr. Presidente (Storani).— Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán.— Como ya lo adelantara el presidente de nuestra bancada, estamos de acuerdo con la propuesta formulada por el señor senador Genoud en el sentido de eliminar el párrafo en donde se deja una facultad genérica al Poder Ejecutivo nacional.

Pero además, como adelantara también el señor senador por Santa Cruz, existe una propuesta de la bancada justicialista para agregar a la creación de territorios aduaneros especiales, uno en la provincia de Santa Cruz y otro en la del Chubut. El agregado sería el siguiente: "También establécese un Territorio Aduanero Espe-

cial en la Patagonia Austral, comprendiendo los departamentos de Río Senguerr y Futaleufú (Provincia del Chubut), Deseado, Lago Buenos Aires (Provincia de Santa Cruz)", y se eliminaría la última parte, que era la facultad genérica para el Poder Ejecutivo de crear territorios especiales.

Sr. Presidente (Storani).— Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Costanzo.— Deseo recordar la propuesta formulada por el señor senador Ludueña en el sentido de agregar el departamento de San Antonio Oeste, de Río Negro, tal cual fue establecido en la moción.

Sr. Solana.— ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Storani).— Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana.— Deseo pedirle una aclaración al señor senador por Río Negro. El departamento de San Antonio, ¿que abarca también a la ciudad de San Antonio Oeste y al balneario Las Grutas?

Sr. Costanzo.— No podemos hacer un deslinde. La propuesta está directamente vinculada con lo que manifestó el señor senador Mazzucco en el sentido de una reparación en torno a la problemática social de Sierra Grande a partir del cierre del emprendimiento.

Yo no puedo mensurar, determinar o acotar esta facultad a una superficie que condicione esta propuesta.

Sr. Solana.— Insisto, podría ser el municipio de Sierra Grande, señor senador. Porque agregar a este beneficio tan especial e importante la ciudad de San Antonio Oeste y el balneario Las Grutas me parece excesivo.

Sr. Presidente (Storani).— ¿El señor senador por Salta acepta el agregado propuesto en este último momento por el señor senador por Río Negro?

Sr. Molina.— Creo que la propuesta formulada por el señor senador por el Neuquén es muy atinada.

La ciudad que realmente tiene conflictos es Sierra Grande, tal como lo señalaba el señor senador Costanzo y sobre ese municipio la Legislatura ha dispuesto la creación de la zona franca y, en este caso, del territorio aduanero especial. Creo que va a ser muy complejo crear un territorio aduanero especial sobre Sierra Grande restringido al municipio.

Sr. Genoud.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Para aclarar que el Código Aduanero establece que el territorio aduanero especial debe ser creado por ley. De modo tal que si se crease, siempre y cuando se sancione este proyecto, territorios aduaneros especiales en las localidades consignadas en el artículo 47, tengan la seguridad de que será el primero en solicitar que se cree por ley un territorio aduanero especial para Misiones por las razones dadas en mi exposición.

Pero tengo mi opinión, la cual ya he explicado en distintas partes de mi intervención, acerca de que con este proyecto estamos elaborando un catálogo de ilusiones, porque todos y cada uno de quienes estamos aquí sabemos que resulta casi de imposible cumplimiento la creación de territorios aduaneros generales o especiales en el norte y sur de nuestro país, no solamente porque el Poder Ejecutivo se ha expresado en contra del tema sino también porque generará un conflicto por la desigualdad irritante en la que se encontrarán algunas localidades que están en igual o peor situación que las que se mencionan en el artículo 47.

Dejando a salvo la posición del señor senador Losada, siempre está el recurso de crear los territorios aduaneros especiales por ley.

Sr. Presidente (Storani). — Por Secretaría se dará lectura de la redacción final de este artículo.

Sr. Secretario (Piuzzi). — “Artículo 47: Establécese un Territorio Aduanero Especial en los territorios conocidos como Puna Argentina, comprendiendo los Departamentos de Antofagasta de la Sierra (Provincia de Catamarca), Los Andes (Provincia de Salta), Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochínoca (Provincia de Jujuy).

“También establécese un Territorio Aduanero Especial en la Patagonia Austral comprendiendo los Departamentos de Río Senguerr y Futaleufú (Provincia del Chubut), Deseado y Lago Buenos Aires (Provincia de Santa Cruz).”

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Proponemos que se elimine la conjunción “y” entre Deseado y Lago Buenos Aires y se exprese: “...Deseado, Lago Buenos Aires (provincia de Santa Cruz) y Municipio de Sierra Grande (provincia de Río Negro)”.

Sr. Costanzo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Costanzo. — El municipio de Sierra Grande está suficientemente acotado y limitado como para no extender los beneficios de esta propuesta a la zona que seguramente tendría o donde debería ubicarse, que es el puerto de Punta Colorada, donde está el embarcadero y donde con seguridad existe interés en promover la zona.

Cuando determino el departamento de San Antonio, para nada estoy haciendo extensivos los beneficios para las zonas que tienen un relativo desarrollo como San Antonio Oeste y, concretamente, el balneario Las Grutas, pero al limitar y acotar los beneficios al municipio de Sierra Grande, quedaría excluida la zona que tendría la infraestructura adecuada para este desarrollo.

De todos modos, si no es aceptado el criterio del departamento, desearía retirar la moción concreta y aceptar la redacción del artículo tal como está redactado.

Creo que se comete una injusticia con Sierra Grande porque, como bien lo señaló el señor senador Mazzucco, se trata de una zona que está requiriendo una reparación y en la que indudablemente existe un gran desarraigo porque la población sobrevive prácticamente gracias a los procesos indemnizatorios por la situación del cierre de la planta.

En este momento el Senado tendría que representar los intereses de los cuales se habla en los discursos y ocuparse de las zonas y departamentos rezagados que requieren una atención especial.

Cuando estamos en el momento de solidarizarnos con determinadas situaciones y plantear la posibilidad de que Sierra Grande inicie un proceso de crecimiento o de solución de sus problemas sociales, vemos estas actitudes que no se compadecen con la atención que merecen zonas del interior del país que en este momento debieran contar con los beneficios establecidos en el artículo 47 del proyecto.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Simplemente quiero aclarar que en ningún momento he tenido la intención de oponerme en el sentido de que Sierra Grande no merezca este beneficio arancelario. Tengo la absoluta convicción de que sí lo merece. Só-

lo he hecho referencia a que a mi juicio sería excesivo que el beneficio se extendiera a la ciudad de San Antonio Oeste y al balneario Las Grutas, que están en pleno desarrollo, florecientes.

Si existe el compromiso y la aclaración necesarios para que con esta interpretación se pueda aceptar la inclusión de esa región, no tengo ningún inconveniente.

En el Neuquén también tenemos lugares como Plaza Huincul que luego de la privatización de YPF y del desmantelamiento producido están en este momento en una situación realmente desastrosa.

No deseo ser egoísta en este sentido ni privar de beneficios a una región del país, y mucho menos a nuestra vecina Río Negro.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Es a efectos de zanjar las diferencias para ver si coincidimos con el señor senador por Río Negro, a quien rogamos nos ayude.

Diría: "Municipio de Sierra Grande (Provincia de Río Negro) con la jurisdicción necesaria para cumplir su cometido".

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Costanzo. — Me parece correcta la observación del señor senador por Santa Cruz.

Sr. Presidente (Storani). — En consecuencia, al texto leído habría que agregar "...y Municipio de Sierra Grande (Provincia de Río Negro) con la jurisdicción necesaria para cumplir su cometido"; tal como lo acaba de proponer el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Costanzo. — "...jurisdicción y extensión necesarias..."

Sr. Presidente (Storani). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 47 con su nueva redacción.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 48 y 49.

Sr. Vaca. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Señor presidente: pido que se incluya como nuevo artículo 50 el que mencionara en mi exposición en general. El texto es el siguiente: "Entiéndese que las referencias hechas en la presente ley con respecto a las provincias y a los gobiernos provinciales incluyen al terri-

torio de la Capital Federal y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires."

Sr. Presidente (Storani). — En consideración el nuevo artículo 50 con esta redacción.

¿El señor miembro informante acepta esta modificación?

Sr. San Millán. — Sí, señor presidente; estamos de acuerdo.

Sr. Presidente (Storani). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 51, ex 50, es de forma.

Sr. Presidente (Storani). — **Queda sancionado el proyecto de ley.** Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

7

MANIFESTACIONES

Sr. Massat. — Señor presidente: pido la colaboración de los señores senadores y un esfuerzo más para tratar un proyecto que ingresó a este cuerpo en el mes de julio del 93. Y en el mes de diciembre del 93 tiene dictamen por unanimidad de las cuatro comisiones involucradas en el análisis y estudio del sistema nacional de inversiones públicas.

Desde las comisiones de la Inversión y de Obras Públicas habíamos pedido en su momento que se postergara el tratamiento del asunto para permitir la inclusión de algunas modificaciones. Hemos logrado consensuar estas modificaciones con el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, preservando fundamentalmente la potestad y el protagonismo de las dos Cámaras que integran el Parlamento argentino en el seguimiento del sistema nacional de inversiones públicas y la participación de las provincias en la elaboración de este programa de inversiones públicas.

Acá hay un dictamen definitivo que tuvo el aval de todos los bloques. Pido a los señores senadores que acompañen con su aprobación esta iniciativa que crea el sistema nacional de inversiones públicas, ampliamente respaldado por todas las bancadas de este Senado.

Sr. Presidente (Storani). — Como no hay un número suficiente de senadores, queda levantada la sesión.

—Son las 22 y 36.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos

¹ Ver el Apéndice.

8

APENDICE

1

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Accesibilidad de personas con movilidad reducida

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**MODIFICACION DE LA LEY 22.431**

Artículo 1º—Sustitúyese el capítulo IV y sus artículos componentes, 20, 21 y 22, por el siguiente texto:

CAPÍTULO IV**Accesibilidad al medio físico**

Artículo 20: Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo.

A los fines de la presente ley entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

Entiéndese por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos, a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes criterios:

- a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida.
- b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y hori-

zontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el apartado a);

- c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el apartado a). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida;
- d) Estacionamiento: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales;
- e) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas;
- f) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el apartado a).

Artículo 21: Entiéndese por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de vivienda, a cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el presente artículo.

Entiéndese por adaptabilidad la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico, con el fin de conocerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.

Entiéndese por practicabilidad la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos físicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.

Entiéndese por visitabilidad la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario, que permita la vida de relación de las personas con movilidad reducida:

- a) Edificios de uso público: deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de mo-

a partir de reglamentada la presente. Su incumplimiento podrá determinar la cancelación del servicio.

Art. 3º — Agrégase al final del artículo 27 el siguiente texto:

Asimismo, se invitará a las provincias a adherir y/o a incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de los artículos 20, 21 y 22 de la presente.

Art. 4º — Deróganse las disposiciones de las leyes 13.512 y 19.279 que se opongan a la presente, así como toda otra norma a ella contraria.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1994.

Señor secretario parlamentario del Honorable Senado

Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario, comunicándole que en la sanción de esta Honorable Cámara de fecha 30 de septiembre de 1992, expediente 2.537-D.-92, Orden del Día Nº 691, en su artículo 4º, donde dice "19.274", debe decir "19.279".

Saludo a usted muy atentamente.

Esther Pereyra Arandía de Pérez Pardo.

2

Zonas francas

—El texto del proyecto de ley aprobado es el siguiente:

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º — Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- Zona franca:** es el ámbito que se define en el artículo 590 del Código Aduanero;
- Territorio aduanero general:** es el ámbito que se define en el apartado 2 del artículo 2º del citado código;
- Territorio aduanero especial:** es el ámbito que se define en el apartado 3 del artículo 2º del mismo código;
- Terceros países u otros países:** es el ámbito geográfico sometido a la soberanía de otros países incluidos los enclaves constituidos a favor de otros Estados.

De las zonas francas

Art. 2º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubica-

das en aquellas regiones geográficas que por su situación económica crítica y/o vecindad con otros países, justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.

Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse, en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional convendrá con los gobiernos provinciales el establecimiento de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes; puertos o vías navegables que posean zonas francas en cualquier lugar del territorio.

Las zonas francas a crearse dentro de una misma región deberán acreditar un perfil y funcionalidad que configure el rol específico que justifique su creación en el marco de los objetivos del artículo 4º, no pudiendo establecerse más de una por provincia, salvo las excepciones establecidas en los párrafos 1º y 2º del presente artículo.

A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera que sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial respectivo, exigirá al concesionario una inversión mínima.

Art. 3º — La creación de las zonas francas previstas en el artículo anterior se podrá materializar en aquellas provincias que hayan adherido a las previsiones de la presente, a través de un convenio de adhesión a ser celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias. Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en todos sus términos por ley provincial.

El Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales convendrán la creación y puesta en funcionamiento de un organismo federal encargado de divulgar y promocionar las actividades de las zonas francas creadas en el territorio nacional.

Objetivos

Artículo 4º — Las zonas francas tendrán como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que, el aumento de la eficiencia y la disminución de los costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas, se extiendan a la inversión y al empleo.

El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la política comercial nacional, debiendo contribuir al crecimiento y a la competitividad de la economía e incorporarse plenamente en el proceso de integración regional.

Actividades

Art. 5º — Las zonas francas deberán constituirse en polos de desarrollo de las regiones donde se establezcan mediante la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles en la misma, dentro de las condiciones fijadas en la presente ley y en los decretos que la reglamenten.

Art. 6º — En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, esta última con el único objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países.

No obstante lo señalado precedentemente, en las zonas francas se podrán fabricar bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general ni en las áreas aduaneras especiales existentes, a fin de admitir su importación a dicho territorio. Los bienes de capital a que se hace referencia en el párrafo anterior, a fin de su nacionalización seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (NCE) y de las restantes normas tributarias que correspondan.

A los efectos del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá confeccionar un listado de las mercancías pasibles de dicho tratamiento y establecer los mecanismos de autorización de importación y control que considere convenientes.

Art. 7º — En las zonas francas las mercaderías pueden ser objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservación y de las manipulaciones ordinarias, destinadas a mejorar su presentación o calidad comercial o acondicionarlas para el transporte, tales como división o reunión de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje. La mercadería puede ser objeto de transferencia.

Igualmente podrán ser objeto de actividades de producción con destino exclusivo a terceros países, tales como transformación, elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento.

Art. 8º — No regirán para las operaciones de introducción o extracción hacia o desde la zona franca restricciones económicas ni depósitos previos a las operaciones de comercio internacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca en ciudades y pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo aconsejen.

En aquellas provincias cuya densidad demográfica sea inferior a dos (2) habitantes por kilómetro cuadrado, el Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar las operaciones previstas en este artículo en cualquier lugar de su territorio.

Art. 10. — Queda prohibido el consumo de mercaderías dentro de la zona franca, en aquellos casos distintos a las actividades propias del funcionamiento de la misma.

Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación para el consumo de vituallas destinadas al personal que preste servicios dentro de la zona franca.

Art. 11. — Las horas y lugares de ingreso y egreso de personas y mercaderías hacia o desde la zona franca serán los determinados por el comité de vigilancia de la misma de conformidad con las reglamentaciones que éste dicte.

Art. 12. — Estará prohibido habitar permanente o transitoriamente dentro de la zona franca.

Funciones y autoridades

Art. 13. — Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 14. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de:

- a) Evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca, definir los criterios de selección y ordenar los proyectos;
- b) Elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad de aplicación el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca. Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de la concesión de la explotación de la zona franca, las causales de revocación, las sanciones por incumplimiento, como también las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona, así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios. Dentro del plazo de noventa (90) días la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el proyecto de reglamento de funcionamiento y operación que le ha sido elevado, pudiéndose prorrogar el mismo por treinta (30) días más, reputándose aprobado el proyecto que no haya merecido observaciones dentro de ese plazo;
- c) Llamar a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión de la explotación de la zona franca;
- d) Adjudicar la concesión de la zona franca con aprobación de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá hasta noventa (90) días para expedirse a partir de la fecha de evaluación de los antecedentes y resultados del acto licitatorio para aprobar el mismo. Si en este término la autoridad de aplicación no se expidiera se considerará firme la adjudicación efectuada por el gobierno provincial;
- e) Las demás que establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 15. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir un organismo provincial público o mixto, en el que deberán estar representados los municipios del área de influencia de la zona de que se trate y entidades empresarias y de la producción.

Dicho organismo tendrá las funciones de comité de vigilancia.

Art. 16. — El comité de vigilancia de la zona franca tendrá las siguientes funciones:

- a) Promover la radicación de actividades destinadas a la investigación y la innovación tecnológica que conduzcan a un mayor afianzamiento de los mercados externos;

- b) Remitir toda información que requiera la autoridad de aplicación, y servir a la misma como órgano de consulta y asesoramiento permanente sobre las actividades de la zona franca;
- c) Fiscalizar la provisión de información estadística adecuada, oportuna y suficiente sobre los principales indicadores económicos y comerciales de la zona franca requerida al concesionario y al usuario, la que será de libre consulta;
- d) Evaluar el impacto regional de la zona franca y articular su funcionamiento con los planes provinciales y municipales, identificando efectos perniciosos y costos de la zona, los que deberán estar a cargo de las empresas usuarias que los generen;
- e) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario a cargo de la explotación de la zona franca y en su defecto informar a la autoridad de aplicación sobre las mismas;
- f) Auditar periódicamente las medidas de vigilancia y control necesario de accesos y límites de la zona franca;
- g) Percibir del concesionario un derecho por la concesión bajo forma de un pago único o en un canon periódico;
- h) Garantizar la concurrencia de los usuarios en el acceso e instalación en la zona franca conforme al reglamento de funcionamiento y operación, y atender y dar respuesta a sus reclamos;
- i) Hacer cumplir las leyes y regulaciones aplicables, el reglamento de funcionamiento y operación, las normas internas de la zona franca y los acuerdos de concesión y operación;
- j) Velar por el cumplimiento de las normas sobre la conservación del medio ambiente, y en especial el tratamiento de los efluentes originados en la zona franca;
- k) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 17. — El comité de vigilancia propiciará la libre concurrencia en la prestación de servicios dentro de la zona franca, previéndolo en el reglamento de funcionamiento y operación respectivo. Deberá aprobar tasas y cargos para todos los servicios y concesiones dentro de la zona franca, asegurando el tratamiento uniforme en condiciones equivalentes para los usuarios y mercaderías.

Art. 18. — La explotación de la zona franca será de carácter privado o mixto. Las obras y la infraestructura necesarias correrán por cuenta del concesionario.

Art. 19. — La explotación se ofrecerá por licitación pública, nacional e internacional, la que se ajustará a las condiciones que establezcan la comisión de evaluación y selección prevista en el artículo 14 de la presente.

Art. 20. — El o los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones:

- a) Realizar las obras de infraestructura y conexiones de servicios básicos en la zona franca que sean necesarios para su normal funcionamiento y que formen parte del proyecto aprobado por la comisión de evaluación y selección y la autoridad de aplicación;
- b) Alquilar a los usuarios lotes para la construcción de edificios destinados a las distintas actividades. No podrá cederse el uso de la totalidad del área a un solo usuario, ni tampoco constituir monopolio de hecho, independientemente del número de usuarios;
- c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con sus actividades;
- d) Urbanizar, proyectar y construir edificios para las distintas actividades permitidas en la zona franca;
- e) Dictar y modificar su propio reglamento interno con aprobación del comité de vigilancia, ajustado a la legislación y reglamentaciones vigentes;
- f) Asegurar la prestación de servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, fuerza motriz, calor, refrigeración o cualquier otra clase de servicios necesarios para las operaciones de la zona franca, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente;
- g) Promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades de la zona franca;
- h) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento y operación y el reglamento interno;
- i) Remitir la información necesaria a las memorias periódicas de operación de la zona franca, así como cualquier otro dato estadístico o de información que requiera el comité de vigilancia;
- j) El concesionario será solidariamente responsable con los usuarios que transgredan la legislación aduanera y las reglamentaciones de la zona franca;
- k) Pagar los costos del control aduanero de la zona en base a las pautas que se convengan entre el comité de vigilancia y la Administración Nacional de Aduanas;
- l) Las demás que le atribuya la reglamentación de la presente ley.

Art. 21. — Los usuarios deberán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieran derecho a desarrollar actividades dentro de la zona franca mediante el pago de un precio convenido.

Art. 22. — Los usuarios de la zona franca deberán llevar contabilidad separada de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio aduanero general o especial.

Tratamiento fiscal y aduanero

Art. 23. — Con las salvedades que establece esta ley y el artículo 590 del Código Aduanero, serán aplicables a las zonas francas la totalidad de las disposiciones de carácter impositivo, aduanero y financiero incluidas las de carácter penal, que rigen en el territorio aduanero general.

Art. 24. — Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 25. — Las mercaderías que salgan de la zona franca hacia terceros países, estarán exentas del pago de los tributos que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados.

Art. 26. — Exímese del pago de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se prestan dentro de la zona franca.

A tal efecto se entenderá por servicios básicos aquellos que tengan por objeto la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y de desagüe.

Art. 27. — Las mercaderías que se introduzcan a la zona franca provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación suspensiva.

Art. 28. — Las mercaderías que se extraigan de la zona franca con destino al territorio aduanero general serán consideradas como una importación.

Art. 29. — Los estímulos que correspondan a las exportaciones que se efectúen desde el territorio aduanero general o especial a la zona franca, serán liquidados una vez que la mercadería fuere extraída de dicha zona hacia otro país, y dentro del plazo que a este efecto establecen las normas generales que rigen la materia, ya sea en el estado que poseía cuando ingresó a la misma, o en otro.

Art. 30. — La extracción de mercaderías de la zona franca hacia terceros países, no gozará de otros estímulos que los correspondientes por la devolución de tributos efectivamente pagados cuando fueren pasibles de devolución a los exportadores del territorio aduanero general. Asimismo, gozarán de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.

Art. 31. — En el convenio de adhesión para el establecimiento de cada zona franca previsto en el artículo 3º, los gobiernos provinciales deberán comprometerse a no disponer la exención de los impuestos provinciales salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de una eventual adhesión a la exención nacional de los tributos que graven los servicios básicos, referida en el artículo 26 y de las exenciones que existieran para operaciones de exportación.

En el mismo convenio, los gobiernos provinciales se deberán comprometer a acordar con los municipios igual comportamiento para los usuarios y actividades de la zona franca.

Art. 32. — Los usuarios de la zona franca no podrán acogerse a los beneficios y estímulos fiscales de los regímenes de promoción industrial, regionales o sectoriales, creados o a crearse, en el territorio de la Nación.

Art. 33. — Podrán introducirse en la zona franca toda clase de mercaderías y servicios estén o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de armas, municiones, y otras especies que atenten contra la moral, la salud, la sanidad vegetal y animal, la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Art. 34. — El Poder Ejecutivo nacional establecerá mediante reglamentación el régimen aplicable en materia de destinaciones suspensivas de importación y exportación desde o hacia la zona franca, contemplando en ella la prohibición de nacionalización de mercaderías que ingresen al territorio aduanero general o especial.

Art. 35. — La totalidad de las gestiones, trámites, documentación y demás operaciones administrativas aduaneras que se efectúen en la zona franca, se realizarán en la respectiva delegación que la Administración Nacional de Aduanas habilitará en cada una de ellas y que funcionará en el interior de su recinto.

Art. 36. — No se establecerán en la zona franca restricciones especiales a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos, rigiendo al respecto, la legislación financiera y cambiaria con vigencia en el territorio aduanero general.

Art. 37. — La provincia por intermedio de la Comisión de Evaluación y Selección, a partir del estudio de los proyectos de factibilidad de cada zona franca, propondrá a la autoridad de aplicación la localización y delimitación de la misma, así como las áreas de expansión previstas.

Art. 38. — El área física que se declare zona franca será deslindada y cercada en forma tal que permita garantizar su aislamiento respecto del territorio aduanero general.

Art. 39. — Autorízase a la autoridad de aplicación a expandir el espacio físico de la zona franca de acuerdo con lo que proponga el Comité de Vigilancia conforme a los proyectos aprobados cuando condiciones excepcionales así lo aconsejen.

Art. 40. — Los predios e inmuebles donde se ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada, y deberán estar desocupados y libres de litigios.

El Poder Ejecutivo nacional, en la reglamentación de la presente, establecerá las condiciones para la admisión del uso de predios de propiedad privada.

Otras disposiciones sobre zonas francas

Art. 41. — La legislación laboral a ser aplicada en las zonas francas será la vigente en el territorio aduanero general.

Art. 42. — Se admitirán acuerdos entre provincias y entre éstas de manera simultánea con el Poder Ejecutivo nacional, para la creación de zonas francas interprovinciales autorizándose en esos casos la constitución de comisiones análogas a la del artículo 14, pero de

naturaleza interprovincial. Esta zona franca equivaldrá al cupo asignado para cada provincia por el artículo 2º de esta ley.

Art. 43. — Las previsiones de la presente ley y los derechos emergentes de los estados provinciales quedan supeditados a la adhesión expresa de cada uno, que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera suscrito el convenio previsto en el artículo 3º, se considerará que la misma no ha adherido a la presente.

Art. 44. — Si en el plazo de dieciocho (18) meses de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras de infraestructura previstas en el proyecto de instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate.

Art. 45. — La presente ley será aplicable a las zonas francas instituidas por las leyes 5.142 y 8.092. El Poder Ejecutivo nacional dará cumplimiento en todos sus alcances a los actos administrativos dictados en relación a tales normas y respetará los acuerdos preexistentes sobre la materia —áreas o zonas francas— con las distintas jurisdicciones locales.

Art. 46. — Los organismos intervinientes, con competencia en las operaciones de las zonas francas, dictarán las reglamentaciones complementarias que correspondan dentro de los noventa (90) días de promulgada esta ley.

TITULO III

Territorio Aduanero Especial

Art. 47. — Establécese un Territorio Aduanero Especial en los territorios conocidos como Puna Argentina, comprendiendo los departamentos de Antofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca), Los Andes (provincia de Salta), Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochínoca (provincia de Jujuy).

También establécese un Territorio Aduanero Especial en la Patagonia Austral, comprendiendo los departamentos de Río Senguerr y Futaleufú (provincia del Chubut), Deseado, Lago Buenos Aires (provincia de Santa Cruz) y Municipio de Sierra Grande (provincia de Río Negro), con la jurisdicción y extensión necesarias para cumplir su cometido.

Art. 48. — El Territorio Aduanero Especial establecido o que se establezca por el artículo anterior, tendrá las características definidas en el artículo 2º, apartado 3 del Código Aduanero, y la modalidad y alcance establecido en los artículos 600, 602, 603, 604, 605, 606 y 607 de dicho código.

Art. 49. — De conformidad a lo establecido en el artículo 600 del Código Aduanero, los tributos que gravan a la importación para consumo y a la exportación para consumo serán de un 15 % de los que rigen en el Territorio Aduanero General.

Art. 50. — Entiéndese que las referencias hechas en la presente ley con respecto a las provincias y a los gobiernos provinciales incluyen al territorio de la Capital Federal y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 51. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

II

INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador Snopek

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1993.

Señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador doctor Juan Carlos Romero.

S/D

Con fecha 2 de octubre pasado he presentado a este Honorable Senado un proyecto de ley mediante el cual se crea un Territorio Aduanero Especial en la Puna Argentina.

Este proyecto bien puede unificarse con el proyecto que reglamenta las actividades de las zonas francas.

Voy a recordar los fundamentos que vertiera en ocasión de presentar el proyecto de ley de creación del Territorio Aduanero Especial. En tal oportunidad expresé:

Desde la óptica de la economía, la integración entre países constituye un instrumento que posibilita una más eficiente asignación de los recursos en actividades productivas de cada uno de los países que conforman un área integrada.

Esta mayor eficiencia se logra por una apertura de mercados; por una mayor movilidad a los factores de la producción; por la posibilidad de fusión de empresas que, ampliando de tal modo sus escalas de producción, puedan reducir sus costos unitarios; por la posibilidad de realizar producciones conjuntas con las correspondientes especializaciones productivas, etcétera.

Visto así el beneficio que puede reportar un proceso de integración, es menester detenerse en la condición o presupuesto de viabilidad que indican la economía internacional —sea por el análisis teórico, sea por la evidencia empírica.

Para que un proceso de integración económica sea un verdadero instrumento de eficientización de la economía de las naciones que expresan su voluntad de integrarse, es necesario que las estructuras económicas y los niveles de desarrollo de cada uno de los países presenten notas de similitud, es decir: la apertura económica será eficaz en la medida que se circunscriba a regiones de características similares.

Ahora bien, el Mercosur es un proceso de integración concebido de esta manera, que toma, como

estructuras económicas y niveles de desarrollo relativamente semejantes, a las existentes en la zona central de nuestro país. Pero ocurre que el NOA dista mucho de éstos y de las condiciones que presentan Brasil y Uruguay, por lo que resulta poco probable que esta subregión argentina pueda alcanzar una mayor eficiencia con la integración en el Mercosur; incluso, es factible que provoque un mayor deterioro en su economía.

Es por ello que las provincias del NOA se encuentran en la necesidad de arbitrar un esquema de apertura económica capaz de motivar una mayor eficiencia productiva, esquema que, por lo ya visto, debe estar circunscripto a las regiones similares; esto es, al norte de Chile y al sur de Bolivia.

Este esquema de integración, viene a cubrir las deficiencias del Mercosur para esta importante subregión del territorio argentino.

En efecto, posibilitará que las producciones locales accedan a los importantes mercados de Bolivia, del Pacto Andino y a todos aquellos a los que se puede llegar ventajosamente por puertos ubicados en el litoral del océano Pacífico y, además, que esas producciones utilicen insumos ubicados en toda la región de modo que justifiquen su explotación racional. Tal el caso de los minerales, que ante una dotación insuficiente de los recursos mineros, requiere de la suma de las producciones de los distintos países en pos de una provechosa industrialización.

Debe destacarse que la integración comienza a materializarse en forma centrifuga, desde las zonas fronterizas hacia el interior de cada uno de los países y que, por ésta y las precedentes razones, es fundamental crear las condiciones favorables a la integración de tales áreas fronterizas.

La zona fronteriza argentina que limita con Bolivia y Chile es la Puna, la cual forma parte de una unidad geográfica constituida por ésta, por el altiplano boliviano y la puna de Atacama chilena. Resulta indudable el carácter homogéneo de esta región ya que presenta en los tres países idénticas características geológicas e hidrográficas, siendo también similares su flora y su fauna.

La topografía de la Puna muestra una altiplanicie enmarcada por cerros y por muy pocos accidentes que posibiliten su comunicación con el resto del territorio nacional siendo Tres Cruces por la Quebrada de Humahuaca, Lipán por la Quebrada de Purmamarca y las quebradas del Toro y de Cachi, esos pocos lugares de acceso.

Resultante de esta característica geográfica, es la facilidad de control de la población que ingresa o egresa de la misma.

Por otra parte, los habitantes de esta unidad geográfica americana, poseen similares características étnicas y culturales y deben soportar las condiciones inhóspitas de la excesiva altitud sobre el nivel del mar —con alturas superiores a los 3.500 metros—, las bajas temperaturas de hasta -25°C y la falta de humedad; ello implica una particularidad importantísima de la Puna en el proceso de

integración del Noroeste Argentino con el norte de Chile y el sur de Bolivia.

Sin embargo, existen disparidades en las condiciones jurídicas que regulan la actividad económica en relación a las de la I Región de Chile y a las del sur de Bolivia en detrimento de la nuestra, lo que motiva que el grueso del comercio se asiente en los otros territorios.

En su mérito y como primer paso hacia una integración fronteriza, dentro de un proceso de integración subregional más amplio en Sudamérica, proponemos la creación de un territorio aduanero especial tal como lo prevé el Código Aduanero, de manera que sus habitantes puedan vivir en él con un costo menor y realizar todo tipo de cambios comerciales y productivos con los territorios fronterizos de los países vecinos, sin las restricciones impositivas que rigen en el resto del territorio aduanero.

La iniciativa, entonces, propicia la creación de un territorio aduanero especial en la Puna Argentina con las características definidas en el artículo 2º apartado 3 del Código Aduanero, estableciendo que los tributos que gravaren la importación y exportación de bienes para consumo será de un diez por ciento (10 %) de los que rigen en el Territorio Aduanero General, habida cuenta de las previsiones del artículo 600 inciso a) del código citado.

Este tratamiento diferencial resulta necesario e imprescindible para hacer frente a los graves problemas que afectan a la zona y para revertir el proceso de continuo deterioro, generando los alcienes indispensables a fin de sentar las bases que permitan iniciar el desarrollo de lugares y poblaciones que vienen siendo objeto de postergación.

Al respecto bien se ha dicho que: "En el área especial el nivel arancelario debe ser inferior por lo menos en un 25 % al que rige en el Territorio Aduanero Especial... Se estima que de no mediar una diferenciación de tal entidad en el tratamiento arancelario, no se justifica la creación de un área aduanera especial dado el costo administrativo que ello implica" (conf. *Exposición de motivos del Código Aduanero*, página 340, Ed. Guía Práctica, Buenos Aires, 1981).

La introducción y salida del área propuesta hacia los demás ámbitos, será regida por las previsiones del Código Aduanero (artículos 602 a 606).

Esto es:

- Exención del pago de los tributos que gravaren la introducción de mercaderías de la Zona Aduanera General al Territorio Aduanero Especial (artículo 602);
- Posibilidad de establecer un régimen de estímulo a las ventas de mercaderías originarias del Territorio Aduanero Especial con destino al extranjero o a una zona franca (artículo 603);
- Exención del pago de tributos para la mercadería originaria del Territorio Aduanero Especial destinada al consumo en el Territorio Aduanero Especial (artículo 604);

- d) Para la mercadería procedente pero no originaria del Area Aduanera Especial que se destine al consumo en el Territorio Aduanero General, abonará los gravámenes de importación con deducción de los tributos que ya se hubieran pagado (artículo 605).

La unificación entre el proyecto de ley de zonas francas y el de creación del Territorio Aduanero Especial, requeriría de las siguientes modificaciones, al primero de ellos:

I. — Dividir el texto en dos títulos:

- a) Título I: Zonas Francas, el cual debe insertarse a continuación del artículo 1º;
- b) Título II: Territorio Aduanero Especial, que debe insertarse a continuación del artículo 43.

II. — Debe sustituirse el título que precede al artículo 38, "Otras disposiciones", por el siguiente: "Otras disposiciones sobre zonas francas".

III. — Incorporar a partir del artículo 43, título II, "Territorio Aduanero Especial", los siguientes artículos:

Artículo 44: Establécese un Territorio Aduanero Especial en el territorio conocido como Puna Argentina, comprendiendo los departamentos de Autofagasta de la Sierra (provincia de Catamarca), Los Andes (provincia de Salta), Susques, Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Cochinoca (provincia de Jujuy).

Artículo 45: El Territorio Aduanero Especial establecido en el artículo anterior, tendrá las características definidas en el artículo 2º, apartado 3 del Código Aduanero y la modalidad y alcance establecido en los artículos 600, 602, 603, 604, 605, 606 y 607 de dicho Código.

Artículo 46: De conformidad a lo establecido en el artículo 600 del Código Aduanero, los tributos que graven a la importación para consumo y a la exportación para consumo, será de un 15 % de los que rigen en el Territorio Aduanero General.

Artículo 47: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2

Solicitada por el señor senador Romero Feris

Modificaciones propuestas por
el señor senador Romero Feris * * *

Artículo 1º — Para los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) Zona franca: es el ámbito que se define en el artículo 590 del Código Aduanero;

* Los textos en bastardilla son propuestas de agregados a los artículos.

** En los textos en bastardilla en los que figure "Comisión Federal de Zonas Francas", se propone que diga "Poder Ejecutivo nacional".

- b) Zona franca comercial: es el ámbito que se define en el artículo 597 del Código Aduanero;
- c) Territorio aduanero general: es el ámbito que se define en el apartado 2 del artículo 2º del citado Código;
- d) Territorio aduanero especial: es el ámbito que se define en el apartado 3 del artículo 2º del mismo Código;
- e) Terceros países u otros países: es el ámbito geográfico sometido a la soberanía de otros países incluidos los enclaves constituidos a favor de otros Estados.

Art. 2º — Facúltase a la Comisión Federal de Zonas Francas, con anuencia del Poder Ejecutivo nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyéndose las ya existentes a los efectos de este cómputo, pudiendo crear adicionalmente, no más de cuatro (4) en todo el territorio nacional, a ser ubicadas en aquellas regiones geográficas que por su situación económica crítica y/o vecindad con otros países justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción. *A tal fin se dará prioridad a las que sean limítrofes con países del Mercosur.*

Las zonas francas a crearse deberán estar localizadas a una distancia no menor de trescientos (300) kilómetros entre sí, no pudiendo establecerse más de una *por límite internacional*. Sin perjuicio de la existencia de zonas francas creadas o a crearse en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, convendrá con los gobiernos provinciales el establecimiento de zonas francas comerciales en las ciudades o pueblos de su jurisdicción que sean fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio.

A los efectos de autorizar la creación de una zona franca, cualquiera sea su localización, el Poder Ejecutivo provincial respectivo, exigirá al concesionario una inversión mínima, conforme a la Ley de Convertibilidad.

Art. 3º — La creación de las zonas francas previstas en el artículo anterior se podrá materializar en aquellas provincias que hayan adherido a las previsiones de la presente, a través de un convenio de adhesión a ser celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y los titulares de los gobiernos de las provincias.

Dicho convenio de adhesión deberá ser aprobado en todos sus términos por ley provincial.

El Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales convendrán la creación y puesta en funcionamiento de un organismo federal encargado de resolver sobre la creación y ubicación de las zonas francas en los términos del artículo 2º así como también de divulgar y promocionar las actividades de las zonas francas creadas en el territorio nacional. *Dicho organismo se denominará Comisión Federal de Zonas Francas.*

Art. 9º — *Facúltase a la Comisión Federal de Zonas Francas para autorizar operaciones de comercio al por menor en una zona franca en ciudades y pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio cuando las circuns-*

tancias así lo aconsejen. *En las provincias del Chubut y de Santa Cruz, atenta su reducida densidad demográfica, se podrá autorizar tales operaciones en cualquier lugar de su territorio.*

Art. 14. — Las provincias que adhieran a las previsiones de la presente, deberán constituir en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de: ...

e) *Las demás que establezca la Comisión Federal de Zonas Francas por vía de la reglamentación.*

Art. 20. — El o los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones:

l) *Las demás que le atribuya la Comisión Federal de Zonas Francas por vía de la reglamentación.*

Art. 36. — No regirán en la zona franca restricciones a las operaciones en divisas, títulos, valores, dinero y metales preciosos, *salvo las que, con carácter general dicte o haya dictado el Banco Central de la República Argentina.*

3

Solicitada por el señor senador Solana

Territorio Aduanero

Es el ámbito en el cual se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a la introducción y salida de mercaderías.

En nuestro territorio nacional coexisten en la actualidad dos territorios aduaneros.

Ello porque existen dos regímenes arancelarios y de prohibiciones diferentes.

Uno es el Territorio Aduanero General, cuyo ámbito espacial es el territorio de la República.

El otro es el Territorio Aduanero Especial o Área Aduanera Especial, creado en 1972, que es el régimen vigente en Tierra del Fuego.

Zona franca

Con la finalidad de desarrollar el comercio exterior, los Estados, constituyen un ámbito dentro de su territorio en el cual la entrada y salida de mercaderías no está gravada, ni alcanzada por prohibiciones de carácter económico.

Este ámbito se denomina zona franca y se distingue de los conceptos antes señalados: Territorio Aduanero General y Territorio Aduanero Especial.

En el primero, rige un sistema arancelario único y uniforme; en el segundo, se establece un nivel arancelario menor al que rige en el territorio aduanero general.

En la zona franca, en principio, no existe arancel alguno.

Con mayor precisión, se la puede definir como el lugar en el cual las mercaderías ingresan y permanecen sin que estén obligadas a cancelar los tributos al comercio exterior y en algunos casos también se las exime del resto de los impuestos nacionales y provinciales.

Concretamente, los beneficios que reciben quienes operan en zonas francas, pueden ser:

— Tributarios al comercio exterior: exenciones, reducciones, diferimientos.

— Impositivos en general: reducción o eliminación de impuestos directos e indirectos de toda jurisdicción.

— Desregulatorios del comercio exterior: eliminación de restricciones tales como cuotas, prohibiciones y ciertos controles.

— Desregulatorios en otros mercados: laboral, financiero, cambiario y de servicios (energía, transporte, telecomunicaciones, seguros) y otros.

La salida de mercadería del territorio aduanero del Estado hacia un área franca del mismo Estado constituye una exportación, como si se dirigiera al extranjero.

Recíprocamente, el ingreso al territorio aduanero del Estado de mercadería procedente de un área franca del mismo Estado, constituye una importación, tal como si la mercadería proviniera de un país extranjero.

Clasificación de las zonas francas

En el área franca, la mercadería puede ser objeto de almacenamiento, comercialización, utilización y consumo, así como también de transporte, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o beneficio.

No obstante lo mencionado, el área franca puede limitarse para fines de almacenamiento o de comercio.

El artículo 597 define al área franca comercial como aquella en la cual, además de las operaciones y actos descriptos anteriormente, la mercadería puede ser comercializada, utilizada o consumida.

Según lo expresado precedentemente en el Código Aduanero, las zonas francas podrían clasificarse en comerciales, de almacenamiento y las industriales.

En la práctica, se han esbozado los siguientes tipos:

- Las comerciales, cuyas operaciones se limitan a la presentación y conservación de las mercaderías a exportar;
- Las de distribución, frecuentes en los puertos de países desarrollados (Hamburgo, Nueva York, Copenhague, etcétera);
- Las industriales, o de fabricación, que fomentan la industrialización de materias primas importadas para su exportación.

El área franca debe ser establecida por ley.

Así lo dispone el artículo 591 del Código Aduanero.

Por otra parte, la exigencia de una ley, se basa en el artículo 67, incisos 1, 9, 12 y, en especial, 16 de la Constitución Nacional.

Área Aduanera Especial o Territorio Aduanero Especial

Constituye un ámbito que reviste las siguientes características distintivas:

1. — El nivel arancelario debe ser inferior por lo menos en un 25 % al que rige en el territorio aduanero general.

En el proyecto se establece que los tributos serán de un 15 % de los que rigen en el territorio aduanero general, es decir, un 85 % menos.

2. — Tiene un régimen de excepción con respecto a las prohibiciones de carácter económico.

El área aduanera especial tiene una situación intermedia entre la del territorio aduanero general —en el que se aplica el régimen general de tributos y prohibiciones.

Y la del área franca —en donde la introducción y salida de la mercadería no está sujeta al pago de tributos ni a la aplicación de prohibiciones de carácter económico—.

Se trata de tres ámbitos aduaneros diferenciados.

De modo tal que:

La introducción al área aduanera especial de mercadería procedente del territorio aduanero general o de una zona franca nacional, constituye teóricamente una importación, es decir, como si la mercadería procediere del extranjero. La mecánica con respecto a este tratamiento consiste en el "libramiento" de la mercadería que trae aparejada la nacionalización de la misma que tiene como consecuencia la eximición del pago de tributos.

La extracción del área aduanera especial de mercadería con destino al territorio aduanero general o a una zona franca nacional, constituye una exportación, como si la mercadería se destinara al extranjero, aplicándose el mismo tratamiento de "libramiento" expresado ut supra.

La necesidad de crear áreas aduaneras especiales, guarda relación con las necesidades de fomento de un lugar determinado.

El área aduanera especial debe ser establecida por ley, por los mismos motivos expresados para la creación de zonas francas.

El código regula diversas situaciones relativas a la circulación de mercaderías en estas áreas, a saber:

— Importación para consumo: de mercaderías originarias del área aduanera especial, desde el territorio aduanero nacional, puede estar exenta del pago de los tributos que gravan la importación para consumo.

— Mercadería originaria y producida en el área y destinada al extranjero o a una zona franca nacional: el Poder Ejecutivo puede establecer un régimen de estímulos, que puede comprender los beneficios de drawback o reembolsos.

Esto constituye una diferencia con las zonas francas industriales, en las cuales el único estímulo contemplado para éstas, es el régimen de reintegros.

Legislación aplicable a las zonas francas y áreas aduaneras especiales

Cabe tener presente que a ambos instrumentos les son aplicables, en primer término, la ley especial de creación.

En segundo lugar, deben aplicarse las disposiciones contenidas en los capítulos correspondientes del Código Aduanero.

Estas últimas conforman un estatuto de aplicación básica de alcance supletorio, destinado a precisar los principios y notas esenciales que caracterizan a la institución así como cubrir vacíos en los casos de creación futura de áreas o zonas.

Y en tercer lugar, en todo lo que no estuviere reglado en las disposiciones anteriores, deberán aplicarse las normas generales de la legislación aduanera relativas a la importación y a la exportación de mercaderías, incluidas las de carácter represivo, siempre que fueren compatibles con el régimen propio de estos ámbitos.

Creación de zonas francas y áreas aduaneras especiales en el proyecto en revisión

Conforme con el artículo 2º, se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer las siguientes zonas francas:

Una zona franca por provincia. Para este cómputo se deberán incluir las ya existentes en las provincias. Podrán crearse, por lo menos 20, si descartamos las ya creadas en La Plata, Villa Constitución y Concepción del Uruguay, las cuales no se han implementado hasta el presente. Totalizarían 23 zonas francas.

Cuatro zonas francas en todo el territorio nacional, que se adicionan a las anteriores. A localizarse en regiones geográficas de situación económica crítica y/o vecindad con otros países.

Zonas francas comerciales, a localizarse en ciudades o pueblos de provincias fronterizas con países limítrofes que tengan zonas francas establecidas en sus territorios. Se instrumentará mediante convenios con las provincias. No se establece un tope máximo por provincia, o sea, que cada provincia, con las condiciones requeridas, podrá por lo menos crear una como mínimo.

Dichas provincias serían: Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Tierra del Fuego.

O sea, 17 zonas francas más, teniendo en consideración una zona franca por cada una de las provincias mencionadas, dejando constancia que el proyecto no establece un máximo. De lo que se infiere que podrían establecerse aun más de 17 zonas francas.

Resumiendo: la norma que se analiza permite la creación de 44 zonas francas, de acuerdo a lo que se ha estimado en los apartados precedentes, pudiendo incrementarse este número.

El artículo 9º habilita las operaciones de comercio "al por menor" en las zonas francas fronterizas con países limítrofes que también posean zonas francas en algún lugar de su territorio.

No obstante esta habilitación para ejercer las referidas operaciones al por menor observa una excepción a la cual Neuquén debe prestar máxima atención.

La excepción contenida en el artículo 9º consiste que se podrán autorizar actos al por menor en cualquier lugar del territorio de una provincia, con la condición de que el estado provincial tenga una densidad de población inferior a dos (2) habitantes por kilómetro cuadrado.

De esta forma se benefician de la excepción sólo las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Sería aconsejable entonces intentar la modificación de este artículo a los efectos de elevar el máximo de densidad poblacional exigido para acceder al beneficio.

Según los datos del último Censo Poblacional (año 1991) que obran en nuestro poder, Neuquén tiene una densidad de cuatro coma un (4,1) habitantes por kilómetro cuadrado por lo cual deberíamos proponer se eleve el máximo de dos (2) habitantes por kilómetro cuadrado a cinco (5) habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente este aumento beneficiará a otras provincias, además de Chubut y Santa Cruz; ellas son: La Rioja (2,5 habitantes por kilómetro cuadrado); Río Negro (2,5 habitantes por kilómetro cuadrado); San Luis (3,7 habitantes por kilómetro cuadrado) y Tierra del Fuego (3,2 habitantes por kilómetro cuadrado).

Territorio Aduanero Especial o Area Aduanera Especial

En ese sentido, se establece un territorio aduanero general denominado Puna Argentina, en el artículo 47 del proyecto.

En la segunda parte de dicho artículo se prevé la creación de otros territorios aduaneros especiales en ciudades o pueblos de provincias o regiones fronterizas con países limítrofes, puertos o vías navegables.

Las provincias o regiones en las cuales se localizaran estos territorios deberán poseer zonas francas, no existiendo límites en cuanto al número y límite de creación.

Para el territorio creado en virtud de la norma señalada, rigen las normas que sobre el particular establece el Código Aduanero.

Con la peculiaridad, dispuesta en el artículo 49, que establece que los tributos a la importación y a la exportación para consumo, serán de un 15 % del que rige en el territorio aduanero general.

Esto es, un 85 % menos al monto vigente en el territorio aduanero general.

Se debe agregar a este proyecto una norma que ampare y fomente la posibilidad laboral del ciudadano argentino, ya que en los tiempos que vivimos el "trabajo es el más preciado de las capitales del ser humano", esto se vería plasmado en el proyecto de marras incluyendo un porcentaje mínimo de personal argentino a emplear tanto en las zonas francas como en los territorios aduaneros especiales a crearse.

Este porcentual no podría ser inferior al 80 %.

4

Solicitada del señor senador Branda

Señor presidente:

El tema que hoy nos ocupa tiene para mi provincia connotaciones especiales que quiero resaltar brevemente.

Se trata de una legítima aspiración de la sociedad formoseña en su conjunto. Es una cuestión que ha lo-

grado embanderar por igual a los más diversos sectores de la actividad productiva, hecho que se considera casi inédito en nuestro medio.

Y es que la zona franca para la provincia de Formosa es la herramienta idónea para el crecimiento y de la que se valdrán las fuerzas vivas: empresarios y trabajadores, inversionistas y consumidores. Es un nuevo camino, el que empezaremos a transitar en el entendimiento de que nos conducirá definitivamente a la integración regional. Sabemos también que ello debe ser el producto de un esfuerzo común, de una conjunción de voluntades decididas a construir nuevas realidades y genuinas oportunidades para disipar las sombras de desconfianza y pobreza que agobian a los pueblos.

Así lo entendieron los políticos que tienen representación en la Cámara de Diputados provincial, los legisladores nacionales, los empresarios representados por la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Todos trabajamos mancomunadamente en pos de un solo objetivo: ganar la dura batalla contra la pobreza.

Y es que este proyecto conlleva perspectivas sumamente alentadoras: Formosa está inmersa en una posición geopolítica privilegiada, desde el punto de vista del Mercosur y desde el proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Dos emprendimientos integracionistas. Con este proyecto se facilitará la consolidación del Mercado Común de América del Sur, aprovechando la potencialidad de consumo derivado de la extensa frontera con los países signatarios del acuerdo, desaprovechadas hoy por barreras remanentes de políticas proteccionistas.

Por otra parte, la ubicación del puerto de Formosa, en el tramo medio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, posibilitará la plena utilización de esta vía para la entrada y salida en insumos, materias primas y productos con valor agregado y costos competitivos hacia mercados internacionales.

Con este proyecto aspiramos a lograr la plena y racional utilización de nuestras riquezas naturales, agrícolas, ganaderas o energéticas, y una fuente genuina de ingresos, recursos y de trabajo permanente.

Y tiene la característica de poner en pie de igualdad a todas aquellas provincias que deseen aprovechar sus posibilidades, sin obligación ni condicionamiento para las mismas, facilitando la mutua cooperación entre los niveles nacional, provincial y municipal, precisando los derechos y obligaciones que deberán plasmarse en el convenio a celebrar con la Nación.

En general, concebimos este proyecto como una herramienta que aportará el Parlamento en consonancia con la política económica de apertura en curso; como una herramienta en el marco de transformación y desarrollo que necesitamos todos los argentinos.

Será la expresión de una firme decisión política de brindar a las provincias la posibilidad de poner en funcionamiento en sus territorios un ámbito donde se logre un estímulo a la inversión, al desarrollo comprometidos y garantizando a las industrias asentadas una permanencia en el tiempo.

Las denominadas áreas o zonas francas no constituyen un instrumento inédito en el comercio internacional, pues se encuentran antecedentes de las mismas ya por el siglo XV.

Las mismas fueron concebidas como un instrumento para atraer el tráfico comercial y desarrollar servicios provenientes del ejercicio de comercio, generando riquezas en el territorio donde se asentaban.

Asimismo nuestra legislación reconoce la existencia de las mismas. La ley 5.142, del año 1907, autorizó al Poder Ejecutivo nacional a admitir en el puerto de La Plata o en una porción determinada de él una zona franca.

Córrrespondió a este gobierno la iniciativa de reglamentar la ley citada, definiendo su área física, funciones y autoridades; otorgando pues plena vigencia a una norma que esperó décadas para concretarse.

Y llega a este Senado el presente proyecto por el que se faculta al Poder Ejecutivo nacional para crear

en el territorio de cada provincia una zona franca, aceptando y resumiendo innumerables propuestas de legisladores que bajo diversas formas imaginaron esta entidad para sus provincias, no pudiendo dejar de citar la que mi comprovinciano, el extinto senador Samudio Godoy presentara en el curso del año 1992.

No me cabe duda de que la inserción de nuestro país en el mundo actual sólo se podrá afianzar a partir de actividades comerciales e industriales orientadas hacia la expansión de nuestras exportaciones y la posibilidad de importar bienes de capital que permitan una efectiva instalación de industrias y desarrollo de la infraestructura, con su consiguiente incremento en la actividad económica.